

BOLETÍN DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA

FUNDADA EN BARCELONA
EN AGOSTO DE 1888

DIRECCIÓN: PIAMONTE, NÚM. 2.
CASA DEL PUEBLO — MADRID

AFILIADA A LA F. S. I.
DE AMSTERDAM

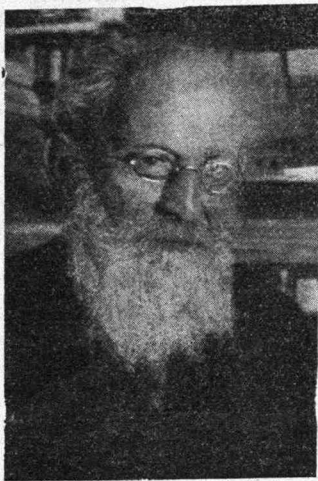
FRANQUEO CONCERTADO

Frente a un escrito de la Confederación Patronal Española

La Confederación Patronal Española, integrada, según parece, por 70.000 patronos de todos los ramos de la industria nacional, cifra que nos interesa recoger para nuestro comentario, ha entregado al jefe del Gobierno un escrito, reproducido textualmente en algunos diarios, creyendonos obligados a salir al paso de las aseveraciones falsas, exageradas condolencias y soluciones en absoluto inadmisibles que se propugnan a lo largo del citado escrito, fijando ante él la posición de la Unión General de Trabajadores. Para mayor claridad de nuestra réplica adoptamos el mismo orden de exposición que sigue el escrito patronal.

Excesiva rapidez en la legislación social. — Nuestros patronos se lamentan de la «vertiginosa rapidez con que se produce en materia de legislación social el ministerio de Trabajo». Este mismo concepto se ha expuesto en las Cortes por adversarios políticos del Gobierno de la República, y resulta infinitamente curiosa la coincidencia de estos patronos sedicentes apolíticos, con quienes más politiquen, y de los líderes del radicalismo, con quienes se afirman campeones de la conservación social. No les arredra a los patronos pensar si está justificada o no la *vertiginosa rapidez* a que aluden, pues, realmente, si ahora el paso es acelerado, a nuestro juicio, esto es la consecuencia de la esterilidad experimentada en el campo de la legislación social du-

rante los años anteriores a la proclamación de la República. ¿Acaso creían los patronos que los tiempos de reacción iban a ser eternos? Si ahora se va de prisa, como dicen ellos, ninguna responsabilidad alcanza a los trabajadores, sino a los mismos patronos, quienes tercamente ponían siempre el veto al progreso, diciendo no a cuantas reivindicaciones formulaba la clase trabajadora. Vean cuán distanciados nos encontramos de sus puntos de vista. A nosotros no nos preocupa lo que se ha hecho, sino lo mucho que queda por hacer para que el nivel de vida de los asalariados españoles esté a la altura del que goza el obrero industrial inglés, alemán o francés, ya que estamos cansados de oír, no sin fundamento de razón, cuán desleal es la competencia que la industria española hace a la de los demás países, basándose precisamente en la situación de inferioridad en que viven los trabaja-



EDUARDO BERNSTEIN,
hombre de lucha y pensador, que honró
el periodismo internacional.

dores españoles. Y cuando en lo que hay necesidad de pensar es en la formaasequible para España de establecer en nuestro país toda la legislación social, ya vieja en los demás, se les ocurre decir a los patronos que se ven sorprendidos «con nuevos avances en materia de legislación social, los cuales, si son juzgados desde el punto de vista de la posición que ocupa quien los dicta, tienen una explicación lógica y natural; pero que quizá no puede ser compartida por quienes en un terreno imparcial

sientan la responsabilidad de la dirección del país, inspirada siempre en el bien general».

Este ataque va directo contra nuestro camarada Francisco Largo Caballero, actual ministro de Trabajo, queriendo suponer que si otra persona ocupara el ministerio los avances en materia de legislación social serían más lentos o no se producirían de ninguna manera.

Queremos advertir a los señores patronos que se equivocan en absoluto, y que al escribir las líneas que reproducimos se han colocado lejos de la realidad social española. Sepan los patronos y sepa la opinión pública en general que, si bien sabemos apreciar la labor social que se ha realizado, queremos afirmar de la manera más rotunda: primero, que los avances en materia de legislación social han de continuarse necesariamente, y segundo, que en manera alguna la Unión General de Trabajadores consentirá que lo establecido pueda modificarse, desvirtuando su alcance en perjuicio de los trabajadores.

Si los patronos sueñan que un cambio de personas en la gobernación del país puede producir un movimiento en sentido de retrotraer las cosas a la misma o mejor situación en que acostumbraban a vivir los patronos españoles en los tiempos de la monarquía, se equivocan, porque la clase trabajadora es mayor de edad y no consentirá de ninguna manera burla semejante. Convénzanse los patronos de que han terminado los buenos tiempos de hacer y deshacer a su antojo, y que si no podemos, por ahora, acabar con la miseria y con la explotación que sufre la clase trabajadora, queremos proceder y actuar para que la miseria y la explotación se atenúen, mientras logramos nuestras aspiraciones.

Jurados mixtos: Su actuación. — No se hallan perezosos los patronos en los calificativos, más o menos duros, cuando dicen que los Jurados mixtos se están convirtiendo actualmente en un «semillero de desavenencias». Cualquiera diría que las relaciones entre patronos y obreros eran antes de existir los Jurados mixtos cordialísimas. ¿Es que entonces no había luchas y no existían desavenencias? Sin duda, no lo han tenido en cuenta los patronos, porque les convenía ocultarlo, ya que, en realidad, con la actuación de los Jurados mixtos, con el establecimiento de contratos de trabajo, dando forma jurídica a los convenios establecidos entre patronos y obreros, tienen menos facilidades para burlarse de la clase trabaja-

dora, como estaban acostumbrados a hacerlo.

Buscamos en el escrito en qué consiste este semillero de desavenencias y no lo hemos encontrado. Queríamos dar también con el origen que puedan tener dentro de los Jurados mixtos estas desavenencias y nos hallamos por toda demostración con un ataque violento contra la forma en que son designados los presidentes y secretarios de los Jurados mixtos. «No hay asunto de que conozcan los Jurados mixtos que casi de un modo general sea resuelto a favor de los patronos, debido al voto dirimente de la presidencia, que siempre o casi siempre lo otorga a favor del obrero.» ¿Y esto les extraña a los señores patronos? Lo que convendría averiguar es si la actuación del presidente, cuando dirime en favor del obrero, se aparta de las leyes o no procede con verdadera justicia; porque si no es así, como suponemos, es natural que en sus resoluciones no se inclinen los presidentes a favor de los patronos. Lo rigurosamente cierto es que los patronos han vivido siempre con la arbitrariedad por norma, haciendo víctimas a los obreros de toda suerte de venganzas, injusticias y atropellos. Hora es ya de hacer un poco de justicia y de que los trabajadores sean respetados un poco más de como lo han sido hasta ahora.

Contra los Jurados mixtos arremeten los patronos, pidiendo poco menos que su sustitución por el Tribunal industrial. Y esta propuesta, si se trocase en resolución, sí que sería un semillero de desavenencias y de discordias, que daría lugar a que en los sitios donde los obreros tuviesen una organización fuerte, después de pasar por el Tribunal industrial, recurrieran de una manera general a la huelga para defender sus intereses. Lo mismo que sucedía antes cuando no funcionaban los Jurados mixtos.

También se lamentan los patronos de la labor inspectora que se asigna a los Jurados mixtos, apareciendo aquí realmente todo el plan reaccionario del escrito; plan que desmiente las frases rimbombantes y los halagos más o menos velados que figuran en el escrito de referencia. Conviene advertir que la labor inspectora de los Jurados mixtos se hace, o debe hacerse, por patronos y obreros; y en realidad, sólo los malos patronos, aquellos que se afanan en burlar la legislación social, aquellos que no reconocen la ley en su propósito de explotar con la mayor intensidad posible a los obreros, son los que pueden temer la labor inspectora de los Jurados mixtos. ¿Es que

los 70.000 patronos que constituyen la Confederación Patronal Española están conformes con ese escrito? ¿Es que todos niegan la eficacia que pueda tener la labor inspectora de los Jurados mixtos, que, en resumidas cuentas, no es más sino un auxiliar de la Inspección del Trabajo? Porque estos mismos patronos que dicen renegar de la labor inspectora de los Jurados mixtos, son igualmente contrarios a que las Delegaciones locales del Consejo de Trabajo realicen ninguna labor inspectora, fiándola en el inspector del Trabajo. Esa inspección no puede ser eficaz, por ser materialmente imposible que un inspector, ni dos ni tres puedan llegar a ejercer un control severo y completo en poblaciones industriales de alguna importancia.

En resumen, estos dirigentes patronos caracterizan muy bien a su clase. Se oponen al establecimiento de leyes y cuando éstas están promulgadas no quieren aplicarlas; y porque el Poder legislativo toma medidas a fin de que entre los mismos patronos no exista una competencia desleal, he aquí que los dirigentes de la Confederación Patronal Española protestan de ello, cuando en realidad debieran apeteecer que las leyes promulgadas sean cumplidas por todos.

Por lo demás, se pide también la «exigencia de las responsabilidades determinadas en la ley para las trasgresiones de los acuerdos firmados en los contratos de trabajo». Bien dice el escrito que esto lo piden igualmente para patronos y obreros; pero ¿cuántos de los 70.000 patronos de la Confederación Patronal Española han burlado los contratos de trabajo, en detrimento de otros patronos que los cumplen? ¿Cuántos patronos en estos últimos tiempos no han atropellado el derecho de asociación, negando el trabajo y, por consiguiente, el derecho a la vida a los obreros por estar afiliados en los organismos de la Unión General de Trabajadores? No hablemos, pues, de exigir responsabilidades, ya que el día que esto se pueda llevar a la práctica de una manera eficaz quienes más tendrán que lamentarlo serán los patronos; y precisamente para ir conociendo a los que no se avienen ni pueden avenirse con los tiempos modernos es por lo que somos partidarios de que exista la inspección por parte de los Jurados mixtos, pareciéndonos poca toda la inspección que pueda llegar a efectuarse.

Dualidad de acción en el elemento obrero. — Dice el escrito de los patronos: Para nadie es un secreto que el llamado proble-

ma social discurre en España por dos cauces distintos: Uno el de los Jurados mixtos, que por mandato de la ley establecen las bases de trabajo. Otro el de las tácticas sindicalistas, que por la acción directa tratan de imponer las suyas.» Con esto parece ser que los dirigentes de la Confederación Patronal Española descubren el Mediterráneo. Cualquiera diría que la existencia de dos o más tendencias en el seno del movimiento obrero, que somos los primeros en lamentar, sólo existen en España, cuando la realidad es que no hay unidad de criterio en ningún país, y jamás hemos visto formular un ataque a la legislación social de una manera tan peregrina como lo hacen nuestros patronos, dando a entender que, por el hecho de no haber unidad de criterio entre los trabajadores, no pueden surtir sus efectos tales o cuales leyes sociales. Pero es que estas divergencias de tácticas y de ideologías existen dentro de la misma clase patronal. Nos parece tan ridículo sacar a colación esta disparidad de criterio, tomándolo como fundamento para oponerse a la legislación social, que no consideramos pertinente insistir más sobre ello.

Los atentados a la producción. — Termina el escrito patronal lamentándose de los atentados, coacciones y violencias de que son objeto los elementos patronales y los establecimientos industriales y mercantiles que poseen. Podríamos decir simplemente que se trata de una cuestión de orden público que no nos afecta resolvería; allá las autoridades gubernativas.

Pero de todo lo que ocurre, de las violencias que lamentan ellos y condenamos nosotros, en gran parte son responsables los patronos, porque han educado en la violencia y en la arbitrariedad a la clase trabajadora, y hoy son víctimas de la educación que han practicado. Pero ¿de qué se lamentan los patronos? ¿Es que no son frecuentes los casos en que muchos de entre ellos alientan a los anarcosindicalistas, ora prefiriéndolos a los otros, ora pactando directamente con ellos, prescindiendo del Jurado mixto, ora acuciándoles contra nosotros? ¿De qué se lamentan?

Para terminar, queremos decirles a los patronos, al Gobierno y a la opinión pública que la Unión General de Trabajadores está ansiosa de que la legislación social se complete con aquellas medidas, especialmente sobre el terreno de los seguros sociales, que coloquen a nuestros obreros a la altura en que deben estar; y que del mismo modo apetece que las condiciones de

salarios eleven el nivel de existencia de la clase obrera, al efecto de aumentar su poder de consumo, creando fuentes de riqueza en el país.

Sea cual fuere la persona que esté en el ministerio de Trabajo, la Unión General

de Trabajadores no ha de permitir que abierta o embozadamente se burle la legislación social establecida; y lejos de paralizarse la obra legislativa, piensen los patronos que ésta debe seguir el curso normal que las circunstancias exijan.

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

COMISIÓN EJECUTIVA

Fernández de la Hoz, 51 · MADRID

Teléfono 43040

6 de enero de 1933



A las organizaciones de la U. G. T.

ESTIMADOS COMPAÑEROS:

La Comisión ejecutiva de esta Unión General de Trabajadores ha examinado, en su reunión celebrada últimamente, dos cuestiones de importancia extraordinaria para el proletariado, planteadas actualmente en el terreno nacional e internacional, que exigen la intervención inmediata de nuestras organizaciones: EL ATAQUE DE LA CONFEDERACIÓN PATRONAL ESPAÑOLA DE NUESTRO PAÍS A LA OBRA LEGISLATIVA DEL MINISTRO DE TRABAJO, CAMARADA LARGO CABALLERO, Y LA NECESIDAD DE REDUCIR A CUARENTA HORAS DE TRABAJO LA JORNADA SEMANAL ACTUALMENTE ESTABLECIDA.

En otro lugar del presente número hallarán nuestros compañeros el escrito contestación de la Unión General de Trabajadores al dirigido por la Confederación Patronal al señor presidente del Consejo de ministros y publicado íntegro o extractado por la prensa. Sin embargo, la Comisión ejecutiva estima que las organizaciones pertenecientes a la Unión General tienen que salir al paso de este ataque infundado de la clase patronal española, demostrando desde la tribuna que ni los patronos tienen razón para producirse en la forma que lo hacen, ni los trabajadores están dispuestos a tolerar que se paralice la obra legislativa del ministerio de Trabajo, sea quien fuere el titular del mencionado departamento.

En otro lugar del presente número también publicamos íntegro el informe presentado a la Comisión ejecutiva por la delegación obrera española en la Conferencia tripartita internacional, celebrada recientemente en Ginebra. Basta leer dicho informe para hacerse cargo de la excepcional importancia del asunto abordado en la Conferencia citada: se trata de reducir a cuarenta horas de trabajo la jornada semanal, con el propósito altruista, humanitario, irreprochable, por consiguiente, de procurar ocupación a una parte considerable de los obreros que actualmente carecen de ella. En realidad, ésta, y el mantenimiento de la paz son actualmente las consignas para el trabajo combinado de cuantas organizaciones integran la Federación Sindical Internacional, siéndolo, por consecuencia, de nuestra querida Unión General de Trabajadores.

Nuestras organizaciones todas, puestas de acuerdo con los organismos nacionales de industria a que pertenecen, o con las enclavadas en cada localidad, tienen el deber, que estamos seguros sabrán cumplir con entusiasmo, de organizar actos públicos para manifestarse contra la actitud patronal de nuestro país y en defensa de la obra legislativa del ministro de Trabajo, y por la reducción inmediata de la jornada semanal a cuarenta horas.

Fraternalmente vuestros y de la causa obrera.

Por la Comisión ejecutiva:

V.º B.º:

El presidente,

JULIÁN BESTEIRO.

El secretario,

TRIFÓN GÓMEZ.

EDUARDO BERNSTEIN

En el último número del BOLETÍN dimos cuenta del fallecimiento del insigne camarada Eduardo Bernstein, ocurrida poco tiempo después de haber celebrado el Socialismo alemán los setenta años del tan querido como sabio teórico del movimiento obrero internacional.

Como rasgos característicos de su larga vida de militante podemos señalar dos, aparte, naturalmente, su esfuerzo, desde la edad juvenil puesto al servicio de la causa obrera.

Nos referimos a su controversia con Kautski sobre el marxismo, culminando en su obra *Socialismo científico y socialdemocracia práctica*, su revelación como escritor fecundo en el movimiento. Esta obra, dejando de lado su tesis revisionista, rectificada más tarde por él mismo al abrazar de nuevo las teorías de Marx, contiene — hablamos de memoria — un capítulo admirable sobre las funciones que, a su juicio, revertían en la actividad peculiar de los Sindicatos obreros y de las Cooperativas, vaticinios confirmados plenamente por la evolución de las organizaciones sindicales. Baste decir que el grado de perfección, así como la acción múltiple y profunda a que han llegado los Sindicatos obreros en casi todos los países fue previsto por Bernstein hace más de treinta años.

Y es de notar que no obstante pensar de manera tan distinta de Kautski y pelearse públicamente con él, los dos colaboraron juntos en la dirección de la revista que servía de propaganda a sus teorías opuestas.

El otro rasgo de su vida, que le enaltecía aún más, fué su actitud contraria a la guerra, combatiendo el imperialismo y el militarismo con valentía y serenidad ejemplares, sorprendiendo a cuantos le consideraban cual redomado reformista e incapaz de una acción viril.

Socialista de corazón, y pensando por cuenta propia, huyendo de las fórmulas estereotipadas, era Bernstein un socialista cabal.

La Internacional Socialista ha perdido con su muerte uno de sus mejores servidores.

E. S.

Para O Comercio d'Porto

Muchas son las falsedades que se han publicado en la prensa extranjera a raíz de los sucesos ocurridos en nuestro país durante la primera quincena de enero. Entre lo más grotesco y falso figura la correspondencia enviada desde España a El Comercio de Oporto.

La fantasía, o algo peor, del corresponsal español de dicho diario ha tomado rienda suelta, y, sin

pararse en ceros, asegura rotundamente que la Federación Anarquista Ibérica y la Confederación Nacional del Trabajo tienen dos millones de afiliados, y como quiera que alguien ha dicho que España en 1933 acentuará su marcha hacia la izquierda, el listo corresponsal deduce que, fatalmente, tendremos a no tardar el comunismo libertario.

Sería cosa de echarnos a reír ante esas liberalidades periodísticas si ello no tuviera un fondo reaccionario y monárquico que a El Comercio de Oporto le conviene divulgar, él sabrá por qué, aunque nos lo suponemos. Suposición que no es de generosidad por añadir voluntariamente al número de anarquistas españoles dos o tres ceros de más sino en lo que podrá valer esta propaganda reaccionaria de embustes.

PRO ROTATIVA

Estimados compañeros: El Socialista, órgano del Partido Socialista, se ha visto en la precisión de adquirir, para poder atender sus necesidades, una máquina rotativa, cuyo coste excede, en bastante, del medio millón de pesetas.

No creemos que sea preciso enumerar lo que para la clase trabajadora, y sobre todo para la organizada en nuestras filas, representa el poder disponer de un medio de difusión que le permita salir al paso de cuantas campañas se realizan contra nuestra organización en periódicos que en una u otra forma no hacen más que defender el capitalismo, aun cuando en momentos determinados puedan aparecer como defensores del proletariado.

Igualmente no creemos decir una cosa nueva al indicaros que El Socialista no dispone de recursos económicos suficientes para hacer frente a lo que supone la adquisición de dicha máquina, por cuanto no se trata de un periódico al servicio de una Empresa, ni en las filas socialistas hay elementos económicos capaces de realizarlo por sí solos. Ha de ser, ahora como siempre, la aportación de la clase trabajadora la que logre dar cima a este empeño.

La Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores considera una obligación moral suya el prestar este apoyo al órgano proletario, y, por ello, además de votar un donativo de 2.000 pesetas, requiere el concurso de todas sus Secciones para que cada una, en la medida de sus posibilidades, aporte la máxima cantidad a la suscripción pro rotativa de El Socialista.

Confianza en que así lo haréis, queda vuestro y de la causa obrera, TRIFON GÓMEZ, secretario adjunto.

Los donativos deben dirigirse, acompañados de carta, al administrador de El Socialista, calle de Carranza, 20.

Hacia la semana de cuarenta horas

INFORME DE LA DELEGACION OBRERA ESPAÑOLA EN LA CONFERENCIA TRIPAR- TITA CELEBRADA EN GINEBRA DURANTE LOS DIAS 10 AL 25 DE ENERO DE 1933

Se trata, efectivamente, de informar a los trabajadores españoles, a través de las organizaciones pertenecientes a la Unión General, de cómo se han situado los tres grupos (gubernamental, patronal y obrero), en orden y relación al único punto inserto en el orden del día de esta importante Conferencia; de los resultados obtenidos al finalizar las tareas de la misma; de la tramitación probable que seguirá el asunto tratado, como también de la actitud adoptada por la delegación obrera de nuestro país en las reuniones preliminares celebradas por los representantes de las organizaciones pertenecientes a la Federación Sindical Internacional, primero, y por los representantes obreros, sin distinción de organizaciones, después.

Este informe tiene, por consiguiente, un carácter objetivo, a fin de que por las organizaciones de la Unión General y por sus afiliados se pueda conocer y enjuiciar la actuación de sus representantes, seguir con elementos de juicio el curso del asunto relativo a la reducción de la jornada a cuarenta horas semanales y, lo que consideramos más importante todavía, trabajar con eficacia para contribuir con el resto de la clase trabajadora, sin distinción de países, a conseguir tan preciada aspiración en el mundo obrero.

Quedan, pues, las páginas de este BOLETÍN dispuestas a publicar, en números sucesivos, trabajos encaminados a fortalecer la tesis sostenida por el grupo obrero, tratando con la amplitud necesaria de los diversos aspectos que ofrece la reducción de la actual jornada de trabajo, ayudando y orientando la campaña de propaganda verbal a que por conveniencia y por deber habrán de entregarse los organismos nacionales de industria que integran nuestra Central sindical, juntamente con sus organismos regionales, provinciales y locales.

Intervención de la Federación Sindical Internacional.

Como de costumbre, la Federación Sindical Internacional convocó para el día 8 del mes de enero, dos fechas antes de reunirse el Pleno de la Conferencia, a los delegados obreros representantes de organizaciones pertenecientes a dicha Internacional, al objeto de fijar la posición que debían adoptar los delegados obreros de referencia en la reunión que más tarde tenía que celebrar el grupo obrero, sin distinción de organizaciones, y, por consiguiente, la posición que convenía adoptar al mismo en el Pleno de la Conferencia.

En esta ocasión, la Federación Sindical Internacional tenía motivos justificados para proceder

con extraordinario entusiasmo, porque, en realidad, la propuesta de reducir a cuarenta horas semanales la jornada de trabajo fué hecha por representantes de la mencionada Federación a la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra el año 1932; aunque sea cierto que el representante del Gobierno italiano insistió en la necesidad de tratar el asunto, según carta enviada al presidente del Consejo de administración, en el mes de julio del mismo año.

Conviene que los trabajadores españoles conozcan este antecedente para que puedan aseverar en todo momento que si a estas horas se discute, en medios internacionales tan autorizados como los de la Oficina Internacional del Trabajo, la posibilidad de reducir la jornada semanal a cuarenta horas, no se debe a la iniciativa de un Gobierno fascista, y sí a la propuesta presentada oportunamente por la Federación Sindical Internacional, desde luego mucho antes de enviar su carta el representante del Gobierno italiano.

Actitud de la delegación obrera española.

Expuesto que fué el objeto de la reunión por el presidente de la Federación Sindical Internacional y oídas las explicaciones de los representantes del grupo obrero en el Consejo de administración de la Oficina, la delegación obrera española, creyendo interpretar el pensamiento y los deseos de sus representados, fijó su actitud en los siguientes términos:

a) El grupo obrero debe procurar que la Conferencia adopte el acuerdo de proponer a la que se celebrará durante el mes de junio próximo un proyecto de convención durable mientras los progresos técnicos no obliguen a una nueva reducción de la jornada de trabajo.

b) La jornada de trabajo semanal de cuarenta horas debe ser considerada como máxima; pudiendo establecer hasta cuatro equipos de seis horas diarias en las industrias de trabajo continuado.

c) Debe procurarse trabajar el menor número posible de horas extraordinarias, por cuyo motivo el grupo obrero votará toda suerte de restricciones.

d) El campo de aplicación no debe reducirse a los trabajadores de la industria, sino que debe extenderse a los trabajadores del mar y a los agricultores; y

e) La reducción de la jornada no debe ir seguida de la reducción de los salarios. Si es posible, el grupo obrero debe procurar un proyecto de convención para reducir la jornada y otro proyecto de recomendación para mantener los salarios. Si esto último no se puede conseguir, la delegación obrera española considera bastante favorable para trabajar nuestras organizaciones en los países respectivos por el mantenimiento de los salarios, no obstante la reducción de la jornada, el hecho de que la Conferencia no haga declaraciones en sentido contrario.

Esta actitud era coincidente, en líneas generales, con la expresada por delegados obreros de otros países, antes y después de haber hablado la delegación española, si bien ninguna otra defendió con mayor tenacidad la justicia de extender los beneficios de la reducción de la jornada a los trabajadores del campo.

La delegación inglesa, si bien estaba conforme con el criterio expuesto por los representantes de los demás países, defendía la conveniencia de presentar una moción a la Conferencia, sobre la que debía pronunciarse con carácter previo, respecto al mantenimiento de los salarios. Para ella, para la delegación obrera inglesa, si la Conferencia no hacía declaración expresa y por anticipado a toda otra resolución de que los salarios y demás beneficios que disfrutaban los trabajadores no sufrirían merma alguna, con motivo de la reducción de la jornada de trabajo, no merecía la pena su estancia en Ginebra y anunciaban la posibilidad de regresar a su país sin colaborar en los trabajos sucesivos de la Conferencia.

Sobre este extremo, los delegados obreros representantes de organizaciones pertenecientes a la Federación Sindical Internacional no adoptaron ningún acuerdo, no obstante haber sido discutido extensamente en las tres reuniones celebradas.

Sin embargo, se aceptó presentar en la reunión primera que celebrase el grupo obrero en pleno una proposición encaminada a que por la Oficina se realizasen los trabajos necesarios conducentes a examinar la posibilidad de reglamentar y reducir en el terreno internacional las horas de trabajo de los obreros del campo.

Reunión del grupo obrero.

Con estos antecedentes y acuerdos, se celebró la primera reunión del grupo obrero, sin distinción de organizaciones, asistiendo, por consiguiente, entre otros delegados obreros representantes de organizaciones que no pertenecen a la Federación Sindical Internacional, los representantes de las organizaciones fascistas de Italia y el secretario de la Internacional de Sindicatos cristianos, como delegado obrero de Holanda.

Sin duda por el carácter especial de esta Conferencia, no ha sido necesario revisar los mandatos o credenciales, no habiéndose presentado oportunidad para consignar su protesta, como de seguro lo hubiera hecho el grupo obrero, contra la representación de los delegados fascistas.

El grupo obrero, una vez constituido, aprobó el proyecto de reglamento que había de regir los trabajos de la Conferencia y la moción que debía presentar relativa a los trabajadores agrícolas, que si no satisfacía por completo los deseos expresados por la delegación obrera española, era en realidad cuanto se podía hacer reglamentariamente, después de los acuerdos tomados por el Consejo de administración. El texto de la moción se encuentra en el informe de la Conferencia que más adelante hallarán nuestros camaradas.

Nuevamente se planteó por la delegación obrera inglesa la cuestión relativa al mantenimiento de los salarios, mediante una propuesta cuyo texto le encontrarán también nuestros camaradas en

el informe antes citado; expresando la delegación obrera española su criterio contrario, por razones de táctica, a que la propuesta o moción de los camaradas ingleses fuera votada como ellos pretendían. El grupo obrero acordó por mayoría de votos presentar, sí, la moción para que la Conferencia la discutiera, después de terminar la discusión general sobre el punto inserto en el orden del día; reservándose el grupo el derecho de volver a examinar la conveniencia o no de retirar la propuesta una vez discutida, para evitar una votación que suponía en sentido desfavorable. A esto obedecía únicamente el criterio de la delegación obrera española: quería evitar una votación en sentido desfavorable a la propuesta del grupo obrero, máxime después de conocer el texto de la propuesta, aceptable, a su juicio, que presentaban algunos delegados gubernamentales de diferentes países, entre ellos el representante del Gobierno español.

Informe de la Conferencia.

A fin de que las organizaciones de la Unión General y la clase obrera española conozcan con la mayor exactitud la composición de la Conferencia, las opiniones sustentadas por los tres grupos en la discusión general, las propuestas y declaraciones de cada grupo, así como los acuerdos tomados por aquélla, estimamos lo más acertado publicar íntegro el informe de la Conferencia, hecho por empleados de la Oficina Internacional del Trabajo con la más absoluta imparcialidad. Informe que ha merecido la aprobación unánime de los delegados, y que dice como sigue:

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GINEBRA

INFORME DE LA CONFERENCIA PREPARATORIA TRIPARTITA PARA LA REDUCCION DE LA DURACION DEL TRABAJO

I

La Conferencia Internacional del Trabajo, en su XVI reunión (1932), en la que tomaron parte 148 delegados, adoptó por 48 votos contra 37, a propuesta del Sr. Jouhau, delegado obrero francés, una resolución por la que se invitaba al Consejo de administración de la Oficina Internacional del Trabajo a estudiar la introducción legal de la semana de cuarenta horas en todos los países industriales, a los fines de adoptar próximamente una reglamentación internacional.

Antes de que el Consejo de administración de la Oficina Internacional del Trabajo hubiese sido requerido para examinar el trámite a dar a esta resolución, el Sr. De Michelis, representante del Gobierno italiano en el Consejo de administración, había pedido, en carta de fecha 25 de julio de 1932 dirigida al presidente del Consejo, la convocatoria de una reunión especial del Consejo, con el fin de adoptar un procedimiento de urgencia que permitiese buscar la posibilidad de llegar

a proposiciones de inmediata realización en lo que se refiere a la reducción de las horas de trabajo en el plano internacional, medida considerada como medio de defensa contra el paro.

Como consecuencia de esta iniciativa, el Consejo de administración celebró una reunión extraordinaria en el mes de septiembre de 1932 en Ginebra, y en ella resolvió, por 16 votos contra 6, someter los problemas técnicos relativos a la reducción del horario de trabajo a una Conferencia preparatoria tripartita que debería ser convocada en enero de 1933 en Ginebra. Quedó decidido igualmente en esta ocasión que las conclusiones de la Conferencia preparatoria tripartita serían sometidas al Consejo de administración de la Oficina Internacional del Trabajo en su reunión de enero de 1933, para que examinase la posibilidad de comunicarlas a la próxima Conferencia económica mundial y, eventualmente, a los Gobiernos. Quedó entendido que los trabajos de la Conferencia preparatoria tripartita se referirían al conjunto de la industria, incluidas las minas, así como a la duración del trabajo de los empleados; pero que quedarían excluidos el trabajo marítimo y la agricultura.

En su 60 reunión (Madrid, octubre de 1932), decidió el Consejo de administración, por 16 votos contra 8, incluir en el orden del día de la XVII reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que debe inaugurarse el 31 de mayo de 1933, la cuestión siguiente: «Reducción de las horas de trabajo. Informe de la Conferencia preparatoria tripartita.» Por último, decidió el Consejo que el director se pusiera en relación con los Gobiernos de los países industriales que no son miembros de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de conseguir su participación eventual en los trabajos de la Conferencia.

De acuerdo con las decisiones del Consejo de administración, la Oficina ha invitado a los miembros de la Organización para que participen en la Conferencia preparatoria tripartita, cuya fecha de apertura fué fijada para el 10 de enero de 1933, haciéndose representar por delegaciones compuestas de un delegado gubernamental y, de otra parte, de un delegado patronal y de un delegado obrero designados de acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas de patronos y de trabajadores, según establece la parte XIII del Tratado de Versalles. Los Gobiernos tenían, además, la facultad para agregar consejeros técnicos a cada delegado.

De otra parte, la Oficina se puso en relación con los Gobiernos de los Estados Unidos, de la U. R. S. S. y de Egipto para examinar las condiciones en que pudieran eventualmente participar en los trabajos de la Conferencia preparatoria tripartita.

La Conferencia preparatoria tripartita, convocada para estudiar las posibilidades de remediar el paro por medio de la reducción de las horas de trabajo, se reunió en Ginebra el día 10 de enero próximo pasado.

De los 58 Estados miembros de la Organización

Internacional del Trabajo se hicieron representar 35. Entre éstos estaban representados por delegaciones tripartitas completas los 19 Estados siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Imperio Británico, Italia, Japón, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza y Yugoslavia.

Noruega estuvo representada por un delegado gubernamental y un delegado patronal; y estuvieron representados por una delegación gubernamental los 15 Estados siguientes: Africa del Sur, Albania, Brasil, Bulgaria, Cuba, Chile, China, Hungría, India, Irlanda, Letonia, Méjico, Persia y Turquía. Además estaba representada la República Dominicana por un «observador». Ciertos países han explicado la imposibilidad en que se encontraban de tomar parte en la Conferencia o de enviar una delegación completa, por falta de tiempo o por consideraciones económicas. El número total de delegados con derecho a voto era de 74.

De los Estados no miembros, Egipto envió un observador gubernamental. El Gobierno de los Estados Unidos, si bien no designó delegado, encargó a su cónsul general en Ginebra que estuviera en estrecho contacto con la Conferencia y le informara de sus trabajos. El Gobierno de la U. R. S. S. comunicó que habría tenido el propósito de tomar parte en la Conferencia si la fecha de su reunión hubiese coincidido con la de la Conferencia económica.

Tomaron parte en la Conferencia 72 consejeros técnicos, los que unidos a los delegados adjuntos y a los suplentes sumaban 162 personas. La lista de las delegaciones se da en anejo a este informe.

La Conferencia eligió para su presidencia al Sr. Mahaim, delegado gubernamental de Bélgica y miembro del Consejo de administración de la Oficina. Como vicepresidente gubernamental fué elegido sir Atul Chatterjee (India), como vicepresidente patronal el Sr. Oersted (Dinamarca) y como vicepresidente obrero el Sr. Hayday (Imperio Británico). La Conferencia decidió que su Mesa estuviera formada, además del presidente y de los tres vicepresidentes, por los tres miembros del Consejo de administración encargados por éste de representarle en la Conferencia preparatoria tripartita, con sus respectivos suplentes. De estos tres miembros, los Sres. Mahaim y Oersted, que ya tenían mandato en la Conferencia, designaron como suplentes a los Sres. Yoshisaka (Japón) y Forbes-Watson (Imperio Británico); el señor Jouhaux (Francia) designó como suplente al Sr. Schürch (Suiza).

La Mesa hubo de examinar, para someter las oportunas proposiciones a la Conferencia, todas las cuestiones relativas al procedimiento y funcionamiento de la Conferencia que pudieran plantearse en el curso de sus trabajos.

II

Una vez constituida la Conferencia, decidió previamente tomar como base de sus trabajos el informe que, de conformidad con lo acordado por

el Consejo de administración, había preparado la Oficina, incluso la serie de preguntas redactadas como conclusión de su informe por la Oficina misma, y cuya presentación había sido aprobada por los tres delegados que el Consejo de administración nombró para representar en la dicha Conferencia. El primer capítulo de esta serie se refería a la oportunidad y a la posibilidad de una solución de los problemas planteados a la Conferencia; es decir, saber si una reducción concertada de las horas de trabajo podría disminuir el paro, ya sea inmediatamente o bien en el momento de una mayor actividad económica, aunque sólo sea ésta de una manera parcial. Se abrió una discusión general substancial sobre el fondo y la totalidad del problema, que duró varios días. Hicieron uso de la palabra 54 oradores, sin contar los que intervinieron para presentar, apoyar o discutir las resoluciones, con cuya votación se dió por terminada esta discusión general.

Desde el principio de la discusión se vió que el conjunto de la Conferencia estaba de acuerdo en el hecho de que el paro ha llegado a tener tal gravedad en la hora presente que deben ser intentados todos los esfuerzos para encontrar rápidamente remedios eficaces. Pero cuando se trató de considerar la cuestión relativa a si la reducción de la duración del trabajo era un medio eficaz para atenuar el paro, se manifestaron divergencias entre los diferentes puntos de vista.

La tesis favorable a la reducción de la duración del trabajo como remedio contra el paro fué presentada por los miembros del grupo obrero, así como también por ciertos delegados de los Gobiernos.

Al exponer esta tesis declaró el grupo obrero que consideraba el principio del mantenimiento de las ganancias de los trabajadores condición indispensable de la medida propuesta, toda vez que la crisis tenía su base en una insuficiencia de consumo. Según el grupo obrero, son los trabajadores los que, por el hecho mismo del paro, habían soportado las consecuencias resultantes de la racionalización de la industria, por lo que sería inadmisibles que se les pidieran aún mayores sacrificios.

En favor de la reducción de las horas de trabajo se invocaron por los miembros del grupo obrero las razones siguientes:

La posibilidad de trabajo debe ser garantizada al mayor número posible de trabajadores para permitirles ganar su vida y la de sus familias.

Permitiría, en particular, que los adolescentes ocupen su puesto en la sociedad, evitándose la desmoralización que engendra el paro.

El paro actual impone cargas financieras muy gravosas a los Estados que comprometen el equilibrio de los presupuestos y amenazan conducir a una inflación peligrosa.

El paro tiene por consecuencia una reducción importante de la capacidad de compra de la masa de consumidores, lo que disminuye las posibilidades de dar salida a los productos industriales y agrícolas, y tiene por efecto mantener y aun aumentar el marasmo económico que, a su vez, es generador de paro.

Los remedios generales financieros y económicos, cuyo valor es indiscutible, no podrán ejercer una acción suficientemente rápida y amplia para constituir una solución completa del paro.

La reducción de la duración del trabajo contribuirá muy seguramente a la estabilización de los precios al por mayor y, por consiguiente, a la solución definitiva de la crisis, al mismo tiempo que atenuará ésta por el aumento del número de asalariados que se convertirán en consumidores, a condición de que sea mantenido el nivel de vida en todas partes.

Sea como quiera, los remedios económicos generales no evitarán que subsista el paro tecnológico, cuya existencia es innegable para el cual sólo es remedio la reducción de la duración del trabajo.

Teniendo en cuenta la reorganización que se ha operado en la industria en los últimos años, sobre todo como resultado de la racionalización y de la mecanización, no se puede poner en duda la posibilidad de readaptarse para la industria a una semana de trabajo reducida, venciendo las dificultades técnicas que puedan presentarse.

La semana de cuarenta horas, que determinaría un mayor consumo, aseguraría una producción suficiente por el hecho del aumento de rendimiento y, al mismo tiempo, prolongaría las horas libres de los obreros para aprovechar de esa producción.

La reglamentación que tienda a la reducción de la duración del trabajo podrá favorecer el establecimiento de nuevos contratos colectivos, si bien no constituirá obstáculo para la modificación de los contratos existentes.

También fué señalado por ciertos delegados obreros y gubernamentales que el aumento posible de los precios de coste que pudiera resultar de la reducción de las horas de trabajo sería compensado, en virtud del dinamismo de la vida económica: a) Por el aumento de la capacidad de compra de los trabajadores (el que no iría forzosamente acompañado de una disminución del poder adquisitivo de las demás clases sociales). b) Por la disminución de los gastos generales para cada unidad producida, puesto que aumentaría el número de estas unidades con la vuelta a una mayor actividad económica; y c) Por la disminución y acaso la desaparición de las cargas sociales que resultan de las indemnizaciones de paro. En consecuencia, podría ser soportado por la producción un aumento de los salarios globales.

De otra parte, en contestación a ciertas objeciones patronales que más adelante se recogen, los representantes del grupo obrero declararon: Que la teoría según la cual el tanto por ciento del coste de la mano de obra en un producto determinado debe resultar de la adición de esos diferentes porcentajes en todas las fases de

Rogamos a todos los periódicos obreros que nos sirven el cambio lo hagan al nuevo domicilio: FERNANDEZ DE LA HUZ, 51.

la producción no puede ser considerada como de un valor absoluto, ya que no tiene en cuenta otros factores que también determinan los precios de venta de los productos en las diferentes fases de la producción.

Contra la tesis favorable a la reducción de la duración del trabajo fueron opuestas por los representantes patronales las objeciones siguientes:

La medida propuesta no es una cuestión de «short-time» voluntario, practicado en la mayor parte de los países, sino que se trata de una medida de limitación general y obligatoria de la duración del trabajo.

La reducción de la duración del trabajo, juntamente con el aumento del salario-horario, acarrearía un aumento considerable de los precios de coste y de venta, lo que a su vez tendría por consecuencia una reducción de la demanda, siendo creadora de nuevo paro esta nueva reducción de la demanda.

En efecto, para calcular la parte que representan los salarios, los sueldos y las cargas sociales en los precios de coste (y, por tanto, la incidencia de una elevación de los gastos de mano de obra sobre el nivel de los precios), hay que considerar la totalidad de los gastos de este orden incorporados a un producto determinado en todas las fases de la producción y de la distribución, y conviene atribuir a cada uno de esos gastos de mano de obra su importancia relativa en el producto considerado.

El mantenimiento de los salarios semanales llevaría directamente a una inflación peligrosa.

Si las ganancias fuesen reducidas en la misma proporción que la duración del trabajo, de manera que quedase la suma total de salarios en su nivel actual, no resultaría ningún aumento general de la capacidad de compra, tanto menos cuanto que los precios de coste sufrirían una elevación.

Un aumento del coste de la producción reduciría aún más la demanda de los productos industriales por parte de la población agrícola. Dado que la capacidad de compra de ésta es ya reducida en extremo, se agravaría todavía más el estado de desequilibrio entre la agricultura y la industria.

El aumento de la capacidad de compra para el conjunto de los obreros que pudiera resultar de haber dado empleo a un mayor número de asalariados y del mantenimiento de sus ganancias, sería contrarrestado por una disminución del poder adquisitivo de las demás clases de la población, de tal manera que, en definitiva, no aumentaría la demanda total de productos industriales.

Por diversas razones, por ejemplo: la imposibilidad de establecer los turnos en los establecimientos de pequeña importancia, y por el hecho

de que muchas empresas trabajan ya actualmente con un ritmo de cuarenta horas, e incluso con un ritmo más bajo, sería inoperante o poco operante la reducción obligatoria de la duración del trabajo para crear posibilidades de empleo.

Las dificultades de orden técnico, variables en importancia según los países, por ejemplo: adaptación de los parados a un trabajo nuevo, que exige una reeducación profesional; aumento del personal técnico, de vigilancia y de dirección; desplazamiento de los obreros; insuficiencia de los locales y del utillaje; dificultad para encontrar el personal calificado necesario; cambio de residencia de los obreros, que éstos aceptarían difícilmente; dificultades de alojamiento, etc., harían materialmente imposible en muchos casos el empleo de un mayor número de obreros.

En los países donde existe la costumbre de reglamentar las horas de trabajo, los salarios y las demás condiciones de trabajo por contratos colectivos, la reducción obligatoria de las horas de trabajo haría, en gran medida, caducos estos contratos, con las consiguientes perturbaciones en la industria.

La reducción obligatoria de la duración del trabajo tendría como consecuencia acentuar artificialmente la racionalización a fin de compensar de este modo la pérdida de producción y el aumento del precio de coste, lo que podría convertirse en una causa más de paro.

La incidencia variable de la reducción de la duración del trabajo sobre los precios de coste y de venta de las industrias de los diferentes países, particularmente por las desigualdades existentes en el punto de partida en lo que se refiere a los salarios, niveles de vida, condiciones demográficas, condiciones económicas, etc., acentuaría la disparidad de la capacidad de competencia de las diversas naciones, exasperaría los nacionalismos económicos y tendría por consecuencia nuevas trabas al comercio internacional.

Una nueva reglamentación general, uniforme y obligatoria, privaría a la industria de la flexibilidad indispensable, perturbaría la adaptación a las condiciones actuales y obstaculizaría cualquier probabilidad de reanimación económica.

Toda solución debe ser internacional, y la experiencia que se tiene demuestra la incapacidad de la Organización Internacional del Trabajo para llegar, en materia de duración del trabajo, a concretar un instrumento internacional que tenga la misma significación en todos los países o que sea ratificado y efectivamente aplicado por todos los Estados miembros; de otra parte, un instrumento semejante no se aplicaría a los Estados que no forman parte de la Organización; además, la uniformidad de la duración del trabajo no puede asegurar la igualdad entre las naciones si no va acompañada de la uniformidad de los salarios y de otras condiciones.

La sola solución eficaz del problema del paro resultaría de los remedios que se encontrasen a las perturbaciones generales financieras y económicas de que debe ocuparse la Conferencia mundial.

Los delegados gubernamentales no han sido unánimes. Ciertos argumentos expuestos por los miem-

El precio de la suscripción al BOLETIN DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES es de tres pesetas al año.

bras del grupo obrero han sido expuestos también o apoyados por delegados gubernamentales.

La mayor parte de los delegados gubernamentales que tomaron parte en la discusión estimaron que la cuestión de la reducción de la duración del trabajo, considerada como remedio del paro, merecía en todo caso un examen a fondo.

De una manera general se pronunciaron, más o menos categóricamente, en favor de una acción de la Organización Internacional del Trabajo que tienda a reducir la duración del trabajo como remedio contra el paro.

Sin embargo, varios hicieron reservas que se referían, particularmente, a la duración de la reglamentación considerada y a su campo de aplicación.

Insistieron particularmente en la necesidad de la ratificación del convenio eventual y de su aplicación leal por todos los países en competencia y, sobre todo, por un número suficiente de grandes países industriales de Europa y de Ultramar. Un delegado ha estimado que el proyecto de convenio debería estipular, que los Estados que lo ratifiquen no quedarían definitivamente obligados sino con esa condición.

En general, han estimado también que la cuestión de los salarios no puede ser tratada en un convenio, pues sería difícil elaborar una reglamentación internacional eficaz sobre este punto. Sin embargo, opinan que la reducción de la duración del trabajo debería ser acompañada del mantenimiento de los niveles de vida en la más amplia medida posible.

Aun reconociendo que existían dificultades efectivas, opinaron, no obstante, que convenía continuar lo más posible el estudio de los problemas planteados por la reducción de las horas de trabajo, estimando que las modalidades de aplicación podrán contribuir a resolver esas dificultades.

Ciertos delegados de los países de ultramar han expresado su sentimiento por no haber podido tomar parte activa en los debates de la Conferencia a causa del corto plazo que se les dió; además manifestaron su deseo de que se tenga en cuenta el estado de industrialización, la experiencia y la opinión pública de ciertos países.

Un representante gubernamental ha sugerido que debían ser objeto de un estudio complementario los aspectos económicos de la cuestión.

El delegado del Gobierno británico declaró que su Gobierno consideraba que la cuestión de la limitación obligatoria de las horas de trabajo a cuarenta horas no había sido objeto de un examen suficiente que permitiera llegar a una conclusión definitiva y que, en consecuencia, su Gobierno era opuesto a aceptar una discusión sobre un proyecto de convenio a la hora presente. Insistió en que se emprendiera un amplio estudio de toda la cuestión antes de tomar una decisión definitiva.

Esta discusión general ha demostrado que las preocupaciones de la Conferencia se refieren a los tres puntos siguientes:

- 1.º ¿Es eficaz la disminución de la duración del trabajo para atenuar el paro?
- 2.º ¿Implica necesariamente esta disminución la intervención de un acuerdo internacional?
- 3.º ¿Existen condiciones especiales, considera-

das como indispensables, para que sea eficaz esta disminución de la duración del trabajo, y es necesario, en particular, que sea mantenido el nivel de vida de los obreros?

Estas preocupaciones se han concretado en los proyectos de resolución presentados a la Conferencia, uno por el grupo obrero, y el otro por los delegados gubernamentales de Francia, Bélgica, Holanda, España, Chile, Alemania e Italia.

El proyecto de resolución presentado por grupo obrero decía así:

«La Conferencia estima: Que la discusión del proyecto de convenio sobre la semana de cuarenta horas debe tener efecto tomando por base que las ganancias semanales y los sueldos mensuales no podrán ser reducidos a causa de la reducción de las horas de trabajo que resulte de la adopción y de la aplicación de dicho convenio.»

El proyecto de resolución presentado por los siete delegados gubernamentales nombrados más arriba decía así:

«La Conferencia, después de haber conocido los diferentes argumentos expuestos en pro y en contra de una reducción de la duración del trabajo, estima que es un medio capaz para reducir el paro.

En consecuencia, decide examinar las cuestiones de detalle, tomando como base de su examen las preguntas puestas por la Oficina bajo la cifra II de las conclusiones de su informe, a fin de llegar a un acuerdo en el plano internacional, cuyas modalidades de aplicación serán determinadas de manera que sea posible mantener el nivel de vida de los asalariados.»

El proyecto de resolución presentado por el grupo obrero fué puesto el primero a votación, y quedó rechazado por 32 votos (12 delegados gubernamentales y 20 delegados patronales) contra 21 (2 delegados gubernamentales y 19 delegados obreros) y 17 abstenciones.

El grupo obrero hizo entonces la declaración siguiente:

«Votaremos en favor de la resolución presentada por los delegados gubernamentales porque contiene el principio que sirve de base a la resolución obrera.

Si, como esperamos, es adoptada esta resolución gubernamental, tenemos la convicción de que los trabajos de la Oficina Internacional, complementarios de los trabajos de la Conferencia presente, serán realizados en la dirección que ha sido indicada tanto en la resolución del grupo obrero como en la de los delegados gubernamentales.»

Para confirmar y reforzar esta declaración, el delegado obrero británico hizo la declaración siguiente:

«Los obreros británicos habrían preferido el texto más claro de la resolución presentada por el grupo obrero. Pero, puesto que dos Gobiernos han declarado, en respuesta a las preguntas directas que se les han hecho ayer, que no hay diferencia esencial de intención o de principio, sino solamente de redacción, entre la resolución del grupo obrero y la resolución gubernamental, quedando esto entendido—si bien reservándonos la facultad de decidir cuál será nuestra actitud en junio cuando co-

nozcamos los términos exactos en que será presentado el proyecto de acuerdo internacional—, hemos decidido votar en favor de la resolución gubernamental.»

El grupo patronal declaró que su actitud había quedado definida respecto de la resolución misma y no respecto de las interpretaciones dadas por ciertos miembros de la Conferencia.

El representante patronal de Italia, si bien recordaba las dificultades técnicas de tal reglamentación, estimó, sin embargo, que el aspecto social y político del problema exigía la continuación de un examen a fondo, y con ese espíritu dió una explicación de su voto.

El proyecto de resolución presentado por los siete delegados gubernamentales fué adoptado por 41 votos (21 delegados gubernamentales, 19 delegados obreros y un delegado patronal) contra 22 votos (3 delegados gubernamentales, 19 delegados patronales) y 7 abstenciones.

Después de esta votación, el grupo patronal hizo la declaración siguiente:

«El grupo patronal ha examinado seriamente la actitud que habría de tomar después de la votación que ha tenido efecto. Hemos declarado ya que estamos profundamente convencidos de que las proposiciones que vais a discutir son irrealizables y no constituyen un remedio para el paro. Las objeciones que hemos hecho son fundamentales. Después de la situación creada por la adopción de esta resolución, nos habría sido fácil separarnos inmediatamente de los trabajos de esta Conferencia. No obstante, no realizamos gesto parecido, que podría dar lugar a errores de juicio o a falsas interpretaciones; continuamos asistiendo a esta Conferencia porque nuestra actitud se inspira en el deseo de evitar esos errores y esas falsas interpretaciones. Estimamos, sin embargo, que es necesario en estas circunstancias hacer comprender que nuestra actitud de oposición es invariable, y que nuestra presencia no prejuzga en ningún modo nuestra acción ulterior en la materia.»

Antes de pasar, conforme a la resolución adoptada, al examen de las preguntas hechas bajo la cifra II de las conclusiones del informe de la Oficina Internacional del Trabajo, la Conferencia tuvo que deliberar sobre la siguiente declaración del grupo obrero relativa a la extensión de la reglamentación considerada a la agricultura:

«El grupo obrero de la Conferencia preparatoria comprueba con el mayor sentimiento que la agricultura ha sido excluida por adelantado cuando se examinó la cuestión de la reducción de la duración del trabajo.

Protesta enérgicamente contra la no inclusión de la agricultura cuando se examinan cuestiones de tal importancia.

Recuerda que desde el aplazamiento de la cuestión de la reglamentación de la duración del trabajo en la agricultura por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su tercera reunión de 1921 —es decir, durante diez años—, no se discutió más la cuestión.

Declara que la racionalización y la crisis causan un paro cada vez más considerable en la

agricultura como en las demás industrias, y considera absolutamente necesaria una reducción de la excesiva duración del trabajo de los obreros agrícolas.

Pide a la Conferencia que ruegue al Consejo de administración de la Oficina Internacional del Trabajo que encomiende a la Oficina que emprenda incesantemente una encuesta acerca de la duración del trabajo en la agricultura, con vistas a la adopción de un convenio internacional sobre la reglamentación y la reducción de la duración del trabajo en la agricultura.»

Conviene recordar que, de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de administración el 22 de septiembre de 1932, la agricultura no había sido comprendida en el conjunto de los trabajos de la Conferencia.

La cuestión de saber si la Conferencia era competente para transmitir este deseo a la Oficina Internacional del Trabajo, y que fué planteada por un representante patronal, quedó descartada por 33 votos contra 19. Después de nueva discusión, la Conferencia adoptó, por 33 votos contra 19, la resolución siguiente, presentada por el delegado gubernamental francés y a la que previamente se había adherido el grupo obrero:

«La Conferencia,

Si bien reconoce que las cuestiones del trabajo en la agricultura son de la competencia de la Oficina Internacional del Trabajo,

Comprueba que la cuestión de la reducción de las horas de trabajo en la agricultura no está comprendida en el mandato de la presente Conferencia;

Decide enviar a la Oficina Internacional del Trabajo el proyecto de resolución presentado por el grupo obrero.»

III

La Conferencia abordó entonces el examen de las cuestiones que se refieren al carácter que debe darse a una reglamentación internacional y sobre las disposiciones que pueda eventualmente contener.

Para mayor claridad de los votos emitidos, decidió la Conferencia pronunciarse sobre alguna de estas cuestiones en términos más explícitos que los utilizados en el informe.

La Conferencia se pronunció sobre las cuestiones siguientes:

1.^a ¿Ha lugar a prever un convenio elaborado por la Conferencia Internacional del Trabajo?

La Conferencia adoptó esta proposición por 36 votos contra 21 (en pro: 18 Gobiernos y 18 obreros; contra: 3 Gobiernos y 18 patronos).

El grupo patronal declaró entonces que se abstendría de tomar parte en las siguientes votaciones, no queriendo asumir ninguna responsabilidad en lo que se refiere a la elaboración del convenio.

2.^a ¿Opina la Conferencia que el convenio debe ser de corta duración o renovable?

Este texto obtuvo 36 votos contra cero (en pro:

18 Gobiernos y 18 obreros). (No se logró el «quorum» (*)).

3.^a ¿Deberá ser redactado el convenio de manera que permita la elección de todos los métodos para disponer las horas de trabajo compatibles con la estricta observancia de los límites de duración fijados por el convenio?

La Conferencia adoptó esta proposición por 40 votos contra 0 (en pro: 21 Gobiernos y 19 obreros).

4.^a Métodos de acomodamiento de la duración del trabajo, propuestos por el informe de la Oficina Internacional del Trabajo:

a) Aumento del número de equipos para los trabajos cuyo funcionamiento es necesariamente continuo.

La Conferencia adoptó este texto por 37 votos contra 0 (en pro: 18 Gobiernos y 19 obreros).

b) Disposición adecuada de los equipos para los demás trabajos efectuados con varios equipos.

Este texto obtuvo 30 votos contra 0 (en pro: 11 Gobiernos y 19 obreros). (No se logró el «quorum».)

c) Reducción de la duración del trabajo u organización del turno para los trabajos efectuados por un solo equipo, bajo reserva de que sean tomadas todas las medidas necesarias para impedir los abusos y para garantizar que las limitaciones de la duración del trabajo por día y por semana establecidas por el convenio de Washington y el convenio relativo a las minas no serán excedidas.

La Conferencia adoptó este texto por 37 votos contra 0 (en pro: 18 Gobiernos y 19 obreros).

d) Facultad de establecer la aplicación de cualquier otro método de reducción de las horas de trabajo por vía de contratos colectivos que la autoridad reconozca con arreglo al convenio, y con la condición de que sea comunicado por los Gobiernos interesados a la Oficina Internacional del Trabajo.

Este texto obtuvo 33 votos contra 0 (en pro: 14 Gobiernos y 19 obreros). (El «quorum» no fue obtenido.)

5.^a Si, a juicio de los Gobiernos, debería haber una disposición especial para satisfacer, con arreglo al convenio, las necesidades de la industria del transporte y separadamente para:

A. Los ferrocarriles.

B. Los demás transportes.

Esta proposición obtuvo 27 votos (10 Gobiernos y 17 obreros) contra uno (un Gobierno). (No se logró el «quorum».)

6.^a ¿Es de desear la fijación de un límite numérico para las horas de trabajo extraordinarias?

La Conferencia adoptó esta proposición por 36 votos (17 Gobiernos y 19 obreros) contra 2 (2 Gobiernos).

7.^a ¿Debe prever el convenio una disposición especial según la cual la duración media de

la semana de trabajo no debería exceder de cuarenta horas, con la reserva de las excepciones, que deberían ser previstas en el convenio?

La Conferencia adoptó esta proposición por 35 votos (16 Gobiernos y 19 obreros) contra 2 (2 Gobiernos).

8.^a ¿Debería contener el convenio disposiciones especiales en lo que se refiere a su aplicación en los pequeños establecimientos?

Esta proposición obtuvo 35 votos (17 Gobiernos y 18 obreros) contra 0. (No se logró el «quorum».)

9.^a Extensión eventual de la reglamentación a los establecimientos comerciales y oficinas.

Sobre este punto fue requerida la Conferencia para que se pronunciase sucesivamente respecto de los tres textos siguientes:

a) La disminución de las horas de trabajo, que debe extenderse no solamente a los establecimientos industriales, sino también a los establecimientos comerciales y a las oficinas, ¿conviene comprenderla en un solo convenio, o bien sería preferible votar dos convenios, uno referente a los establecimientos industriales y otro relativo a los establecimientos comerciales y a las oficinas?

Este texto obtuvo 22 votos (4 Gobiernos y 18 obreros) contra 0. (No se logró el «quorum».)

b) ¿Debería extenderse la reglamentación internacional no solamente a los establecimientos industriales, sino también a los establecimientos comerciales y a las oficinas a que se refieren los convenios internacionales indicados bajo la cifra II (*)?

En la afirmativa, ¿debería ser objeto de un convenio particular la reglamentación aplicable a los establecimientos comerciales y a las oficinas?

Este texto obtuvo 26 votos (9 Gobiernos y 17 obreros) contra uno (un Gobierno). (No se logró el «quorum».)

c) ¿Debería extenderse el proyecto de convenio no solamente a los establecimientos industriales, sino también a los establecimientos comerciales y a las oficinas a que se refieren los convenios internacionales indicados bajo la cifra II (*)?

Este texto obtuvo 24 votos (9 Gobiernos y 15 obreros) contra 0. (No se reunió el «quorum».)

10. En todo caso y cualquiera que sea la forma de reglamentación adoptada para reducir la duración del trabajo, ¿conviene prever una recomendación relativa a los salarios de los asalariados?

La Conferencia adoptó esta proposición por 32 votos (13 Gobiernos y 19 obreros) contra 19 (3 Gobiernos y 16 patronos).

11. Por razón del desarrollo del paro tecnológico, sobre el cual faltan informaciones, ¿ha lugar a prever comunicación periódica a la Oficina Internacional del Trabajo de informaciones sobre este tema, por parte de los Gobiernos, establecidas sobre una base tan uniforme como sea posible?

La conferencia adoptó esta proposición por 41 votos (21 Gobiernos, 19 obreros y un patrono) contra uno (un gubernamental).

La Conferencia terminó así el examen de las preguntas hechas en la parte segunda de las con-

(*) Según el reglamento adoptado por la Conferencia, el «quorum» era de 37 votos, o sea, la mitad del número total de los delegados.

clusiones del informe de la Oficina Internacional del Trabajo.

El grupo patronal hizo entonces la declaración siguiente:

«En el instante de la clausura de la discusión general, y antes de que la Conferencia pasara a examinar las conclusiones del informe de la Oficina Internacional del Trabajo, hemos indicado claramente a la Conferencia que no se había producido ningún hecho que pudiera llevarnos a cambiar nuestra actitud de oposición completa a las proposiciones hechas a la Conferencia.

Además, cuando decidió la Conferencia, en el curso de la discusión de los detalles, por 36 votos contra 21, que había lugar a prever un convenio, declaramos que no podíamos asociarnos a tal decisión y que declinábamos toda responsabilidad en lo que se refiere a los trabajos de la presente Conferencia para elaborar un convenio.

Desde este momento nos hemos abstenido, en consecuencia, de tomar parte en la discusión y en las votaciones.

Al final del debate queremos decir simplemente que, a nuestro juicio, la discusión no ha servido sino para demostrar que es imposible y prácticamente irrealizable ir más allá en el sentido de la proposición formulada, y recordar a la Conferencia que el hecho de que nos hayamos abstenido

Tomad nota del nuevo domicilio de la Unión General de Trabajadores:

FERNANDEZ DE LA HOZ, 51
TELEFONO 43040

en sus trabajos no debe ser interpretado en modo alguno que prejuzgue nuestra actitud ulterior si el problema se plantea más adelante.»

Al final de los debates, el grupo obrero quiso hacer esta declaración:

«Cuando el número de los parados en el mundo entero es, por lo menos, de 30 millones, comprobamos que, a partir de la decisión de la Conferencia en favor de que se proyecte un convenio sobre la reducción de las horas de trabajo para remedio contra el paro, el grupo patronal se mantuvo en una actitud puramente negativa.

El grupo obrero registra, en cambio, los resultados positivos a que han llegado los trabajos de la Conferencia y comprueba que la reducción de las horas de trabajo y del mantenimiento del nivel de vida de los asalariados como remedio contra el paro ha sido admitida por una mayoría que comprende a los Gobiernos de los principales países industriales de Europa, excepto uno.»

La Conferencia se ha limitado a tener conocimiento de una y otra declaración, que son hechas bajo la sola responsabilidad de sus autores.

El informe ha sido adoptado sin oposición.

Procedimiento a seguir.

Desde luego, el Consejo de administración tenía acordado examinar, en la reunión que ha ce-

lebrado en los últimos días del mes de enero, si las conclusiones de esta Conferencia tripartita debían ser comunicadas a la Conferencia económica mundial y antes a los Gobiernos respectivos.

Posteriormente, en las reuniones celebradas por el Consejo de administración en Madrid, en el mes de octubre de 1932, se acordó inscribir en el orden del día de la Conferencia que se celebrará en Ginebra durante el próximo mes de junio la cuestión siguiente: «La reducción de las horas de trabajo.» (Informe de la Conferencia preparatoria tripartita.)

Todo parece garantizar que la cuestión se trate en la próxima Conferencia, a base de un cuestionario con preguntas e indicaciones que sirvan para redactar un proyecto de convención y que haya sido conocido oportunamente por los miembros de la Oficina, o sea por los Estados que la integran.

Lo que constituye para esta delegación una incógnita a la hora de redactar el presente informe es si la discusión del cuestionario en la próxima Conferencia será considerada como primera lectura, y el asunto tendrá que volver a ser tratado en otra Conferencia posterior, o si se considera como discusión en primera lectura la tenida en la Conferencia preparatoria tripartita, en cuyo caso se podrían adoptar en la próxima acuerdos definitivos.

En todo caso, la delegación estimula a la Unión General de Trabajadores a realizar la propaganda posible por la implantación inmediata de la jornada de trabajo semanal de cuarenta horas.

De Carlos Malato, el anarquista francés que mejor conocía a los anarquistas españoles, son las siguientes líneas:

«Desde muchos años yo he sospechado la falta de concepto realista de los anarquistas españoles. Les quería por su entusiasmo, porque sin entusiasmo y convicción razonada no se puede intentar revolución alguna; pero aquel entusiasmo, degenerando en fanatismo ciego, como todos los fanatismos, establecía insensiblemente, y con otra etiqueta, una religión dogmática, haciendo perder de vista el presente por los "conceptismos" de los tiempos futuros; es decir, olvidando el mundo terrestre y positivo por el celestial. Se hablaba de libertad, de libre examen, y se practicaba el fanatismo doctrinario. Tolerantes para las excentricidades y tonterías; intolerantes para con los hechos y la realidad de la vida. ¡Eterna reencarnación del viejo espíritu religioso! En España, donde la raza tiene sangre y ardores africanos, hubo siempre fanáticos: los fanáticos musulmanes, que han llegado a ser fanáticos cristianos, que luego llegaban a ser fanáticos anarquistas. ¡Siempre fanáticos!»

Reglamento de la ley de Accidentes del trabajo en la industria

A continuación reproducimos el nuevo reglamento de aplicación de la ley de Accidentes del trabajo elaborado en el Consejo de Trabajo y en el Instituto Nacional de Previsión, y en cuya obra, que es de las más importantes sobre legislación social promulgadas por la República, colaboraron los representantes obreros que actúan en ambos organismos.

En números sucesivos destacaremos todas las ventajas de que de este reglamento pueden obtener los trabajadores.

DECRETO

De acuerdo con el Consejo de ministros y a propuesta del de Trabajo y Previsión,

Vengo en aprobar el siguiente reglamento de la ley de Accidentes del trabajo en la industria.

Dado en Madrid a treinta y uno de enero de mil novecientos treinta y tres. — *Niceto Alcalá-Zamora y Torres.* — El ministro de Trabajo y Previsión, *Francisco L. Caballero.*

CAPITULO PRIMERO

DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE ACCIDENTES

Sección 1.ª — Definiciones.

Artículo 1.º A los efectos del presente reglamento, se entiende por accidente toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

Art. 2.º Se considera patrono al particular o Compañía, persona natural o jurídica, propietaria de la obra, explotación o industria donde el trabajo se preste.

Estando contratada la ejecución o explotación de la obra o industria, se considera como patrono al contratista, subsistiendo siempre la responsabilidad subsidiaria de la obra o industria. El responsable subsidiario tendrá derecho a repetir contra el directo por el importe de la indemnización abonada y gastos satisfechos.

El Estado, las regiones autónomas, las Diputaciones provinciales, las Comisiones gestoras, los Cabildos insulares, los Ayuntamientos y las Mancomunidades de Corporaciones locales quedan equiparados, para los efectos de este artículo, a los patronos definidos en el mismo, incluso en las obras públicas que ejecuten por administración.

Art. 3.º Por operario se entiende todo el que ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio, por cuenta ajena, mediante remuneración o sin ella, aunque se trate de aprendices, ya esté a jornal, ya a destajo o en cualquier otra forma, o en virtud de contrato verbal o escrito. Los términos de la precedente definición no excluirán de los beneficios de la ley a las personas que ordinariamente trabajen por cuenta ajena, aunque sufran el accidente en ocasión de realizar, por

orden del patrono o de su representante, una labor que no sea del oficio habitual de ellas o para el que fuere contratado; ni tampoco a las que realicen trabajos que no sean puramente manuales, si son los propios de los operarios comprendidos en la enumeración siguiente:

A los efectos de este reglamento, se consideran operarios:

1.º Los aprendices, esto es, las personas ligadas con un patrono mediante un contrato verbal o escrito, por virtud del cual éste se obliga a enseñar prácticamente a aquéllos, por sí o por otros, un oficio o industria, a la vez que utiliza el trabajo del que aprende, mediando o no retribución.

2.º Los que preparan y vigilan el trabajo de los demás, en su calidad de contramaestres, mayordomos, mayores, cachicanes, listeros, etcétera, sin que en ningún caso pueda tomarse por base para el cálculo de las indemnizaciones por los accidentes que sufran una cantidad superior a 15 pesetas, aunque el salario que ganen sea mayor.

3.º Los contratistas de un trabajo por parejas o grupos, bien contraten su salario y el de sus compañeros o auxiliares, bien el contrato se haga a un solo hombre, por una cantidad alzada o a destajo, siempre que el contratante no obtenga por ella un lucro especial distinto del salario o parte que en la cantidad alzada o en el destajo le corresponda como obrero.

4.º La dotación de los buques, entendiéndose por tal la definida en el artículo 648 del Código de Comercio, o sea el conjunto de todos los individuos embarcados, de capitán a paje, necesarios para su dirección, maniobra o servicio; estando, por tanto, comprendidos en la dotación la tripulación, los pilotos, maquinistas, fogoneros y demás cargos de a bordo no especificados.

Se considerarán también formando parte de la dotación los alumnos de náutica que efectúen las prácticas reglamentarias a bordo de los buques mercantes españoles.

5.º Personal obrero de los teatros y el personal artístico y administrativo de los mismos cuyos haberes no excedan de 15 pesetas diarias.

6.º Dependientes, mancebos y viajeros de establecimientos mercantiles.

7.º Personal asalariado de establecimientos de beneficencia.

8.º Personal de oficinas o dependencias de fábricas o establecimientos industriales con sueldo menor de 5.000 pesetas anuales, con la limitación fijada en el número 14 del artículo 7.º

9.º Los agentes de la autoridad, conforme a lo determinado en el artículo siguiente.

10. El personal de hoteles, fondas, cafés, restaurantes y demás establecimientos públicos de este género, como camareros, ayudantes, mozos, echadores y similares.

11. Los penados con relación a los contratistas que los empleen en los trabajos por su cuenta.

12. Los peones camineros.

Art. 4.º A los efectos jurídicos del concepto de terminado en el artículo anterior, se entiende comprendido en él los agentes de la autoridad, cualquiera que sea su clase, del Estado, región, provincia, cabildo insular, Municipio o Mancomunidades, por los accidentes definidos en el artículo 1.º que sufran en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas, siempre que por disposiciones especiales no gocen del debido auxilio; entendiéndose por tal el otorgamiento de auxilio equivalente al otorgado por la ley.

Art. 5.º Los operarios extranjeros gozarán de los beneficios del presente reglamento, así como sus derechohabientes que residan en territorio español al ocurrir el accidente. Los derechohabientes que residan en el extranjero al ocurrir el accidente gozarán de dicho beneficio en el caso de que la legislación de su país los otorgue, en análogas condiciones, a los súbditos españoles, o bien cuando se trate de ciudadano de un país que haya ratificado con plena efectividad el Convenio internacional de Ginebra sobre igualdad de trato en materia de reparación de accidentes del trabajo o bien cuando se haya estipulado así en Tratados especiales.

En caso de que los derechohabientes residentes en territorio español al ocurrir el accidente trasladen su residencia a un país extranjero, continuarán disfrutando los beneficios legales en el caso de que la legislación de su país los otorgue en análogas condiciones a los súbditos españoles y el país de nueva residencia haya ratificado el Convenio internacional sobre igualdad de trato en materia de accidentes, o así se haya estipulado en tratados especiales.

Sección 2.ª — Responsabilidad en materia de accidentes.

Art. 6.º La responsabilidad que establece el presente reglamento es la referente a los accidentes ocurridos a los obreros con ocasión o por consecuencia del trabajo que realicen, a menos que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzcan.

Deberá entenderse existente fuerza mayor extraña cuando sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el ejercicio de la profesión de que se trate.

No se considerarán, sin embargo, debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, a los efectos de la ley, los accidentes que reconozcan por causa el rayo, la insolación u otros fenómenos análogos de la Naturaleza.

La imprudencia profesional, o sea la que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y derivada de la confianza que éste inspira, no exime de responsabilidad al patrono.

Si ocurrido un accidente, el patrono entendiera que fué debido a fuerza mayor o causa fortuita extraña al trabajo, lo manifestará así al delegado de Trabajo o al alcalde al dar el parte del accidente, obligación de la que no quedará relevado por aquella apreciación, ni tampoco la de prestar al accidentado la asistencia médica y farmacéutica inme-

diata, debiendo además hacer constar en tal caso la conformidad o disconformidad del obrero.

Art. 7.º Las industrias o trabajos que darán lugar a responsabilidad del patrono, serán:

1.º Las fábricas y talleres y los establecimientos industriales.

2.º Las minas, salinas y canteras.

3.º La construcción, reparación y conservación de edificios, comprendiendo los trabajos de albañilería y todos sus anejos, carpintería, cerrajería, corte de piedra, pinturas, etc.

4.º La construcción, reparación y conservación de vías férreas, puentes, caminos, canales, diques, acueductos, alcantarillas, vías urbanas y otros trabajos similares.

5.º La explotación agrícolas, forestales y pecuarias, siempre que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:

a) Que empleen constantemente más de seis obreros.

b) Que hagan uso de máquinas agrícolas movidas por motores inanimados.

En este último caso, la responsabilidad del patrono existirá respecto del personal ocupado en la dirección o al servicio de los motores o máquinas y de los obreros que fuesen víctimas de los accidentes ocurridos en los mismos.

Los accidentes ocurridos en las demás explotaciones de esta clase se regirán por el decreto de 12 de junio (ley de 9 de septiembre de 1931) y sus disposiciones complementarias.

6.º El acarreo y transporte de personas y mercancías, por vía terrestre, marítima y de navegación interior, y la pesca. En el transporte marítimo se entenderán comprendidas las personas que formen la dotación de los buques. Para los tripulantes de las embarcaciones pesqueras, en que aquéllos sean contratados a la parte, se aplicará el real decreto-ley de 5 de abril de 1929 y sus disposiciones complementarias.

7.º Los trabajos de limpieza de calles, pozos negros y alcantarillas.

8.º Los teatros, con respecto a su personal obrero. También tendrá derecho el personal artístico y administrativo, siempre que sus haberes no excedan de 15 pesetas diarias. En todo caso, las indemnizaciones deberán computarse teniendo en cuenta la ganancia media anual de los interesados.

9.º Los trabajos de los cuerpos de bomberos.

10. Todos los trabajos de colocación, reparación y desmonte de aparatos, conductores eléctricos y pararrayos, y los de análoga índole en aparatos, líneas y redes de telecomunicación.

11. Las faenas de carga y descarga.

12. Los establecimientos mercantiles, respecto de sus dependientes, mancebos y viajantes.

13. Los Hospitales, Manicomios, Hospicios y Establecimientos análogos con respecto a su personal asalariado por los accidentes que sufran en el desempeño de sus funciones.

14. Las oficinas o dependencias de fábricas o explotaciones industriales comprendidas en cualquiera de los números anteriores, con respecto a los empleados que tengan sueldo menor de 5.000 pesetas anuales, cuando éstos fuesen víctimas de un accidente ocurrido en dichas fábricas, talleres-

o explotaciones, como consecuencia de los trabajos que de ordinario se ejecutan en los mismos.

15. Los trabajos y servicios no enumerados anteriormente y en los cuales sean empleados operarios expresamente comprendidos en el artículo 3.º

Art. 8.º Los efectos de la ley no serán aplicables al servicio doméstico.

Se entenderá por servicio doméstico el que se preste mediante jornal, sueldo, salario o remuneración de otro género o sin ella y que sea contratado, no por un patrono, sino por un amo de casa, que no persiga fin de lucro, para trabajar en una casa o morada particular, al servicio exclusivo del contratante, de su familia, de sus dependientes, bien se albergue en el domicilio del amo o fuera de él.

Art. 9.º El operario que sufra un accidente del trabajo tendrá derecho a la asistencia médica y farmacéutica y a la indemnización que este reglamento determina para cada caso, en forma y cuantía según la clase de incapacidad que el accidente produzca.

En caso de fallecimiento del obrero, la indemnización corresponderá a sus derechohabientes, en la forma que se indica en este reglamento, y el patrono deberá abonar los gastos de sepelio de la víctima conforme a lo que se dispone en el artículo 30.

La responsabilidad del patrono para los efectos legales será efectiva desde que ocurra el accidente.

Art. 10. Tanto la asistencia médica y farmacéutica como las indemnizaciones serán obligatorias, aunque las consecuencias del accidente resulten modificadas en su naturaleza, duración y gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo, o tengan su origen en infecciones adquiridas en el nuevo medio en que coloque, por orden expresa o modo tácito, el patrono al paciente para su curación.

CAPITULO II

DE LAS INCAPACIDADES E INDEMNIZACIONES

Sección 1.ª — De las incapacidades.

Art. 11. Para los efectos de las indemnizaciones por accidentes del trabajo se considerarán cuatro clases de incapacidades:

- Incapacidad temporal.
- Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.
- Incapacidad permanente y total para la profesión habitual; y
- Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo.

Art. 12. Se considerará incapacidad temporal, a tenor del artículo anterior, toda lesión que esté curada dentro del término de un año, quedando el obrero capacitado para el trabajo que estaba realizando al sufrir el accidente.

Art. 13. Se considerará incapacidad permanente parcial para el trabajo habitual toda lesión

que, al ser dado de alta el obrero, deje a éste con una inutilidad que disminuya la capacidad para el trabajo a que se dedicaba al ocurrirle el accidente.

En la valoración se tendrá en cuenta, además de la lesión, el oficio o profesión del accidentado, considerando si se trata de jornaleros y trabajadores no calificados, o de profesiones u oficios que precisen principalmente los miembros superiores, o de profesiones que precisen principalmente los miembros inferiores, o de oficios y profesiones de arte y similares que requieren una buena visión y una gran precisión de manos, o de otro oficio o profesión especializados.

En todo caso, tendrán tal consideración las siguientes:

- La pérdida funcional de un pie o de los elementos indispensables para sustentación y progresión.
- La pérdida de la visión completa de un ojo, si subsiste la del otro.
- La pérdida de dedos o falanges indispensables para el trabajo a que se dedicaba el obrero.
- Las hernias según el art. 17.
- Las lesiones que se consideren capaces de producir la misma incapacidad para el trabajo habitual.

Art. 14. Se considerarán como incapacidades permanentes y totales para la profesión habitual todas las lesiones que, después de curadas, dejen una inutilidad absoluta para todos los trabajos de la misma profesión, arte u oficio a que se dedicaba el obrero al sufrir el accidente, aunque el obrero accidentado pueda dedicarse a otra profesión u oficio.

Especialmente en relación con el párrafo anterior, se consideran como incapacidades permanentes y totales para la profesión habitual las siguientes:

- La pérdida de las partes esenciales, de la extremidad superior derecha, considerándose como tales la mano, los dedos de la mano en su totalidad, aunque subsista el pulgar o, en igual caso, la pérdida de todas las segundas y terceras falanges.
- La pérdida de la extremidad superior izquierda, en su totalidad o en sus partes esenciales, conceptuándose como tales la mano y los dedos en su totalidad.
- La pérdida completa del pulgar de la mano que se utilice para el trabajo en cada caso particular.
- La pérdida de una de las extremidades inferiores en su totalidad, considerándose incluida en este caso la amputación por encima de la articulación de la rodilla.
- La pérdida de un ojo, si queda reducida la visión del otro en menos de un 50 por 100.
- La sordera absoluta, entendiéndose como tal la de los dos oídos.
- Todas las similares que produzcan la misma incapacidad.

Art. 15. Se considerarán como incapacidades permanente y absolutas para todo trabajo aquellas que inhabiliten por completo al obrero para toda profesión u oficio, especialmente las siguientes:

a) La pérdida total en sus partes esenciales de las dos extremidades superiores o inferiores, de una extremidad superior y otra inferior o de la extremidad superior derecha en su totalidad, conceptuándose como partes esenciales la mano y el pie.

b) La pérdida de movimiento análoga a la mutilación de las extremidades, en las mismas condiciones indicadas en el apartado anterior.

c) La pérdida de los dos ojos, entendida como anulación del órgano o pérdida total de la fuerza visual.

d) La pérdida de un ojo, si queda reducida en más del 50 por 100 la fuerza visual del otro.

e) Lesiones orgánicas y funcionales del cerebro y estados mentales crónicos (psicosis crónicas, estados maniáticos y análogos), causados por el accidente, reputados como incurables y que, por sus condiciones, impidan al obrero dedicarse en absoluto a cualquier clase de trabajo.

f) Lesiones orgánicas o funcionales del corazón y de los aparatos respiratorio y circulatorio, ocasionadas por acción mecánica del accidente, que se reputan incurables y que, por su gravedad, impidan al obrero dedicarse en absoluto a cualquier clase de trabajo.

g) Lesiones orgánicas o funcionales de los aparatos digestivo y urinario, ocasionadas por acción mecánica del accidente, que se reputan incurables y que, por su gravedad, impidan al obrero dedicarse en absoluto a cualquier clase de trabajo; tales como, en sus casos respectivos, ano contra natura; fístulas muy anchas, estercoreas, vésicorrectales o hipogástricas; emasculación total.

h) Todas las similares que produzcan la misma incapacidad.

Art. 16. La enumeración que se hace en el artículo 13 de las lesiones que determinan una incapacidad parcial no obstará a que, por la apreciación de las mismas, según lo previsto en el párrafo segundo de dicho artículo, se declare una incapacidad permanente y total para la profesión habitual.

Art. 17. Se considerarán hernias con derecho a indemnización:

a) Las que aparecen bruscamente a raíz de un traumatismo violento sufrido en el trabajo y que ocasione roturas o desgarros de la pared abdominal o diafragma y se acompañen con un síndrome abdominal agudo y bien manifiesto.

b) Las que sobrevengan en obreros no pre-dispuestos como consecuencia de un traumatismo o esfuerzo, siempre que éste sea violento, imprevisto y anormal en relación al trabajo que habitualmente ejecuta el obrero.

Art. 18. Para la declaración de la incapacidad producida por una hernia, de no estimar el patrono entidad aseguradora que se trata de una hernia de fuerza de las comprendidas en el apartado a) del artículo anterior, podrá solicitarse por cualquiera de las partes, o acordarse por el juez, la práctica de una información médica, conforme a lo que se dispone en el artículo presente.

En el caso del apartado b) del artículo anterior será obligatoria la práctica de la información mé-

dica precitada en plazo de tres meses, a contar del día en que el obrero se sintió lesionado.

La información habrá de practicarse de oficio, y a la mayor brevedad posible, bien por los Ayuntamientos de las localidades en que no haya delegado de Trabajo o ante éste.

Al efecto de la información, se citará, con todos los requisitos legales, al patrono o entidad aseguradora, y, acreditada esta citación, no podrá interrumpirse el procedimiento por su falta de comparecencia, sino que se continuará, en su rebeldía, con los documentos que presente el obrero, que, a falta de otros contradictorios, surtirán plenos efectos legales.

Art. 19. En la información a que se refiere el artículo anterior, se hará constar:

1.º Los antecedentes personales del sujeto observado y los resultados de los exámenes anteriores que haya sufrido.

2.º Las circunstancias del accidente, referidas por el paciente y confirmadas por los testigos, si los hubo, puntualizando la naturaleza del trabajo a que se dedicaba el obrero, la posición exacta en que se encontraba en el momento del accidente, si estaba cargado al efectuar el esfuerzo al que se refiere la producción de la hernia, y la clase de ese esfuerzo.

3.º Los síntomas observados en el momento del accidente y en los días sucesivos, comprobando muy especialmente si se produjo un dolor brusco en el momento del accidente, su localización y condiciones; si fué precisa la intervención inmediata de un médico, y el tiempo que duró la suspensión de las faenas del herniado, caso de haber sido necesaria esta suspensión.

4.º Los caracteres de la hernia producida, los relacionados con el examen detenido del estado de integridad funcional de la región afecta y de la pared abdominal, y los deducidos de los reconocimientos, en fechas posteriores del lesionado.

Art. 20. Los patronos o las entidades aseguradoras podrán exigir de los obreros que vayan a ser admitidos al trabajo el que se sometan a un reconocimiento médico previo, desde el punto de vista especial de la predisposición a padecer cualquier clase de hernia.

Se considerarán síntomas preferentes para calificar una predisposición a la hernia inguinal la gran dilatación del anillo inguinal externo, el choque visceral contra los dedos introducidos en el canal y la desaparición del canal inguinal; para la hernia umbilical, la debilidad de los músculos de la pared abdominal y la ptosis visceral.

El resultado de ese reconocimiento se hará constar en un libro que se llevará al efecto, autorizando cada inscripción, con su firma, el médico que practique el referido reconocimiento y el obrero reconocido, y ese libro deberá tenerse a la vista, como documento de información, en todos los casos de reclamación por ese concepto.

Cuando un obrero no haya sido sometido a dicho reconocimiento médico por dejación de la facultad que el patrono tiene para exigirlo, se presumirán *juris tantum* la sanidad del obrero.

Art. 21. La negativa del obrero a someterse al

reconocimiento se consignará en el libro especial indicado en el artículo anterior, debiendo firmar dicha diligencia el obrero. Cuando éste se opusiera a ser reconocido, se hará constar en dicho libro esta oposición, firmando la diligencia, a petición del patrono, dos testigos presenciales de la negativa.

Si el obrero reconocido no estuviera conforme con la opinión facultativa del médico nombrado por el patrono, podrá nombrar otro por sí para que le reconozca nuevamente, ateniéndose a su resultado cuando coincidan los dos diagnósticos. En el caso de que éstos sean distintos, se estará, sin otro recurso, a lo que resulte del reconocimiento practicado por un tercer médico, que se nombrará a instancia de una de las partes por el juez de primera instancia del término en que el reconocimiento se verifique.

Art. 22. A falta del reconocimiento médico del obrero, por negativa completa a cualquiera de las formalidades establecidas, dará lugar a la presunción *juris tantum* de que éste padecía con anterioridad una hernia o reunía condiciones orgánicas constituyentes de una predisposición a la misma.

Art. 23. Una vez declarada la hernia como indemnizable, el obrero podrá optar por la operación y renunciar a la indemnización o renta como incapacidad permanente. En estos casos serán de cuenta del patrono los gastos de la operación y los jornales de convalecencia, que, a lo sumo, durará un mes después de la cicatrización de la hernia externa operatoria.

Una hernia reproducida sólo dará derecho a indemnización en los casos en que el obrero no la haya cobrado antes y trabaje después con el mismo patrono por cuenta del cual se practicó la operación.

En caso de considerarse necesaria la operación y de negarse el accidentado a someterse a ella, se estará a lo dispuesto en el artículo 72.

Art. 24. La lesión conocida con el nombre vulgar de callo recalentado se considerará como incapacidad temporal para los efectos de la indemnización.

No obstante, si el proceso infectivo motivado por el callo recalentado da lugar a una incapacidad permanente, ésta será indemnizada en la misma forma que se señala en los artículos correspondientes.

Art. 25. Todas las incapacidades son definidas; pero pueden coexistir con ellas otras de menor importancia, que se evaluarán con arreglo al siguiente cuadro y harán cambiar la categoría de aquéllas cuando sumen más de un 50 por 100, haciéndolas pasar a la superior inmediata.

Cuadro de valoraciones. — Tanto por ciento.

1.º Pérdida de la segunda falange del pulgar derecho, 25 por 100.

Pérdida de la segunda falange del pulgar izquierdo, 12 por 100.

2.º Pérdida total del índice derecho, 25 por 100.

Pérdida total del índice izquierdo, 18 por 100.

3.º Pérdida de cualquiera de los otros dedos, 15 por 100.

4.º Pérdida de una falange cualquiera de los demás dedos de la mano, excepto el pulgar, 9 por 100.

5.º Anquilosis de la muñeca derecha, 45 por 100.

Anquilosis de la muñeca izquierda, 30 por 100.

Cuando ocurran tan sólo lesiones de las mencionadas en el cuadro de valoraciones, serán conceptuadas como causantes de incapacidad parcial permanente para la profesión si sumasen 50 o más por 100 las valoraciones correspondientes.

A los efectos de este artículo y cuando se trate de mujeres, cualquiera que sea su edad, y de obreros mayores de sesenta años, bastará que la suma de las valoraciones llegue al 40 por 100 para que la incapacidad pase a la categoría superior inmediata o se califique de incapacidad parcial permanente para la profesión.

Sección 2.ª — De las indemnizaciones.

Art. 26. Las indemnizaciones debidas en caso de accidente seguido de muerte o de incapacidad permanente de la víctima serán abonadas a ésta o a sus derechohabientes en forma de renta.

Por excepción de esta regla, las indemnizaciones podrán ser abonadas en totalidad o en parte, en forma de capital, a solicitud del accidentado o de sus derechohabientes, por acuerdo de la Comisión Revisora Paritaria Superior de Previsión Social, creada por decreto de 7 de abril de 1932. La indicada Comisión examinará las circunstancias del caso, apreciará si se ofrecen garantías de empleo juicioso del capital que se haya de abonar y decidirá libremente la denegación de la solicitud o accederá a ella, fijando la parte del valor del rescate que haya de ser satisfecha como indemnización, sin que en ningún caso pueda exceder del importe de cuatro años de salario de la víctima.

Art. 27. La indemnización a que se refiere el artículo 9.º de este reglamento será abonada en la cuantía y forma siguientes:

1.ª Si el accidente hubiera producido una incapacidad temporal, el patrono abonará a la víctima una indemnización igual a las tres cuartas partes de su jornal diario desde el día en que tuvo lugar el accidente hasta el en que se halle en condiciones de volver al trabajo, o se le dé de alta con incapacidad permanente o falleciese a consecuencia del accidente, entendiéndose que la indemnización será abonada en los mismos días en que lo haya sido el jornal, sin descuento alguno por los festivos.

Si, transcurrido un año, no hubiese cesado aún la incapacidad, la indemnización se regirá por las disposiciones relativas a la incapacidad permanente, sin perjuicio del resultado de la revisión que procediere.

2.ª Si el accidente hubiese producido una incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, el patrono deberá abonar a la víctima una renta igual al 50 por 100 del salario.

3.ª Si el accidente hubiese producido una incapacidad permanente y total para la profesión habitual, pero que no impida al obrero dedicarse a otro género de trabajo, la renta será igual al 37,5 por 100 del salario.

4.^a Si el accidente hubiera producido una incapacidad parcial y permanente para la profesión o clase de trabajo a que se hallaba dedicada la víctima, el patrono deberá satisfacer a éste una renta igual al 25 por 100 del salario.

En caso de incapacidad para la profesión habitual, si el obrero llegare a percibir salario que, sumado a la renta, sea igual o mayor que el que cobraba al ocurrir el accidente, cesará en el percibo de la diferencia, recuperando esta parte de la renta si dejare de percibir tal cuantía del salario.

Para fijar la cuantía de la renta a que se refieren las disposiciones 2.^a, 3.^a y 4.^a de este artículo, en el caso de que el salario estuviese determinado por cantidad diaria, no podrá hacerse otro descuento que el importe de los días en que, siendo obligatorio el descanso, no habría correspondido al obrero percibir salario. Sólo procederá el descuento en el caso de que el obrero utilizase realmente el descanso antes del accidente y no percibiese salario por los días de reposo.

Si la retribución del obrero se hiciere por tanto alzado mensual, la cuantía de la renta mensual se fijará multiplicando por 0,50 — 0,375 o 0,25, respectivamente, la cantidad mensual que percibiera el obrero.

Si la retribución se hiciere por tanto alzado semanal, se multiplicará el importe de una de éstas por 52, adicionando una sexta parte de la asignación semanal para fijar la cantidad correspondiente a un año de salario, cantidad a la que se aplicarán los coeficientes legales respectivos para el señalamiento de la renta anual.

Art. 28. Si el beneficiario de una renta por incapacidad permanente es víctima de un nuevo accidente del trabajo, seguirá percibiendo dicha renta, así como las tres cuartas partes de su salario hasta la curación completa del nuevo accidente o hasta que se le dé el alta con nueva incapacidad o fallezca por las lesiones recibidas.

En estos dos últimos casos, para fijar la indemnización que corresponda a él o a sus derechohabientes, se tomará como base la incapacidad producida por todos los accidentes, calculándose la renta según el salario que el obrero ganaría si tuviere su capacidad completa. Con cargo al nuevo accidente sólo se abonará el exceso de renta preciso para la entrega de la que corresponda a la nueva incapacidad declarada.

Art. 29. Si el accidente produjese la muerte del obrero, el patrono queda obligado a sufragar los gastos de sepelio por la cantidad que fija el artículo siguiente, y, además, a indemnizar a la viuda, descendientes legítimos o naturales, reconocidos, menores de dieciocho años, o inútiles para el trabajo y hermanos huérfanos menores de dieciocho años que se hallasen a su cargo y ascendientes, o al Fondo de garantía, en la forma y cuantía que establecen las disposiciones siguientes:

1.^a Con una renta igual al 50 por 100 del salario que disfrutara la víctima cuando ésta deje viuda e hijos o nietos inútiles para el trabajo, o huérfanos menores de dieciocho años, que se hallasen a su cuidado.

2.^a Con una renta igual a la anterior, si sólo dejasen hijos o nietos inútiles para el trabajo o huérfanos menores de dieciocho años o hermanos

menores de dicha edad huérfanos, y también a su cargo.

3.^a Con una renta del 25 por 100 del salario a la viuda con hijos mayores de dieciocho años, o sin hijos ni otros descendientes del difunto.

4.^a Con una renta del 20 por 100 del salario a los padres o abuelos de la víctima, pobres y sexagenarios o incapacitados para el trabajo, si no dejase viuda ni descendientes, siempre que sean dos o más los ascendientes. En el caso de quedar uno solo, la indemnización consistirá en una renta equivalente al 15 por 100 del salario que percibiera la víctima.

5.^a Con el capital preciso para constituir una renta del 15 por 100 del salario, calculado conforme al artículo 37 de este reglamento al Fondo especial de garantía, siempre que el obrero fallecido carezca de los derechohabientes mencionados en los apartados anteriores.

Los hermanos huérfanos a que se refiere el párrafo primero de este artículo se consideran en análoga situación a los jóvenes prohijados o acogidos por la víctima, sin que sea necesaria la inscripción en el Registro especial.

Las disposiciones de los números 1.^o, 2.^o y 4.^o serán aplicables en el caso en que la víctima del accidente sea mujer; pero la del número 1.^o y la del 3.^o sólo beneficiarán al viudo cuando su subsistencia dependiera de la mujer víctima del accidente. Las contenidas en el párrafo primero y números 1.^o y 2.^o de este artículo serán aplicables a los hijos adoptivos y a los jóvenes prohijados o acogidos por la víctima, siempre que estos últimos estuvieran sostenidos por ella, con la antelación, por lo menos, de un año al tiempo del accidente y no tengan otro amparo.

La incapacidad o inutilidad de los derechohabientes a que se refiere este artículo ha de entenderse no producida por accidente del trabajo que hubiesen sufrido y por el cual perciban renta igual o superior a la que, en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, le correspondería percibir.

En los Registros civiles correspondientes a cada localidad se abrirá un Registro especial, donde se hará constar el nombre de cada acogido, el de la persona que lo acoja y la fecha del acogimiento, sin que pueda reclamarse derecho a indemnización estando incumplido este precepto.

Art. 30. La obligación del patrono de abonar los gastos del sepelio de la víctima de un accidente, se ajustará a las siguientes reglas:

a) En poblaciones que no excedan de 20.000 habitantes, 100 pesetas.

b) En poblaciones de 20.000 a 100.000 habitantes, 150 pesetas.

c) En poblaciones mayores de 100.000 habitantes, 200 pesetas.

Art. 31. Las rentas que se asignen en virtud de lo dispuesto en el artículo 29, serán vitalicias para los ascendientes y descendientes inútiles, a no ser que pierdan la cualidad por la cual se les concedió y para la viuda mientras no contraiga matrimonio.

Serán temporales las de los descendientes válidos y hermanos menores huérfanos, todos los cuales cesarán de disfrutarlas al cumplir la edad de dieciocho años.

Art. 32. Cuando el obrero fallecido deje viuda e hijos menores y aquélla contraiga nuevo matrimonio antes de llegar a la edad de dieciocho años el más joven de éstos, la totalidad de la renta será percibida por los hijos menores.

Si el obrero fallecido dejó viuda e hijos menores, cuando el último de éstos cumpla la edad de dieciocho años la viuda percibirá en lo sucesivo la renta del 25 por 100 del salario.

Si entre los hijos hubiera uno o varios inútiles o incapacitados para el trabajo, la parte de la renta que los demás dejen de percibir al cumplir los dieciocho años acrecerá la de los inútiles o incapacitados mientras lo sean.

Art. 33. Cuando un obrero fallecido a consecuencia de un accidente de trabajo deje viuda e hijos del matrimonio con la misma e hijos de otros matrimonios anteriores o hijos naturales reconocidos, se observarán, respecto al pago de la indemnización establecida en el artículo anterior, las siguientes reglas:

1.^a Corresponderá a la viuda la mitad de la renta total.

2.^a La otra mitad se distribuirá por partes iguales, entre los hijos de todos los matrimonios y los naturales reconocidos.

3.^a La viuda percibirá la parte de indemnización perteneciente a los hijos constituidos bajo su patria potestad.

4.^a Las partes correspondientes a los hijos de anteriores matrimonios y los naturales reconocidos se entregarán a quienes de hecho los tuvieren a su cargo, sean la misma viuda u otras personas.

El derecho de la viuda por sí misma a ser indemnizada conforme a la disposición primera del artículo 29, no puede invalidarse por la circunstancia de tener hijos mayores de dieciocho años, debiendo, en este caso, considerarse equiparada a la viuda sin hijos.

Art. 34. Toda indemnización se aumentará en una mitad más si el accidente ocurre en establecimiento u obra cuyas máquinas y artefactos carezcan de los aparatos de precaución reglamentarios, conforme a las disposiciones en vigor.

Art. 35. Las indemnizaciones fijadas por la ley serán objeto de un suplemento otorgado a la víctima del accidente cuando, por la incapacidad consecuencia de éste, necesite la asistencia constante de otra persona.

A esta indemnización suplementaria tendrán derecho únicamente los grandes inválidos (pérdida anatómica o funcional de las dos extremidades superiores y casos análogos); tanto en estos casos como en sus análogos, el obrero tendrá que probar que, no sólo está incapacitado para el trabajo, sino que, además, no puede realizar por sí solo los actos más necesarios de la vida (comer, vestirse, etc.).

Dicho suplemento será señalado por la Comisión revisora paritaria competente, la que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, lo fijará, de no haber existido acuerdo entre las partes interesadas, sin que pueda exceder de la mitad de la indemnización principal.

Art. 36. La víctima del accidente del trabajo

tendrá también derecho a que se suministren y se renueven normalmente, según los casos, por la institución del seguro o por el patrono, los aparatos de prótesis y ortopedia que se consideren necesarios para la asistencia del accidentado.

Podrá admitirse el abono de una indemnización suplementaria, fijada al señalar la cuantía de la indemnización o al revisar dicha cuantía, indemnización que represente el coste probable del suministro y renovación de los aparatos antes indicados.

La inspección médica de la Caja Nacional determinará, oyendo al facultativo del patrono o de la entidad aseguradora, en los casos de duda, sobre la necesidad y clase de aparatos ortopédicos y prótesis que el obrero requiere, bien entendido que las prótesis para amputados serán siempre las llamadas de tipo de trabajo.

La Caja Nacional fijará anualmente una tarifa con el coste aproximado de los aparatos ortopédicos y prótesis, así como del coste probable de su renovación, atendido su natural desgaste.

Art. 37. Para el cómputo de las obligaciones establecidas en este reglamento se entenderá por salario, a efectos del pago de indemnizaciones, la remuneración o remuneraciones que efectivamente gane el obrero, en dinero o en cualquier otra forma, por el trabajo que ejecute por cuenta del patrono a cuyo servicio esté cuando el accidente ocurra, ya sean aquéllas en forma de salario fijo o a destajo, ya por horas extraordinarias, o bien por primas de trabajo, manutención habitación u otra remuneración de igual naturaleza.

En la aplicación de este precepto se observarán las siguientes reglas:

a) Las remuneraciones que, aparte del salario fijo o a destajo, gane el obrero, en cada caso sólo se computarán como salario cuando tengan carácter normal.

b) El salario diario, haya mediado o no estipulación, no se considerará nunca menor de dos pesetas, aun tratándose de mujeres o menores que no perciban remuneración alguna o que perciban menos de esa cantidad.

c) Para fijar el salario que el obrero no percibe en dinero, sea en especies, en uso de habitación o en otra forma cualquiera, se computará dicha remuneración con arreglo a su promedio de valor en la localidad para los obreros de condición análoga a la de la víctima.

d) Si el servicio se contrató a destajo o por unidad de obra, debe regularse el salario apreciándose prudencialmente el que, por término medio, correspondería a los obreros de condiciones semejantes a las de la víctima del accidente en iguales trabajos, y en su defecto en los más análogos posibles.

e) Las horas extraordinarias se considerarán remunerables, conforme a lo que determinan las disposiciones vigentes.

f) Si se tratase de obreros accidentados en trabajos eventuales, a falta de pacto expreso respecto a la remuneración, servirá de base el salario señalado por los Jurados mixtos del Trabajo en la comarca, y si no se hallasen consti-

tuidos dichos organismos, servirá de base el salario medio del partido judicial a que pertenezca el pueblo en que ocurrió el accidente; y

g) Cuando los individuos de la dotación de un barco hubieren sido ajustados a tanto alzado por viaje, la indemnización que les corresponda, en caso de accidente, se regulará dividiendo el importe de la suma convenida como tanto alzado por el número de días que normalmente debe durar la navegación de que se trate.

Art. 38. Unas indemnizaciones no excluyen otras. Por tanto, las debidas por incapacidad permanente son independientes de las determinadas para los casos de incapacidad temporal, y las indemnizaciones por causa de fallecimiento no excluyen las que corresponderían a la víctima durante el tiempo transcurrido desde el accidente a la muerte.

Art. 39. Cuando el accidente produjese el fallecimiento de la víctima y no existiera derechohabiente alguno a las indemnizaciones determinadas en los artículos 29 al 34, el patrono, o la entidad subrogada, vendrá obligada a ingresar en el Fondo de garantía a que se refiere el capítulo VI, la cantidad necesaria para haber constituido renta del 15 por 100 del salario.

Sección 3.ª — De la declaración de incapacidades.

Art. 40. En el certificado de alta dado por el médico del patrono, Mutuality o Compañía, se calificará, en su caso, la lesión del obrero y se dictaminará sobre la incapacidad resultante, con arreglo a los artículos 13 al 15 de este reglamento.

Una vez conformes ambas partes, la Mutuality o Compañía aseguradora o el patrono, si tenía incumplida la obligación del seguro, ingresarán en la Caja Nacional, en el plazo improrrogable de un mes, el capital preciso para constituir la renta correspondiente a la incapacidad declarada. Si la Caja Nacional fuese la entidad aseguradora, comunicará al obrero interesado la incapacidad propuesta por el médico del patrono o por su propio servicio médico, y una vez obtenida la conformidad del obrero, procederá a constituir la renta correspondiente, dentro de los diez días siguientes. De no producirse la conformidad de las partes interesadas, les quedará expedito el ejercicio de las acciones correspondientes, para que se declare la incapacidad que proceda y la renta consiguiente.

Art. 41. Cuando la víctima del accidente no esté conforme con la incapacidad propuesta por el patrono o la entidad que le sustituya, y mientras se tramita y resuelve la discordia, la entidad aseguradora, o en su caso el patrono, ingresarán en la Caja Nacional, dentro del mismo plazo, el capital preciso para constituir la renta correspondiente a aquella incapacidad.

La Caja Nacional servirá al obrero víctima del accidente, la renta provisional así constituida, hasta que, resuelta por sentencia firme o acuerdo entre las partes la discordia, sea declarada de modo definitivo la incapacidad producida. Con arreglo a ésta, el patrono o la entidad asegura-

dora convertirán en definitiva la entrega de capital anteriormente hecha a la Caja Nacional, modificándola conforme a lo fallado y con efectos retroactivos.

Art. 42. Si se trata de un accidente mortal, los derechohabientes de la víctima deberán acreditar su condición de tales, con derecho a pensión ante el patrono o entidad aseguradora responsable.

En el caso de que nadie se considere con derecho a la indemnización, el patrono o la entidad aseguradora lo participarán a la Caja Nacional, la cual, de oficio, publicará en la «Gaceta de Madrid» la noticia del hecho, nombre, edad y domicilio de la víctima y la dirección a que deban dirigirse los que se crean con derecho a percibir la indemnización. Pasado un año desde la fecha del accidente, sin que se haya presentado ningún derechohabiente, el patrono o entidad aseguradora ingresarán en el Fondo de garantía la suma correspondiente, con arreglo al artículo 39.

Si surgiera discordia sobre la calidad de derechohabiente, quedará en suspenso la constitución de la renta o rentas, hasta que sea definitivamente resuelta.

Art. 43. La Caja Nacional comprobará, mediante su personal técnico, la exactitud de las declaraciones de incapacidad permanente o muerte por accidente, hechas por el médico del patrono, Mutuality o Compañía aseguradora, así como los documentos probatorios de la personalidad y derecho de los ascendientes, descendientes, viuda o hermanos menores huérfanos de la víctima.

CAPITULO III

DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES

Sección 1.ª — De la prevención de los accidentes del trabajo.

Art. 44. Los patronos de industrias o trabajos comprendidos en este reglamento, tienen el deber de emplear todas las medidas posibles de seguridad e higiene del trabajo en beneficio de sus obreros.

Art. 45. El ministro de Trabajo y Previsión social, oyendo, si lo estimare conveniente, el informe del Consejo de Sanidad y de la Academia Nacional de Medicina y, en todo caso, al Consejo de Trabajo, dictará los reglamentos y disposiciones oportunos para hacer efectiva la aplicación de los mecanismos y demás medios preventivos de los accidentes del trabajo y las medidas de seguridad e higiene que considere necesarias.

Art. 46. Se considerarán, desde luego, como medidas generales de indispensable adopción, todas las encaminadas a la seguridad de los obreros en el trabajo que ejecutan, consignadas en el catálogo de mecanismos preventivos de accidentes del trabajo aprobado por real orden de 2 de agosto de 1900.

Serán también obligatorias las disposiciones preventivas de accidentes que se dicten por consecuencia de las modificaciones a que dieren lugar los progresos de las ciencias y de los proce-

dimientos de trabajo y fabricación, y los preceptos generales sobre higiene de los centros de trabajo relativos a la capacidad superficial y cúbica, ventilación, atmósfera de los talleres, condiciones térmicas o higrométricas y de pureza del aire, limpieza, saneamiento de retretes, alumbrado natural y artificial, etc.

Además de las reglas de seguridad e higiene de carácter general, serán también obligatorias las particulares que se dicten para cada industria.

Art. 47. Será causa de responsabilidad para los patronos, el incumplimiento de las medidas de previsión de accidentes y de higiene del trabajo a que hace referencia este capítulo y las disposiciones que se dicten.

La adopción de las medidas de seguridad e higiene no dispensan al patrono del pago de las indemnizaciones legales, teniéndose en cuenta únicamente para apreciar la responsabilidad civil o criminal que pudiera existir.

La adopción de cualquier clase de medio preventivo para disminuir el riesgo de cada trabajo se aplicará con la mira de defender también al obrero contra las imprudencias, que son consecuencia del ejercicio continuado de un trabajo que, por sí o por las circunstancias de su ejecución, pueda ser peligroso.

Art. 48. La falta de medidas preventivas en el grado e importancia determinados por el reglamento y las demás disposiciones complementarias que puedan dictarse, así como el incumplimiento de los preceptos del real decreto de 25 de enero de 1908, que clasifica las industrias y trabajos prohibidos, total o parcialmente, a los niños menores de dieciséis años y a las mujeres menores de edad, motivará que se aumenten en una mitad las indemnizaciones que correspondan a los obreros, con independencia de toda clase de responsabilidades.

La prevención de los accidentes es obligatoria en un grado máximo cuando se trate de trabajos realizados por mujeres, cualquiera que sea su edad, o por varones menores de dieciocho años.

Art. 49. Será obligatorio para los patronos colocar en sitio visible de los lugares de trabajo las instrucciones que dicten a los obreros respecto a la evitación de accidentes.

Art. 50. Se declararán faltas de previsión el empleo de máquinas y aparatos en mal estado, la ejecución de una obra o trabajo con medios insuficientes de personal o de material y la utilización de personal inepto en obras peligrosas sin la debida dirección, a no ser que la falta sea directamente imputable al accidentado.

Art. 51. Se organizará en el ministerio de Trabajo y Previsión un Gabinete de experiencias, en que se conserven, para formar un Museo, los modelos de los mecanismos ideados para prevenir los accidentes del trabajo y en que se ensayen mecanismos nuevos.

Sección 2.ª — De la asistencia médico-farmacéutica.

Art. 52. La obligación más inmediata es la de proporcionar, sin demora alguna, la asistencia médica y farmacéutica, sin perjuicio de las dis-

posiciones en materia de higiene y seguridad del trabajo, respecto a la obligación de un servicio sanitario en determinados trabajos, asistencia que se prestará al obrero hasta que éste se halle en condiciones de volver al trabajo, no requiera ya la referida asistencia y quede el obrero lesionado comprendido en el caso de incapacidad permanente, parcial o total, o fallezca.

Art. 53. Se acudirá en el primer momento en demanda de los auxilios sanitarios más próximos; pero en el curso de la dolencia, la dirección de la asistencia médica corresponde a los facultativos designados, según los casos, por el patrono o entidad aseguradora, o por el obrero, en su caso, según preceptúa el art. 25 de la ley.

Art. 54. Si el patrono o entidad aseguradora, para los efectos de la dirección de la asistencia médica y certificación de los hechos designara facultativos, comunicará a la Delegación de Trabajo o Alcaldía, respectivamente, el nombre de los designados y las señas de sus domicilios, en un plazo que no podrá exceder de cuarenta y ocho horas.

Si no hiciera la designación se entenderá que los facultativos que asisten al lesionado tienen implícitamente la representación del patrono.

Por su parte, si el obrero hace uso del derecho que le concede el artículo 25 de la ley, estará obligado asimismo a dar el nombre y la dirección del facultativo que le asista al delegado de Trabajo o al alcalde, si no hubiere delegado en la localidad, y a su patrono o entidad aseguradora, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la designación.

El obrero dará también cuenta al patrono o entidad aseguradora de los cambios de residencia.

A los efectos del mismo apartado 2.º del artículo 25 de la ley, el médico del obrero podrá, de acuerdo con el médico del patrono, examinar el enfermo, enterarse de su tratamiento y formular las observaciones pertinentes para la más completa y acertada curación del accidentado. Caso de disconformidad se acudirá a un médico de la Beneficencia municipal, el cual dará inmediatamente dictamen por escrito, que servirá de prueba pericial, en su caso, ante el Tribunal Industrial y el juez de primera instancia.

Art. 55. Si el lesionado ingresase en un hospital, a los facultativos designados por el patrono o por el obrero se les concederán las mismas atribuciones que a los forenses.

Art. 56. Cuando la índole del accidente lo exija, o la imposibilidad de asistencia médico-farmacéutica, en el domicilio de la víctima, obligue, a juicio de la dirección facultativa del patrono, a su ingreso y permanencia en el hospital o establecimiento análogo, las estancias que se causen serán de cargo del patrono.

En las estancias se comprenderá el importe de los alimentos, medicinas, honorarios de asistencia facultativa y demás gastos que se hubieren originado como consecuencia del accidente del trabajo por virtud de la asistencia del obrero en la sala de pago, con arreglo a las tarifas generales del establecimiento.

Art. 57. Tanto el patrono como el obrero po-

drán reclamar la asistencia de los médicos de la Beneficencia municipal, los cuales deberán prestarla con arreglo a una tarifa que se fijará por decreto, previo informe del Consejo de la Caja Nacional de Seguros, Consejo de Sanidad y de la Academia Nacional de Medicina. En los Ayuntamientos se abrirá un registro, en el cual podrán inscribirse los médicos que se comprometan a prestar su asistencia a las víctimas de accidentes del trabajo, acomodándose a dicha tarifa.

Art. 58. Los patronos de las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias comprendidas en el número 5.º del artículo 7.º, cumplirán la obligación de asistencia medicofarmacéutica, mediante los servicios de las Mutualidades, a las que necesariamente deberán pertenecer, con arreglo a los artículos 12 y 83 del reglamento de 25 de agosto de 1931.

Art. 59. Cuando el médico o el farmacéutico presten al obrero determinado servicio que estuviesen obligados a prestarle, ya porque dicho obrero pertenezca a la Beneficencia municipal, ya por haberlo pagado según el sistema de «iguales», el interesado o el médico lo declarará así a la entidad aseguradora, y en este caso, si ésta retribuyera a los facultativos por servicio y no a tanto alzado, la cantidad asignada por dicho servicio servirá para aumentar la indemnización.

Art. 60. El obrero lesionado o su familia tienen además derecho a nombrar, por su parte y a su cargo, con arreglo a la tarifa especial, uno o más médicos que intervengan en la asistencia que le preste el facultativo designado por el patrono o entidad aseguradora.

Art. 61. El médico del obrero podrá, de acuerdo con el médico del patrono, examinar al enfermo, enterarse de su tratamiento y formular las observaciones pertinentes para la más completa y acertada curación del accidentado. Caso de disconformidad, se acudirá a un médico de la Beneficencia municipal, el cual dará inmediatamente dictamen por escrito, que servirá de prueba pericial, en su caso, ante el Tribunal Industrial o el juez de primera instancia.

Si el pago de indemnización estuviese a cargo de una entidad aseguradora, ésta podrá intervenir la asistencia facultativa del obrero lesionado, en la misma forma que éste.

Art. 62. El obrero que por su parte y a su cargo nombre médico que intervenga en la asistencia, estará obligado a dar el nombre y la dirección del facultativo que le asista al delegado de Trabajo o alcalde y al patrono o a la entidad aseguradora, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la designación.

También dará cuenta al patrono o entidad aseguradora de los cambios de residencia.

Art. 63. El mismo día o el siguiente al en que

se declare la incapacidad de un obrero, el médico que la califique y dé por terminada su asistencia, extenderá el dictamen facultativo y entregará un duplicado del mismo al lesionado.

Art. 64. La falta del certificado a que se refiere el artículo anterior, establece a favor del obrero la presunción de que ha necesitado asistencia facultativa hasta que otro médico califique su incapacidad.

Art. 65. Los facultativos que asistan al lesionado están obligados a librar las siguientes certificaciones:

1.ª En cuanto se produzca el accidente, la de hallarse el obrero incapacitado para el trabajo.

2.ª En cuanto se obtenga la curación, la de hallarse el obrero en condiciones de volver al trabajo, entendiéndose por curación, en este caso, que el lesionado se halle en plena capacidad para el ejercicio del oficio que realizaba.

3.ª En cuanto se obtenga la curación, resultando incapacidad, la en que se califique ésta.

4.ª Cuando el accidente exija un tratamiento de más de once meses, el obrero podrá exigir, a los efectos del párrafo segundo de la disposición primera del artículo 27, antes de que transcurra un año, un certificado del estado en que se encuentre.

5.ª En caso de muerte, la certificación de defunción, en la que se hará constar la causa inmediata de ésta.

Art. 66. En las certificaciones a que se refiere el número primero del artículo anterior, la lesión será descrita lo más detalladamente posible, igualmente que en las del número quinto, y si en este último caso se practicase la autopsia, se unirán a la certificación los datos que de esa diligencia resultaren.

En las certificaciones a que se refiere el número tercero se describirá, lo más detalladamente posible, la inutilidad resultante.

Art. 67. Librada cada certificación, se facilitará por el patrono o entidad aseguradora copia autorizada con su firma al delegado de Trabajo o alcalde en un plazo que no excederá de veinticuatro horas.

Art. 68. De las certificaciones a que se refieren los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 65 se dará duplicado a los lesionados, y si están conformes, lo harán constar, bajo su firma o la de persona que lo represente, en la misma certificación. El duplicado del dictamen se entenderá que habrá de ser contra recibí firmado por el obrero en el ejemplar que se reserve el facultativo, y, en caso de no saber firmar o negarse, se hará constar su entrega mediante dos testigos.

Art. 69. Una vez declarada la incapacidad por el médico del patrono o entidad aseguradora y aceptada por el obrero, la Caja no instituirá la renta hasta que la inspección médica dé su conformidad al dictamen.

En los casos en que la incapacidad haya sido declarada por sentencia del Tribunal, la Caja instituirá inmediatamente la renta, que únicamente podrá ser modificada según el concepto señalado para la revisión.

Art. 70. Caso de disconformidad, ya por no

Los giros para la Unión General de Trabajadores de España deben venir a nombre de ANTONIO MUÑOZ, FERNANDEZ DE LA HOZ, 51.

conceptuarse al obrero curado o por no estar conformes con la calificación de la inutilidad, el obrero podrá hacer constar su protesta en el acto y nombrar facultativos para que, con los del patrono, practiquen un nuevo reconocimiento, librando la certificación en que conste la conformidad o disconformidad de opiniones, documento que autorizarán con sus firmas todos los profesores actuantes.

Art. 71. En caso de disconformidad, se harán tres copias del documento: una para el patrono o entidad aseguradora, otra para el obrero y otra para el delegado de Trabajo o alcalde.

La autoridad remitirá copia de la certificación y de todos los antecedentes relacionados con ella a la Academia de Medicina más inmediata, que dictaminará definitivamente, y cuando ésta no exista o esté muy distante, y sea preciso reconocer al obrero, podrá sustituirse su dictamen, si éste accediese a ello, por el del subdelegado de Medicina más próximo.

Del dictamen de la Academia o del subdelegado, que serán dirigidos al delegado o al alcalde que promueva la consulta, se remitirán por esta dependencia copias al patrono o entidad aseguradora y al obrero.

Art. 72. Si para la debida asistencia del obrero accidentado y su posible curación se considerase imprescindible una intervención quirúrgica y el obrero se negase a someterse a dicha operación, requerida por el patrono o entidad aseguradora, se levantará acta en que se haga constar el requerimiento, la negativa y los informes médicos que se hubieran emitido, enviándose dicha documentación a la Caja Nacional.

Dicha Caja incoará expediente, dando la natural preferencia a los casos estimados más urgentes, y, previo dictamen del facultativo que asistiere al obrero, y, de no estar designado por éste, el que, a efectos del expediente, nombrare el accidentado, el informe del servicio técnico de la Caja decidirá la Comisión que a tal fin y con carácter general nombre la misma, en la que deberán estar representados el elemento patronal y obrero y el servicio médico sobre la procedencia o no de la intervención quirúrgica.

Si dicha Comisión decidiere proceder la intervención quirúrgica por no existir riesgo importante, el obrero podrá o no someterse a la operación. De no someterse, la Comisión examinará, con vista de todos los antecedentes del caso, si procede comunicar su decisión al Tribunal competente para declarar la responsabilidad del patrono, a fin de que sea tenida en cuenta la negativa del obrero a someterse al tratamiento médico prescrito por los técnicos y considerado como necesario para la curación total o para la disminución de incapacidad.

Si la intervención quirúrgica fuese considerada necesaria durante el período de readaptación o revisión de incapacidad, se procederá del mismo modo anteriormente prescrito, y al resolver el expediente se determinará si procede revisar la declaración de renta, disminuyéndola o retirándola, si la negativa del obrero se considerase sin razón alguna.

Contra las decisiones de la Comisión indicada en el párrafo segundo podrá alzarse el obrero en término de diez días, ante la Comisión Revisora Paritaria de Accidentes, contra cuya decisión no procederá recurso. Dicha Comisión podrá, si lo estima procedente, solicitar nuevo dictamen facultativo de centros oficiales.

Art. 73. Aunque se instruya proceso por los motivos a que se refiere el artículo 64 de la ley, no se podrán diferir los trámites que en este capítulo se señalan para definir la incapacidad, la sanidad y calificar las inutilidades, a fin de que siempre quede expedita la acción a que alude el artículo 65 de la ley.

Art. 74. El derecho de la víctima de un accidente a la asistencia farmacéutica comprende:

- a) El material que se considere necesario facultativamente.
- b) Las medicinas que, mediante receta, prescriba el médico; y
- c) Los análisis necesarios.

Art. 75. También puede el obrero lesionado o su familia proveerse de medicamentos en la farmacia que estime conveniente, si en la localidad existiera más de una, y siempre que las recetas vayan firmadas o visadas por el médico del patrono o de la entidad aseguradora.

En tales casos no vendrán obligados a pagar sino con arreglo a la tarifa de la Beneficencia municipal, o si en la localidad no la hubiere, a la vigente en Madrid hasta que se fije una general por decreto.

Art. 76. Se abrirá en los Ayuntamientos otro Registro de farmacias, en el cual se inscribirán las que se comprometan a suministrar los medicamentos necesarios, en caso de accidente, con arreglo a las tarifas indicadas. Se dictarán las disposiciones oportunas para llevar a cumplimiento el servicio médico-farmacéutico a que se refieren los párrafos anteriores.

Art. 77. El patrono estará obligado, además de facilitar las asistencias médica y farmacéutica al obrero víctima del accidente, conforme a los artículos anteriores, a prestar la asistencia quirúrgica que sea necesaria como consecuencia del accidente.

Dicha asistencia podrá estar a cargo de las instituciones de seguros, y, en defecto de hallarse a cargo de éstas, lo estará a la del patrono.

CAPITULO IV

DE LA READAPTACIÓN Y DE LAS REVISIONES

Sección 1.ª — De la readaptación profesional.

Art. 78. Dependiente de la Caja Nacional existirá un servicio especial de readaptación funcional de inválidos del trabajo, que podrá ser utilizado antes de ser dado de alta el obrero o después de declarada su incapacidad.

Art. 79. Antes de ser dado de alta el obrero, y como parte del tratamiento médico, deberá seguir el de readaptación, siempre que a juicio del facultativo, del patrono o de la entidad aseguradora, favorezca la curación o se trate de lograr la mayor aptitud para el trabajo.

El patrono o institución aseguradora podrán utilizar gratuitamente los servicios especiales organizados por la Caja Nacional, con sujeción a las normas dadas por ésta.

Art. 80. Una vez declarada la incapacidad, y estando el obrero en disfrute de la indemnización o de la renta, podrá ser sometido a un tratamiento especial para disminuir o suprimir su invalidez. En estos casos, los servicios serán exclusivamente de cuenta de la Caja.

Sección 2.^a — De la revisión de incapacidades e indemnizaciones.

Art. 81. Todas las rentas por incapacidades permanentes pueden ser revisadas durante cinco años, contando desde la fecha en que fueron constituidas.

Podrán instar la revisión de incapacidades y rentas los beneficiarios de éstas, el patrono, Mutualidad o Compañía que las costearon y la Caja Nacional.

Art. 82. Podrá fundarse la revisión en la agravación o mejora del obrero; error de diagnóstico o pronóstico al hacer la declaración de incapacidad, o muerte debida al accidente y ocurrida dentro de los dos años siguientes a la fecha del accidente. Si el motivo invocado es la muerte, la petición de revisión deberá presentarse por los derechohabientes, patrono o entidad aseguradora, dentro del mes siguiente a la fecha en que ocurra.

Art. 83. La petición de revisión debe presentarse a la Caja Nacional, y será notificada por ella inmediatamente a las otras partes interesadas.

La revisión médica será hecha por el personal sobre el resultado de la revisión, podrá recurrir los asesoramientos que estime útiles y deberá recibir los que aporten ambas partes interesadas.

En caso de disconformidad de alguna de ellas sobre el resultado de la revisión, podrá recurrir ante la Comisión Revisora Paritaria competente.

El coste de la revisión, si resultase en absoluto infundada, será pagado por el que la haya solicitado.

Art. 84. Cuando, por consecuencia de una revisión, resulte modificada la renta, la Caja Nacional devolverá el capital sobrante al que la constituyó o recibirá de éste el que falte para constituir la nueva renta, dentro del plazo de un mes. Si hubiere desaparecido el patrono o entidad aseguradora responsable o fuese insolvente, la devolución o el aumento de capital se harán en favor o a cargo del fondo de garantía.

Art. 85. Una vez transcurridos los cinco años siguientes a la constitución definitiva de la renta, no podrá procederse ya a nueva revisión.

Art. 86. Las rentas de derechohabientes es-

tarán pendientes de las condiciones determinantes de su constitución, las cuales podrá comprobar la Caja Nacional en cualquier momento.

Si surgiere discordia sobre el acuerdo que la Caja adopte, resolverá la Comisión Revisora Paritaria competente.

CAPITULO V

DEL SEGURO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

Sección 1.^a — Disposiciones generales.

Art. 87. Todo patrono comprendido en este reglamento tiene obligación de estar asegurado contra el riesgo de indemnización por incapacidades permanentes o muerte de sus operarios producidas por accidentes del trabajo.

Todo obrero comprendido en este reglamento se considerará de derecho asegurado contra dicho riesgo, aunque no lo estuviera su patrono. En el caso de que éste o la entidad aseguradora respectiva no constituyera la renta correspondiente en la Caja Nacional dentro del plazo establecido en el artículo 40, ésta la constituirá con cargo al Fondo de garantía administrado por ella.

Art. 88. El hecho de no estar asegurado el patrono, además de motivar la sanción correspondiente, le constituye directamente responsable de todas las obligaciones impuestas por la ley.

Art. 89. El riesgo de la indemnización especial, a que se refieren los artículos 34 y 48, no puede ser materia de seguro. Si se probare que alguna entidad aseguradora lo asumía, deberá ser apercibida, y en caso de persistir en pactar dicha condición, se le retirará la autorización oficial que se le hubiere concedido a los efectos de las presentes disposiciones.

Art. 90. La obligación del patrono de estar asegurado contra el riesgo de indemnización por muerte o incapacidad permanente de sus operarios, producida por accidente del trabajo, podrá ser cumplida:

a) Mediante seguro directamente convenido con la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo.

b) Mediante la inscripción en Mutualidad patronal que tenga concertada con la Caja Nacional la entrega en caso de accidente sufrido por obrero, empleado o por uno de sus asociados y que ocasionen la muerte del obrero o su incapacidad permanente, del capital necesario para adquirir la renta que deba ser abonada como indemnización al obrero víctima de la incapacidad o a sus derechohabientes en caso de muerte.

c) Mediante seguro contratado con una Sociedad de seguros legalmente constituida que tome a su cargo, en caso de sobrevenir accidente del trabajo que ocasionare la muerte del obrero o una incapacidad permanente, la entrega a la Caja Nacional del capital necesario para el abono de la renta que corresponda como indemnización.

Art. 91. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Estado, las Regiones, Provincias, Municipios, Mancomunidades y los Cabildos insulares u otras cualesquiera Administraciones

La Unión General de Trabajadores de España se ha trasladado de la Casa del Pueblo a la calle de FERNANDEZ DE LA HOZ, 51. TELEFONO 43040.

públicas, así como los particulares o Empresas concesionarias o contratistas de obras o servicios y los organismos autónomos que tengan a su cargo servicios públicos, realizarán el seguro contra el riesgo de indemnización por incapacidades permanentes o muerte de sus operarios debidas a accidentes del trabajo en la Caja Nacional, con sujeción a lo dispuesto en este reglamento o en las normas que especialmente se dicten por el ministro de Trabajo, a propuesta de la Caja Nacional, oyendo al Consejo de Trabajo.

Art. 92. Todos los patronos comprendidos en este reglamento vienen obligados a fijar en lugar visible del taller, explotación o fábrica, noticia de la entidad o entidades con las cuales han contratado el seguro obligatorio de accidentes y de los operarios o trabajos comprendidos en el contrato.

Art. 93. Los patronos o directores de industrias o trabajos comprendidos en esta ley participarán a la Inspección de Seguros Sociales, dentro de los diez primeros días del comienzo de la explotación, el nombre de la entidad con la cual han suscrito el contrato de seguro del riesgo de indemnización por incapacidad permanente o muerte de sus obreros debida a accidente del trabajo, la fecha del contrato, los trabajos que comprende, el número de obreros asegurados y el importe de sus salarios.

Los patronos de industrias o trabajos existentes al entrar en vigor este reglamento deberán cumplir lo establecido en el párrafo anterior durante el mes de abril de 1933.

El mismo aviso deberá darse por el nuevo patrono en caso de cesión, venta, traspaso o herencia de una industria o trabajo anteriormente existente, dentro de los diez días siguientes a aquel en que entró en posesión del negocio.

Art. 94. La Inspección de Seguros Sociales requerirá a los patronos comprendidos en este reglamento que no hayan cumplido con la obligación del seguro establecida en el artículo 87 para que lo hagan, en el plazo de diez días, en una de las Mutualidades o Compañías autorizadas o en la Caja Nacional, bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes.

Cuando el patrono requerido entienda que su industria no es de las comprendidas en el artículo 7.º, o que ninguno de sus operarios resulta comprendido en el artículo 3.º, lo manifestará así, alegando las razones o acompañando los datos pertinentes, a la Inspección de Seguros Sociales. Si ésta insistiese en considerarle comprendido en la obligación del seguro, resolverá la cuestión la Comisión paritaria revisora competente, pudiendo apelarse de su fallo ante la Comisión Paritaria Revisora Superior.

Art. 95. En toda industria o trabajo comprendido en el artículo 7.º el patrono viene obligado a llevar, con arreglo a los modelos que aprobará el ministerio de Trabajo y Previsión, a propuesta de la Caja Nacional, un libro de matrícula y otro de pago, que podrán ser sellados por la institución con la cual haya contratado el seguro obligatorio de indemnización por accidentes seguidos de incapacidad permanente o muerte.

Art. 96. Deberán ser inscritos en el libro de matrícula por orden de fechas de su entrada al trabajo todos los operarios que trabajen por cuenta del patrono. Para cada uno de ellos se hará constar el número de orden, apellidos y nombre, la fecha y lugar de nacimiento, la de entrada y cese en el trabajo, su categoría y ocupación en el oficio y el salario pactado.

Todo operario debe ser inscrito en el libro de matrícula antes de comenzar a trabajar.

Art. 97. En el libro de pago se consignará, para cada operario, su nombre, apellidos y número de matrícula, el número de horas que ha trabajado cada día, con mención especial de las extraordinarias, y la retribución abonada en dinero o en otra forma.

La Inspección de Seguros Sociales podrá autorizar, a petición del patrono, la sustitución del libro de pago por nóminas diarias, semanales o mensuales que se encuadernen o coleccionen.

Art. 98. Los libros de matrícula y de pago deben ser presentados siempre que lo reclamen los inspectores de Seguros Sociales o las personas autorizadas para ello por la entidad en la que el respectivo patrono haya hecho el seguro de sus operarios.

Art. 99. Los patronos podrán sustituir todas las obligaciones que les impone esta ley, no consignadas en el artículo 87, en una Mutualidad patronal o en una Sociedad de seguros debidamente constituida y que sean de las aceptadas para este efecto por el ministerio de Trabajo.

Art. 100. Conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 83 del reglamento de 25 de agosto de 1931, los patronos comprendidos en el número 5.º del artículo 7.º de la ley deberán cumplir el deber de prestar la asistencia medicofarmacéutica al obrero víctima de accidente del trabajo, mediante los servicios de las Mutualidades a que obligatoriamente ha de pertenecer cada patrono. No habrá otras excepciones a esta obligación que las otorgadas con arreglo al artículo 84 del reglamento citado.

Art. 101. No obstante el seguro, el obrero y sus derechohabientes podrán ejercitar sus acciones directamente contra el patrono si así les conviniera; pero cuando dirijan la demanda contra la entidad aseguradora deberán dirigirla a la vez contra el patrono.

Art. 102. La suma que el obrero ha de percibir de las Mutualidades o de las Sociedades de seguros en ningún caso podrá ser inferior a la que le correspondía con arreglo a las disposiciones de este reglamento.

Art. 103. Puede asegurarse el mismo riesgo por distintas personas en diferentes entidades; pero en ningún caso el asegurado podrá percibir como renta una cantidad superior al salario que, según este reglamento, sirve de base para determinar la indemnización correspondiente. Si, acumulados los diversos seguros, resultara superior, se disminuirán proporcionalmente las indemnizaciones pactadas.

Art. 104. Las primas o cuotas del seguro de accidentes del trabajo serán a cargo exclusivo del patrono responsable. Es nulo todo pacto por el

cual el operario asegurado pague parte de la prima.

Art. 105. Tanto las Mutualidades patronales como las Sociedades de seguros habrán de prestar fianza, en la cuantía que señalan las disposiciones siguientes, para garantía del cumplimiento de sus obligaciones.

Art. 106. Las fianzas que, con arreglo al presente reglamento, han de prestar las entidades aseguradoras podrán constituirse indistintamente en la Caja general de Depósitos, en el Banco de España o en las sucursales respectivas, en metálico o valores públicos, a disposición del ministro de Trabajo.

Las fianzas sólo podrán devolverse a la liquidación o disolución de las entidades aseguradoras o al cesar en el seguro de accidentes, cuando no exista ninguna responsabilidad pendiente que pueda afectarlas.

Art. 107. Las Mutualidades deberán constituir y reponer, en su caso, la fianza inicial que en cada caso se fije, y que no bajará de 5.000 pesetas, aplicándose, para años sucesivos, la regla de proporcionalidad con el total de los salarios que hayan servido de base a los seguros del ejercicio precedente.

Art. 108. Las Sociedades de seguros que, directamente o por reaseguro, tomen a su cargo las indemnizaciones previstas en el presente reglamento constituirán una fianza especial, cuyo importe fijará el ministerio de Trabajo, a propuesta de la Asesoría de Seguros. Dicha fianza estará en relación con el total de salarios que haya servido de base a los seguros del año precedente, sin que la fianza pueda ser inferior a 200.000 pesetas cuando la Sociedad actúe en varias provincias, y a 150.000 pesetas cuando actúe en una sola.

Art. 109. Cuando las Mutualidades patronales practiquen, además del seguro contra accidentes del trabajo, el de accidentes de mar, se comunicará su inscripción al Instituto Social de la Marina, y se tendrá en cuenta esta circunstancia para el señalamiento de la fianza inicial a que se refiere el artículo 107.

Art. 110. Tanto las Mutualidades patronales como las Sociedades de seguros deberán presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los salarios asegurados en el año anterior, para determinar el importe de la fianza. La Asesoría de Seguros, en vista de este dato, propondrá al ministerio de Trabajo y Previsión la alternación que haya de exigirse en su respectiva fianza.

Sección 2.ª — De las Mutualidades.

Art. 111. A los efectos de este reglamento se considerará Mutualidades patronales a las Asociaciones de este carácter, legalmente constituidas, cuyas operaciones se reduzcan a repartir entre los asociados el equivalente de los riesgos sufridos por una parte de ellos, sin que puedan estas Mutualidades dar lugar a beneficios de ninguna clase.

Art. 112. Las Mutualidades podrán comprender industrias y trabajos distintos.

Art. 113. Las Mutualidades patronales deberán asegurar, como minimum, a mil obreros y componerse de más de diez patronos, quienes acreditarán su carácter de tales con el último recibo de la respectiva contribución industrial.

La Caja Nacional podrá acordar, en casos excepcionales de condiciones geográficas y de organización industrial, la constitución de Mutualidades si sujeción a las cifras indicadas, si estima que quedan suficientemente asegurados los riesgos.

Art. 114. En los estatutos de las Mutualidades se consignará:

1.º Denominación, objeto, territorio que abarque, domicilio y duración.

2.º Régimen de la Mutualidad, sobre la base del reconocimiento de su personalidad jurídica y de su autonomía; derechos y deberes de los asociados; altas y bajas de los mismos; registro de asociados.

3.º Normas relativas al caso de modificación de los estatutos y al de fusión de la Mutualidad con otra u otras.

4.º Normas de funcionamiento interior y gobierno de la Mutualidad, señalando las facultades de las Juntas y demás organismos directivos que puedan haber, y forma de nombramiento y separación de los empleados retribuidos que sean necesarios.

5.º Relaciones de la Mutualidad con otra u otras Mutualidades; requisitos para la fusión.

6.º Régimen económico y de administración de la Mutualidad, comprendiendo:

a) Fijación de cuotas.

b) Constitución del fondo de reserva.

c) Normas de administración y máximo admisible para los gastos de esta clase; y

d) Normas para el servicio de contabilidad.

Art. 115. Entre las obligaciones de los asociados figurará necesariamente la de resarcir a la Mutualidad cuando el accidente fuese debido a imprudencia o descuido graves o reiterados del patrono u omisión de precauciones reglamentarias.

Art. 116. Será obligatorio también establecer la responsabilidad mancomunada de los socios respecto a las obligaciones de la Mutualidad, tanto con respecto a las indemnizaciones que abone a los obreros o a sus derechohabientes como de las que el fondo de garantía satisfaga por no haberlo ella a su tiempo, y en general, a las obligaciones que contractual o reglamentariamente la alcancen, responsabilidad que no terminará hasta la liquidación del período correspondiente de las operaciones sociales o la liquidación final, en su caso.

Art. 117. Los estatutos de las Mutualidades, y lo mismo los reglamentos particulares, en su caso, deberán ser sometidos a la aprobación del ministerio de Trabajo, previos los informes de la Caja Nacional de Seguros de Accidentes y del Consejo de Trabajo.

A tal efecto, acompañarán a la instancia los documentos siguientes:

a) Acta de constitución inicial de la Mutualidad;

b) Tres ejemplares de los estatutos y de los reglamentos que se sometan a su aprobación;

c) Tres ejemplares de los cuadros de cuotas y modelos de la documentación para ingreso en la Mutualidad, y

d) Acta en que se obliguen los iniciadores a constituir la fianza inicial mínima.

Si merecieran los estatutos la aprobación, se devolverá uno de los ejemplares, con la diligencia correspondiente y sellado en todas sus hojas. En caso contrario especificarán los reparos, para que puedan ser salvados en una nueva redacción.

La aprobación o los reparos habrán de comunicarse dentro del plazo de dos meses, salvo que lo impidiese la discusión en alguno de los Centros informantes, lo cual se comunicará también, dentro del mismo plazo, a la entidad interesada o a sus organizadores.

A la misma autorización, mediante igual trámite, habrá de ser sometida toda modificación de los estatutos y reglamentos.

Art. 118. Deberá ser denegada la aprobación a todo documento en que se mermen por cualquier medio las indemnizaciones procedentes en casos de accidente o en que se estipulen condiciones por las que se dilate sin verdadera necesidad el pago de las cantidades debidas a quienes se otorgan.

Art. 119. Las Mutualidades no podrán comenzar su gestión sin que sus estatutos hayan sido aprobados. El mismo requisito de aprobación será indispensable para la implantación de nuevos reglamentos o la de modificación de estatutos y reglamentos.

Art. 120. Los patronos asociados estarán obligados a comunicar a sus respectivas Mutualidades las altas y bajas de obreros, salarios y, en general, todos los datos necesarios para el cumplimiento de sus fines y el buen funcionamiento de la Mutualidad.

En caso de que los patronos no pudieran por sí poner tales comunicaciones, podrán hacerlas por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento correspondiente.

La negativa o resistencia a facilitar tales datos, y lo mismo la inexactitud deliberada o producida por descuido no disculpable, darán lugar a multa de 5 a 50 pesetas, la cual será impuesta por la Directiva de la misma Mutualidad, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que los mutualistas pudieran haber incurrido y de la indemnización de perjuicios si procediere.

En caso de reincidencia, dentro del término de un año, la cuantía de la multa podrá elevarse hasta cien pesetas.

El importe de las multas irá a engrosar el fondo especial de garantía a que hace referencia el artículo 160.

Contra la imposición de estas multas podrá recurrirse, en el término de quince días, ante la Delegación provincial de Trabajo, que resolverá inapelablemente.

La sanción podrá reducirse a un simple apercibimiento en los casos menos graves, sobre todo en el período de establecimiento de las Mutualidades.

Art. 121. Las Mutualidades tendrán capacidad jurídica para adquirir y poseer bienes y para cele-

brar todos los actos y contratos relacionados con los fines de su institución y tendrán personalidad para comparecer ante toda clase de Tribunales, oficinas y dependencias.

Art. 122. El capital de las Mutualidades deberá aplicarse estrictamente al objeto social.

Art. 123. Las Mutualidades llevarán registros de los patronos que hayan convenido con ellas el pago de las indemnizaciones en caso de accidente del trabajo sobrevenido a sus obreros, consignando, respecto de estos últimos, edad, remuneración, oficio y clase de labores a que preferentemente se dediquen. Los mismos datos se comunicarán por los patronos en cuanto a los obreros eventuales.

Se llevará también registro de los demás particulares que se estimen necesarios para el mejor cumplimiento de lo dispuesto reglamentariamente.

Art. 124. Las Mutualidades podrán nombrar delegados para vigilar el cumplimiento de las disposiciones y medidas por ellas adoptadas dentro de su especial competencia.

Podrán requerir al efecto el auxilio de las autoridades de todas clases, y especialmente el de los inspectores del trabajo de seguros sociales.

Art. 125. Las Mutualidades podrán hacer efectivas las cuotas de los asociados morosos por el procedimiento judicial de apremio, en la misma forma regulada por el artículo 152 para la Caja nacional.

Art. 126. Para el cobro de cuotas, las Mutualidades gozarán de preferencia respecto de cualquier otro acreedor sobre los bienes del deudor, salvo lo ya dispuesto en las leyes vigentes.

Art. 127. Las Mutualidades están obligadas a remitir al ministerio del Trabajo y a la Caja nacional los balances y memorias anuales, e igualmente todos los datos que se les pidan para la publicación de la estadística de accidentes o para el mejor régimen del seguro de accidentes.

En caso de disconformidad del asociado sobre la existencia o la cuantía del descubierto, se suspenderá la ejecución hasta que resuelva la Comisión revisora paritaria competente.

Art. 128. Las Mutualidades deberán presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de las operaciones hechas en el año anterior, para determinar, en relación con ellas, el importe de las fianzas, que será fijado por el ministerio de Trabajo.

Sección 3.^a — De las Compañías de seguros.

Art. 129. Los patronos podrán contratar directamente con las Compañías de seguros legalmente constituidas el seguro de accidentes de sus obreros. Dichas Compañías habrán de reunir las condiciones que determina el presente reglamento y ser de las autorizadas para estos efectos por el ministerio de Trabajo.

Art. 130. Las Sociedades de seguros que deseen la autorización para sustituir al patrono, además de las señaladas por la ley y reglamento de Seguros deberán reunir especialmente las condiciones siguientes:

1.^a Separación de las operaciones de seguro

de accidentes del trabajo de cualesquiera otras que realicen.

2.^a Las fianzas especiales determinadas en los artículos anteriores.

3.^a Aceptación de los preceptos legales vigentes en materia de accidentes del trabajo.

4.^a Comunicación al ministerio de Trabajo de los estatutos, balances y empleo del capital, condiciones de las pólizas, tarifas de primas, cálculo de reservas y estadística de contratos estipulados, sus renovaciones y cumplimiento o terminación.

Art. 131. Las Sociedades de seguros no podrán funcionar sin ser aprobadas en su concepto genérico, o sea respecto al seguro en general, por la Inspección general de Seguros, y sin ser insertas, por su especialidad, en el registro de las autorizadas para sustituir al patrono en las obligaciones que le impone la ley, registro que está a cargo de la Asesoría general de Seguros del ministerio de Trabajo, creada por real decreto de 27 de agosto de 1900.

Art. 132. El asesor general de seguros de accidentes del trabajo informará y auxiliará al ministro de Trabajo en los servicios de registro, comprobación, reglamentación y publicidad relativos al seguro de accidentes del trabajo.

Las Sociedades de seguros seguirán abonando los derechos de registro con arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 27 de agosto de 1900. Estos derechos se señalarán anualmente por orden del ministerio de Trabajo, que deberá publicarse en la *Gaceta*.

Art. 133. Para ser inscritas en el registro a que se refiere el artículo anterior, las entidades aludidas deberán solicitarlo del ministerio de Trabajo, acompañando a la instancia la documentación siguiente:

- a) Acta de constitución y dos ejemplares de los estatutos.
- b) Dos ejemplares del reglamento.
- c) Dos de las tarifas de primas.
- d) Dos modelos de pólizas colectivas de accidentes; y
- e) Testimonio notarial del resguardo que demuestre haber constituido la fianza determinada por este reglamento.

Art. 134. Las Compañías de seguros no podrán operar con tarifas inferiores a las aprobadas por el ministerio de Trabajo y Previsión a propuesta de la Caja nacional.

Art. 135. En cuanto sea inscrita una Sociedad de seguros, la Asesoría de Seguros del ministerio de Trabajo devolverá a quien la represente uno de los ejemplares de la póliza presentada con el sello de dicha dependencia. Toda alteración que se introduzca en las tarifas deberá ser sometida a la aprobación del ministerio citado, previo informe de la Asesoría.

Art. 136. No será aprobada ninguna póliza en que se mermen por cualquier medio las indemnizaciones procedentes en caso de accidente, ni aquellas en que se estipulen condiciones por las que se dilate innecesariamente el pago de las cantidades debidas a quien se otorgan.

Art. 137. En las pólizas de seguros de accidentes del trabajo se consignará claramente:

a) Si queda sustituido el patrono en todas sus obligaciones, o bien se expresarán taxativamente aquellas en que la entidad aseguradora acepte su sustitución.

b) Si el seguro comprende los riesgos de incapacidades permanentes o muerte se expresará la obligación del asegurador de constituir en la Caja nacional el capital necesario para la constitución de la renta o rentas respectivas en el plazo y forma previstos en este reglamento.

Art. 138. Las Sociedades de seguros están obligadas a remitir al ministerio de Trabajo y a la Caja nacional los balances, las Memorias anuales e igualmente todos los datos que de las mismas soliciten para la publicación de la estadística de accidentes o para el mejor régimen del seguro de accidentes.

Art. 139. Se publicarán en la *Gaceta de Madrid*, una vez cada seis meses, las resoluciones adoptadas durante el mismo por el ministro de Trabajo y Previsión, respecto a la aceptación de Mutualidades patronales y Sociedades de seguros, para los efectos de este reglamento; pero nunca aisladamente, sino reproduciendo la lista general, con las adiciones o supresiones procedentes.

Las exclusiones e inclusiones serán fundadas y se publicarán íntegras en la *Gaceta de Madrid* si así lo solicitaran oficialmente las entidades interesadas.

Sección 4.^a — De la Caja nacional de Seguro de Accidentes del trabajo.

Art. 140. Existirá una Caja nacional de Seguro contra accidentes del trabajo en la industria, en caso de muerte o incapacidad permanente, creada por el Instituto Nacional de Previsión, con arreglo al artículo 8.^o de sus estatutos, con separación completa de sus demás funciones, bienes y responsabilidades. El Instituto redactará los estatutos de la Caja y los someterá a la aprobación del ministro de Trabajo.

Dicha Caja, además de sufragar sus gastos de administración, abonará los que para la realización del servicio que este reglamento le confía se ocasionen por la Inspección de Seguros Sociales.

La Caja nacional está sometida a la intervención constante y directa del ministerio de Trabajo, ejercida mediante el presidente del Instituto Nacional de Previsión, y a la fiscalización periódica e indirecta, por medio de la Comisión revisora, de los balances quinquenales del Instituto, en los que serán incluidas, con la debida separación, las operaciones de la Caja nacional.

La Caja nacional gozará de personalidad jurídica para cuanto se relacione con los fines de su institución.

Art. 141. El domicilio de la Caja nacional radica en Madrid, y su actuación se extiende a todo el territorio nacional.

Art. 142. La Caja nacional estará administrada por un Consejo presidido por el presidente del Instituto Nacional de Previsión o el consejero del mismo en quien delegue y compuesto de cuatro representantes del Consejo de Patronato de dicho Instituto, uno de los cuales habrá de ser patrono

y otro obrero; un representante del ministerio de Trabajo y Previsión, otro de Hacienda, tres patronos y tres obreros pertenecientes a industrias o trabajos comprendidos en este reglamento, dos vocales técnicos y la persona nombrada para asumir la dirección delegada de la Caja.

El Consejo nombrará un secretario, que tendrá voz, pero no voto.

Art. 143. Los vocales representantes de los ministerios y del Consejo del Patronato serán nombrados por las entidades a las cuales representan.

De los vocales patronos y obreros designará el Consejo de Trabajo uno de cada clase, y los demás la Comisión Nacional Asesora patronal y obrera.

Constituido provisionalmente el Consejo por los vocales dichos, con su presidente, nombrará libremente los dos vocales técnicos.

Los vocales cesarán cuando pierdan el carácter en atención al cual fueron nombrados; se renovarán cada cinco años y podrán ser reelegidos.

Art. 144. El Consejo nombrará la persona que haya de asumir la dirección delegada de los servicios de la Caja.

Art. 145. La Caja podrá utilizar los servicios de las Cajas colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión, como delegadas de éste.

Podrá asimismo utilizar, como órganos locales auxiliares suyos, los servicios de Mutualidades patronales, tanto para el cobro de las primas como para propuestas de clasificación de riesgos, pago de indemnizaciones a los obreros o a sus derechohabientes, etc.

La Caja podrá establecer conciertos con las Mutualidades patronales que ofrezcan para ello las debidas garantías para sustituir el sistema de seguro directo en la Caja por el de entrega en la misma, por la Mutualidad, del capital necesario para adquirir la renta que debe ser abonada al obrero víctima del accidente a o sus derechohabientes.

Art. 146. La Caja, previa la aprobación del ministerio de Trabajo, publicará las tarifas de primas, clasificando las industrias atendiendo a sus riesgos profesionales y subdividiendo cada clase en grupos, teniendo en cuenta las medidas de prevención y otras circunstancias que influyen en los riesgos.

Las tarifas serán revisables por el Consejo de la Caja, correspondiendo a la Dirección de la misma la fijación del subgrupo correspondiente a cada caso asegurable en la Caja.

Las decisiones adoptadas por la Dirección podrán ser objeto de recurso ante el Consejo de administración de la Caja, que resolverá definitivamente.

Art. 147. Las bases técnicas para el cálculo de rentas serán, mientras la experiencia no aconseje lo contrario:

Para los cónyuges y ascendientes de fallecidos por causa de un accidente del trabajo y para la víctima con incapacidad parcial permanente, se utilizará la tabla de mortalidad C. R. (Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse).

Para los descendientes de los fallecidos a conse-

cuencia de un accidente del trabajo, la tabla de mortalidad C. R. prolongada.

Para las víctimas de accidentes con incapacidad permanente total o absoluta, la tabla R. I. (Caisse des Retraites pour les Invalides).

La tasa de interés, en todos estos casos, será de 3 y medio por 100. Este tipo podrá ser modificado por el ministro, a propuesta de la Caja. Cualquier iniciativa relacionada con la modificación de los tipos a que se refiere este artículo habrá de ser tramitada con audiencia de la Caja nacional y del Consejo de Trabajo.

Los recargos de las primas únicas, valores de estas rentas, modificables cada año, se fijarán por orden ministerial, a propuesta de la Caja nacional.

Art. 148. La Caja nacional, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 146, deberá aceptar los seguros de todos los patronos comprendidos en este reglamento que lo soliciten en condiciones reglamentarias.

Art. 149. Toda proposición de seguro dirigida a la Caja nacional, con arreglo a los modelos e instrucciones aprobados por ella, debe ser contestada en el plazo de quince días, comunicando al proponente la clasificación y prima que le corresponde. Sin embargo, cuando el patrono se comprometa anticipadamente a aceptar la clasificación y prima que la Caja estime aplicable, se entenderá hecho el seguro, para todos los efectos, desde la fecha y hora en que la proposición tuvo entrada en la Caja.

Art. 150. Para el pago y prescripción de las rentas se aplicarán las normas contenidas en los artículos 34 al 51 del reglamento de operaciones y financiero del Instituto Nacional de Previsión de 17 de agosto de 1910.

Art. 151. La entrega por el asegurador a la Caja nacional del capital que, según tarifa aprobada, sea necesario para la renta correspondiente a la incapacidad permanente declarada, o a los derechohabientes, libra a aquél de toda responsabilidad ulterior, salvo las que sean consecuencia de las revisiones de rentas que este reglamento autoriza.

Art. 152. La falta de pago por los patronos, en la fecha de su vencimiento, de las primas del seguro concertado con la Caja nacional, dará lugar a que se haga efectivo su importe, más los intereses legales correspondientes, por el procedimiento judicial de apremio, mediante certificación acreditativa del descubierto e intereses, librada y autorizada por la Inspección de Seguros Sociales, de oficio, a requerimiento de la Caja o de sus Delegaciones, que le suministrarán los datos precisos.

Art. 153. Las Compañías de seguros o las Mutualidades patronales que hubiesen concertado con la Caja nacional la entrega de capitales para la constitución de pensiones deberán efectuarla, declarada que sea la renta debida por incapacidad del trabajo o muerte, dentro del plazo de un mes, y en caso de no realizar la entrega, se hará efectiva esa responsabilidad sobre la fianza de dichas entidades por orden ministerial, con arreglo a certificación del descubierto, librada y autorizada por la Caja.

La entidad responsable deberá reponer la fianza

en el plazo de quince días, y si no lo efectuase, incurrirá en causa de disolución, previa la liquidación correspondiente.

Art. 154. La Caja nacional puede exigir, con arreglo a los artículos 1.895 y siguientes del Código civil, la restitución de las rentas pagadas indebidamente, y denunciará a los Tribunales a aquellos que fraudulentamente perciban o intenten percibir rentas que no les correspondan.

Art. 155. Con el fin de descubrir y evitar los fraudes en materia de accidentes del trabajo, la Caja nacional organizará y mantendrá al día un fichero central de inválidos, en el que se procurará que figuren todos los que sufran incapacidades permanentes para el trabajo, sea cual fuere la causa productora de dicha incapacidad.

Las Compañías de seguros de accidentes de toda clase, las Mutualidades y los servicios médico-militares y benéficos transmitirán a la Caja nacional todos los datos que ésta reclame, que posean anteriores a la entrada en vigor del presente reglamento, así como los referentes a las incapacidades de que posteriormente tengan conocimiento.

La Caja nacional informará gratuitamente a las Mutualidades, Compañías y autoridades de si figura en el fichero central de inválidos la persona que interesen, transmitiéndoles, en caso afirmativo, los datos que posea.

Art. 156. La Caja nacional de Seguros administrará el fondo especial de garantía, con separación de sus restantes bienes y responsabilidades, según las normas de su gestión financiera y las establecidas en el presente reglamento.

Art. 157. La misma Caja atenderá al fomento del seguro mutuo de accidentes del trabajo, preparando especialmente la reglamentación de Mutualidades, procurando su organización, asesorándolas para lograr la unidad de gestión y pudiendo mediar en sus conflictos con el concurso, en su caso, de las Cajas colaboradoras.

Art. 158. Todas las funciones que el reglamento de 25 de agosto de 1931, relativo a la aplicación a la agricultura de la ley de Accidentes, confiere al Instituto Nacional de Previsión se entienden transferidas a la Caja nacional de Seguros de Accidentes del trabajo.

Art. 159. La Caja nacional actuará como parte actora o demandada ante los Tribunales de justicia, ordinarios o especiales, con beneficio legal de pobreza, sin necesidad de su declaración, ya por procurador con poder en forma, ya mediante funcionarios de la misma a los que, según los reglamentos de la Caja, corresponda representarla ante el Tribunal de que se trate, lo que acreditarán mediante certificación autorizada por el presidente de dicha Caja.

CAPITULO VI

DEL FONDO ESPECIAL DE GARANTÍA

Art. 160. Si el patrono o alguna de las entidades a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 90 no ingresara en la Caja nacional, en el plazo de un mes, el capital necesario para adquirir la renta por incapacidad permanente o muerte,

que haya sido declarada por sentencia judicial, decisión arbitral o laudo de amigables componedores, o acerca de cuya procedencia estén conformes ambas partes y la misma Caja nacional, el pago inmediato de dicho capital correrá a cargo del fondo especial de garantía.

Art. 161. Una vez pagado dicho capital, corresponderán a la Caja nacional, como organismo gestor del fondo de garantía, los derechos y acciones reconocidos al obrero víctima del accidente.

El fondo de garantía tendrá acción directa sobre los bienes del patrono o de las mencionadas entidades, incluso respecto de éstas sobre la fianza que hayan depositado, para reintegrarse del importe de las indemnizaciones abonadas y de los gastos que ocasionare el reintegro, así como para el cobro de la cantidad que pudiera corresponderle en el caso previsto en los artículos 29, número 5.º, y 179, número 4.º, gozando a tales efectos de la calidad de acreedor singularmente privilegiado.

Gozará asimismo el fondo de garantía del beneficio legal de pobreza, sin necesidad de su declaración, y de todos los que establece la ley, así como de las preferencias en ellas concedidas.

Art. 162. En el caso de que el patrono o la entidad que le sustituya no haga efectivas las responsabilidades por accidentes del trabajo, a cuyo pago haya sido condenado por sentencia firme o arbitral, o laudo de amigables componedores, se llevará ésta a efecto por el juez o presidente del Tribunal Industrial que la dictó, bastando para que el procedimiento ejecutivo se practique sin instancia de parte, en todos sus trámites, la solicitud del que obtuviere a su favor la ejecutoria o de sus derechohabientes, o, en su caso, del fondo especial de garantía.

Art. 163. Para hacer efectiva la cantidad líquida determinada en la sentencia, el juez dispondrá que el alguacil proceda al embargo y depósito de bienes del ejecutado, por ante el secretario y previa citación del ejecutado, guardando el orden que señala la ley de Enjuiciamiento civil. No será necesario previo requerimiento al deudor. El acreedor podrá en la misma diligencia designar bienes para el embargo por el orden indicado y nombrar depositario. El juez determinará si éste, en todo caso, ha de prestar la fianza y la forma y cuantía de la misma.

Art. 164. Si el embargo recayese en bienes inmuebles, se requerirá en el acto de la traba al deudor o a la persona que haga sus veces en ese momento, para que se lo haga saber a aquél, con objeto de que dentro del quinto día presente en la Secretaría los títulos de propiedad de aquéllos. Si no lo hiciese, el juez suplirá, en lo posible, de oficio la falta de titulación, adoptando las medidas que estime necesarias, aportando en todo caso certificado de las inscripciones vigentes, así del dominio como de toda suerte de desmembraciones o gravámenes del mismo que consten en el Registro de la Propiedad. También proveerá oportunamente a la anotación preventiva de embargo.

Art. 165. Si dentro de tercero día de practicado el embargo de bienes susceptibles de tasación las partes no acuden al Tribunal proponiendo el nombramiento de peritos, nombrará el juez dos de ofi-

cio, y, en caso de que las partes lo propongan, designará el juez un perito de entre los que cada una de aquéllas señale, y uno más de su libre elección.

Art. 166. Hecho el avalúo o acreditado el valor de los bienes embargados, y obtenidos en su caso los datos posibles en cuanto a la titulación, se sacarán aquéllos a pública subasta, librándose para divulgarla en todos sus anuncios, si se tratase de bienes inmuebles, un edicto que se fijará en las Casas Consistoriales, otro que se remitirá a la Cámara de la Propiedad o cualquiera otra Agrupación equivalente, si aquélla no existiera, obteniendo acuse de recibo, y otro que se colocará en el sitio público del Tribunal.

Tratándose de muebles o bienes similares, se anunciará la subasta por edictos, que se publicarán solamente en el lugar acostumbrado.

Para la redacción de edictos que afecten a inmuebles y para la celebración de la subasta de los mismos se tendrá presente lo dispuesto en las reglas 8.ª y 13 del artículo 131 de la ley Hipotecaria, según previene el párrafo último del mismo precepto.

Art. 167. Los peritos y depositarios nombrados judicialmente están obligados a aceptar su designación, salvo motivo bastante, en concepto del juez, bajo la multa de cinco a 50 pesetas, y si persistieran en su negativa, se les exigirá responsabilidad criminal.

Art. 168. En lo no previsto en los anteriores artículos se estará a los trámites dispuestos en la ley de Enjuiciamiento civil para la ejecución de las sentencias dictadas en juicios verbales, todo ello sin menoscabo de la iniciativa judicial que se determina en esta disposición para llevar a efecto sin moción de parte la sentencia firme.

Art. 169. Las tercerías que se promuevan por virtud de la ejecución de esta sentencia se pondrán ante la jurisdicción civil ordinaria. El mismo día en que se presente, el juez comunicará la interposición de la demanda al presidente del Tribunal Industrial para que obste en Derecho a los efectos del procedimiento.

La víctima del accidente o sus causahabientes, y, en su caso, el fondo especial de garantía para el cobro de las indemnizaciones, se entenderán comprendidos en el número 2 del artículo 1.924 del Código civil.

Los jueces desestimarán de plano las tercerías de mejor derecho en las que no se admita esta prelación.

Art. 170. Si el condenado al pago de las indemnizaciones mencionadas careciese de bienes bastantes para cubrir el importe de aquéllas, el juez o presidente del Tribunal Industrial lo hará saber al ejecutante, y siempre al representante del Fondo especial de garantía, y procederá, sin necesidad de promoción de parte, a la justificación de la insolvencia, total o parcial, aportando al efecto los elementos de prueba siguientes:

1.º Una certificación autorizada por el alcalde de cada una de las localidades donde haya residido el ejecutado en los cinco años anteriores y del de su actual domicilio, expresiva de los bienes que

se le conozcan e informes de los que puedan atribuírsele.

2.º Otras certificaciones e informes de los Juzgados y Tribunales de los mismos puntos, expresivas de iguales extremos con referencia a los asuntos judiciales de cualquier clase en que haya intervenido el condenado o que le afecten.

3.º Certificaciones de los Registros de la Propiedad y de las Oficinas liquidadoras de las mismas localidades, expresivas de los inmuebles o derechos reales que figuren o hayan figurado inscritos a su nombre en el mismo plazo de cinco años, y en su caso, de las transmisiones de que hayan sido objeto y en virtud de qué título, y de los créditos y derechos que en ese tiempo hayan sido transmitidos o reconocidos al ejecutado.

El juez o presidente cuidará de la urgente aportación de los expresados documentos, expidiendo los requerimientos que sean necesarios al efecto. Obtenidos tales documentos, el juez o presidente convocará a las partes y al representante del Fondo especial de garantía a una comparecencia oral, en el término de cinco días, invitandoles a que concurran a ella con los elementos de prueba de que dispongan en relación con la insolvencia de que se trata.

Dentro del segundo día el juez resolverá, por medio de auto y sin ulterior recurso, acerca de la insolvencia, total o parcial, del ejecutado; si denegare la insolvencia, acordará el embargo y declarará afectos, en su caso, al procedimiento de ejecución de sentencia, con las reservas que hubiere lugar en cuanto a terceras personas, aquellos bienes que no hubieran sido objeto de trabá y fueran conocidos por virtud de la justificación practicada.

Fijada por el juez la cantidad que deba abonarse con cargo al Fondo especial de garantía, la persona o personas a quienes en derecho correspondan presentarán estas certificaciones auténticas del proveído en la Caja nacional de Seguros de accidentes para que se haga efectiva.

Art. 171. No actuando la representación directa de la Caja nacional con arreglo al artículo 161, la representación y defensa del Fondo de garantía, con todas las diligencias de ejecución y en las de justificación de insolvencia, a que se refiere el presente capítulo, así como en el pleito, en el caso de ser demandado, corresponderá, en las capitales de provincia, a los abogados del Estado, y por delegación de éstos, en los demás Juzgados, a los liquidadores del impuesto de Derechos reales, y a falta de ellos, por incompatibilidad u otras causas, a los fiscales municipales de las respectivas localidades.

Art. 172. El laudo que dicten los amigables componedores, o la sentencia arbitral, a los efectos del artículo 160, se ajustarán siempre a lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil, y su ejecución competirá al presidente del Tribunal Industrial correspondiente, si lo hubiere en el partido en que se dictó, y, en su defecto, al juez de primera instancia del mismo.

Art. 173. Los actos en que se declare la insolvencia, total o parcial, a que se refiere el artículo 170 no serán definitivos, pudiendo, en cual-

quier tiempo en que se conozcan bienes al ejecutado, instarse el embargo de los mismos.

A este efecto, para promover la oportuna pesquisa, la Caja nacional llevará un registro de todas las declaraciones de insolvencia que se dicten por las autoridades competentes, de las que se dará conocimiento a las Delegaciones de aquélla y a los inspectores de Seguros sociales para que haya una constante vigilancia ejercida sobre insolventes, a fin de que, en el momento de que hayan adquirido bienes que puedan ser objeto de embargo, lo comuniquen a la Caja.

Art. 174. Comprobará por ésta la exactitud de la denuncia por medio de su representante, acudir al Juzgado o Tribunal que haya dictado la declaración de insolvencia, para que, por la vía de apremio y a costa del insolvente, se haga efectiva la cantidad que el Fondo hubiera abonado en su día al obrero o a sus derechohabientes.

Art. 175. Las declaraciones de insolvencia serán publicadas en la *Gaceta de Madrid*, en el *Boletín Oficial* de la provincia donde estuviere domiciliado el insolvente y en las Anales del Instituto Nacional de Previsión, por mediación en aquéllos del ministerio de Trabajo y Previsión, rogando a cuantas personas tengan noticia de la mejora de fortuna del insolvente lo pongan en conocimiento de la Caja nacional a los efectos oportunos.

Art. 176. Las diligencias de ejecución de sentencia en los casos de los artículos 162 al 169 y las de justificación de insolvencia a que se refiere el artículo 170 serán a costa del condenado en dicha sentencia, quien sufragará los derechos arancelarios, los del Timbre y los honorarios del representante del Fondo especial de garantía, siempre sin perjuicio del total completo y preferente abono al ejecutante o, en su caso, al Fondo de garantía de la cantidad cuya exacción se persiga.

Art. 177. El Fondo especial de garantía tendrá derecho de repetición para resarcirse del importe de la indemnización que haya satisfecho por el patrono insolvente contra los bienes que éste tuviera durante un plazo de quince años.

Para el ejercicio de ese derecho podrá solicitar previamente la nulidad o rescisión de las ventas de bienes del patrono como hechas en fraude del Fondo especial de garantía.

El procedimiento de repetición será el de apremio, una vez determinados los bienes propiedad del patrono responsable, a cuyo cargo serán las cuotas del mismo.

El procedimiento de nulidad de las enajenaciones en fraude será el de los incidentes ante el juez competente de la jurisdicción ordinaria, con arreglo a la ley de Enjuiciamiento civil.

En ambos actuará, en nombre del Fondo especial de garantía, el representante del mismo.

Art. 178. El Fondo especial de garantía gozará además del recurso extraordinario a que se refiere el artículo 496 del Código de Trabajo.

Art. 179. El Fondo especial de garantía se constituirá con los siguientes ingresos:

1.º Con las multas que se impongan por incumplimiento de las disposiciones legales en materia de accidentes en la industria.

2.º Con la cantidad que el Estado señale en su presupuesto general anualmente.

3.º Con los capitales precisos para constituir una renta cierta temporal, durante veinte años, del 15 por 100 del salario de los obreros que mueran por accidentes y sin dejar derechohabientes, con arreglo al artículo 29, capitales que deberán ser satisfechos por el patrono o entidad responsable.

4.º Con las sumas que la Caja recuperará de los propios patronos responsables del accidente, en los casos en que el Fondo de garantía haya sustituido a los mismos en el cumplimiento de sus obligaciones; y

5.º Con cuotas anuales, que serán fijadas, cada año, por decreto del ministerio de Trabajo, a propuesta de la Caja nacional, en milésimas de las primas del seguro o de los capitales constitutivos de las rentas.

Art. 180. Las operaciones de la gestión administrativa del Fondo especial de garantía se reflejarán en una cuenta corriente que la Caja nacional llevará al mismo Fondo, en la cual serán cargo las cantidades recibidas y data las indemnizaciones pagadas.

Art. 181. Anualmente, la Caja nacional formará y remitirá al ministerio de Trabajo y Previsión un estado de situación del Fondo especial de garantía en el cual se demuestren las cantidades recibidas y las pagadas durante el último ejercicio y el saldo disponible al finalizar, justificándolo con la relación detallada de las indemnizaciones satisfechas, expresiva del nombre del accidentado, el del patrono insolvente, la fecha del auto declarativo de la insolvencia y autoridad que lo dictó.

Art. 182. En el caso de que en cualquier momento no existiera fondo disponible para atender al pago de las indemnizaciones declaradas, quedará el pago en suspenso hasta el ingreso de cantidades suficientes, informándose inmediatamente al ministerio de Trabajo y Previsión acerca de las causas determinantes a que, a su juicio, obedezca la insuficiencia, y de los medios que se pudieran adoptar para solucionar el conflicto y evitar la posible repetición en lo futuro.

CAPITULO VII

DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

Sección 1.ª — De las partes de accidentes.

Art. 183. Para los efectos del conocimiento del hecho y de las reclamaciones e intervenciones a que pueda dar lugar, el patrono o asegurador, dentro de las veinticuatro horas siguientes al accidente, dará conocimiento al delegado de trabajo, o, en defecto de éste, al alcalde, por medio de un parte escrito y firmado por él o por quien lo presente, extendido en papel común, que remitirá certificado por correo. También deberá dar a los inspectores de Trabajo cuantos datos e informaciones le pidieran éstos relacionados con los accidentes.

A los efectos del párrafo anterior, en caso de accidente, el obrero, o sus familiares, darán parte del mismo al patrono.

En el parte que se dé a la autoridad se hará constar la hora y el sitio en que ocurrió el accidente, cómo se produjo, quiénes lo presenciaron, el nombre de la víctima, el lugar a que ésta hubiere sido trasladada, el nombre y domicilio del facultativo o facultativos que practicaron la primera cura, el salario que ganaba el obrero y el nombre de la entidad aseguradora, cuando exista contrato de seguro.

Art. 184. Caso de defunción inmediata, dará igualmente parte a la autoridad indicada anteriormente, haciendo constar los datos que sean pertinentes de los consignados en el párrafo tercero del artículo anterior.

Art. 185. Si el accidente ocurre en el mar, las veinticuatro horas de plazo para que el patrono dé el parte empezarán a contarse desde que el buque llegue a puerto español, o a puerto extranjero donde haya representante de España, sin perjuicio de que si el barco lleva aparato radiotelegráfico lo comunique en el acto de ocurrir el accidente al primer puerto de su ruta donde haya que desembarcar, en el que exista representante de España, si no fuera puerto español.

Será obligación de los armadores repatriar al puerto de restitución, cuando el médico lo autorice, a los que desembarcaren por accidente del trabajo.

Art. 186. Además del parte mencionado, el patrono o entidad aseguradora dará conocimiento, por escrito, al delegado de Trabajo, o al alcalde, si no hubiere delegado en la localidad, desde que haya empezado a hacer efectiva la obligación por la responsabilidad del accidente.

La conformidad o disconformidad del obrero o las partes interesadas deberán hacerse constar por escrito, por sí o por personas que le representen.

Caso de indemnización, dará también conocimiento a la autoridad anteriormente indicada de haberla hecho efectiva, expresando la cuantía y el artículo, número y párrafo del presente texto en que esté comprendida.

Art. 187. Si el patrono conceptúa que el accidente es debido a fuerza mayor o caso fortuito extraños al trabajo, lo manifestará así por escrito al delegado de Trabajo o al alcalde, sin que por eso pueda prescindir de las obligaciones consignadas en los artículos 52, 53, 183, 184 y 186; debiendo hacer constar, en su caso, la conformidad o disconformidad del obrero.

Art. 188. Todos los documentos se presentarán por duplicado. Uno de ellos quedará en poder de la autoridad a quien sea dirigido, y el otro, sellado con el sello oficial de la dependencia y autorizado con el recibí y la firma del funcionario que lo recoja, le será devuelto al patrono o entidad que haya actuado en el asunto.

Art. 189. El cumplimiento de las obligaciones consignadas en los capítulos precedentes para hacer efectivas las indemnizaciones a que hubiere lugar no exige ni la intervención ni la mediación de ninguna autoridad mientras no se manifieste disconformidad entre las partes interesadas. Esto no obstante, el obrero tendrá derecho a hacer constar las deficiencias del cumplimiento de las dispo-

siciones legales que, a su juicio, existan, ante la autoridad a que corresponda conocer del asunto.

Asimismo, el patrono o entidad aseguradora podrá comunicar, a los efectos consiguientes, a la autoridad el incumplimiento, por parte del obrero, de las prescripciones facultativas de la obligación de presentarse a las curas los días que se le hubieran fijado o de cualquiera otra resistencia que de algún modo retrase o dificulte su curación.

Art. 190. La no intervención de la autoridad no excusa de las formalidades indispensables para que, en todo tiempo, los hechos y los acuerdos puedan tener la debida justificación.

Sección 2.^a — De los servicios administrativos.

Art. 191. Se considerarán dependencias administrativas para recibir los partes motivados por el accidente:

- a) Las Delegaciones de Trabajo.
- b) Los Ayuntamientos.

Art. 192. Serán recibidos los partes en los Ayuntamientos únicamente en las localidades que no sean capital de provincia.

En las capitales de provincia sólo serán recibidos en las Delegaciones de Trabajo.

Art. 193. Los partes que se reciban en los Ayuntamientos se remitirán inmediatamente a la Delegación de Trabajo de la provincia respectiva, que acusará recibo de oficio a vuelta de correo.

Art. 194. En las Delegaciones de Trabajo, al recibir el parte directamente de los Ayuntamientos, se abrirá un expediente, que sólo constará de una carpeta de titulación y de un índice de los documentos recibidos, registrados y contenidos en la carpeta.

Art. 195. La carpeta del expediente tendrá las siguientes titulaciones, ordenadas conforme al modelo que oportunamente se apruebe:

- a) Número del expediente.
- b) Inicial de la letra del primer apellido de la víctima del accidente.
- c) Apellidos y nombre de la víctima.
- d) Apellidos y nombre del patrono.
- e) Clase de industria o de trabajo; y
- f) Clave de registro.

Art. 196. Los expedientes se colocarán en casilleros dispuestos por orden alfabético del primer apellido.

Permanecerán en estos casilleros hasta que se acuerde la cancelación, que será siempre motivada por haberse cumplido en todos sus trámites los efectos de la responsabilidad patronal.

Acordada la cancelación, los expedientes pasarán al archivo de la dependencia.

Art. 197. Se llevarán además en cada Delegación de Trabajo dos libros registros:

- 1.º Libro de registro de accidentes.
- 2.º Libro de anotaciones alfabéticas.

En el primer libro cada hoja estará dispuesta para las anotaciones correspondientes a un solo expediente.

En el segundo libro sólo constarán los apellidos y nombre de la víctima, inscritos en el orden de la inicial divisoria correspondiente al primer apellido y con referencia a las páginas en que conste la inscripción en el libro registro de accidentes.

Art. 198. Los patronos y entidades aseguradoras que, con arreglo al artículo 183 de este reglamento, están obligados a presentar en las Delegaciones de Trabajo o Ayuntamientos el parte, baja y hoja declaratoria de los accidentes del trabajo acompañarán al propio tiempo y por duplicado un boletín estadístico, después de consignar en él con la mayor exactitud los datos respectivos.

Si al diligenciar este boletín no fuese posible calificar la inutilidad producida por el accidente, se separará la parte superior del mismo, cortándolo por la línea taladrada, para remitirla, desde luego, a la autoridad gubernativa, y se conservará la parte inferior, hasta que pueda llenarse con los datos correspondientes, para enviarla también al delegado de Trabajo o al alcalde, en su caso. Las dos partes del boletín llevarán la misma numeración, a los efectos de confrontación.

No se cancelará el expediente, ni cesarán, por tanto, las obligaciones del patrono, mientras no ingrese en la Delegación de Trabajo el boletín estadístico, incluso la parte inferior, expresiva de la calificación de la incapacidad producida por el accidente.

Art. 199. Las entidades aseguradoras autorizadas para sustituir al patrono en las obligaciones impuestas por la ley de Accidentes del trabajo, las Compañía de ferrocarriles o de navegación y, en general, las Empresas que tengan más de 100 obreros, así como los demás patronos que se hallen en este caso, deberán hacer imprimir por su cuenta los boletines estadísticos, ajustándose exactamente al modelo aprobado.

Los demás patronos podrán solicitar los impresos necesarios de los Ayuntamientos o Delegaciones de Trabajo.

Art. 200. Los delegados de Trabajo remitirán a los jefes provinciales de Estadística los boletines de accidentes del trabajo que hayan recibido durante el mes, dentro de los cinco primeros del siguiente, a fin de normalizar la elaboración de los datos. Asimismo remitirán a la Caja nacional el duplicado de dichos boletines.

Art. 201. Los jefes provinciales de Estadística, después de examinar y depurar los boletines, procederán a la formación de los estados trimestrales, con arreglo a los modelos que se les facilitarán por la Dirección general de Trabajo, enviándolos a este organismo dentro del mes siguiente al trimestre a que se refieran.

Art. 202. Las Audiencias, Juzgados de primera instancia y Tribunales industriales remitirán directamente al Consejo de Trabajo copia certificada de todas las sentencias ejecutorias que dicten en materia de accidentes del trabajo.

Art. 203. La acción administrativa se limitará, en los casos de desenvolvimiento normal de las disposiciones fundamentales, a un mero registro de accidentes; pero en aquellos casos en que el patrono no cumpla exactamente todos los trámites que en dichas disposiciones y en las reglamentarias se establecen, la Administración favorecerá, siempre que sea oportuno, las reclamaciones del obrero y cursará cuantas instancias estime pertinentes, participando al patrono la responsabilidad en que incurre.

Art. 204. El trámite administrativo se dirigirá primeramente a reclamar del patrono el cumplimiento del precepto infringido, y si esta intervención resultara ineficaz, dará conocimiento al Tribunal Industrial, y de no existir éste, el juez de primera instancia.

Art. 205. De las gestiones realizadas gubernativamente y de sus resultados quedará constancia en la Delegación de Trabajo.

CAPITULO VIII

DE LA INSPECCIÓN, RECLAMACIONES Y SANCIONES

Sección 1.^a — De la inspección.

Art. 206. La inspección, en lo que respecta a la obligatoriedad del seguro de accidentes del trabajo, corresponde a la Inspección general de Seguros sociales y sus delegados. En cuanto afecta a la declaración y revisión de la incapacidad y a la percepción de las rentas, la inspección será organizada por la Caja nacional.

Art. 207. La inspección de la obligatoriedad del seguro tiene por objeto velar por el cumplimiento de la obligación patronal de asegurar a sus operarios contra riesgos de accidentes que produzcan incapacidad permanente o muerte, así como de las demás obligaciones patronales contenidas en el capítulo V de este reglamento.

Para practicarla se seguirán las normas referentes a la Inspección de Seguros sociales y las que dicte el ministerio de Trabajo y Previsión a propuesta de la Caja nacional.

Art. 208. Salvo lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la inspección de cuanto se refiere al cumplimiento de los preceptos legales y reglamentarios sobre accidentes del trabajo y de cuanto afecta a seguridad e higiene del obrero en los trabajos e industrias corresponde a la Inspección de Trabajo, con sujeción a las normas generales de dicho servicio, consignadas en el capítulo segundo del reglamento de 23 de julio de 1932, para la aplicación de la ley de 13 de mayo del mismo año.

Art. 209. Los obreros de industrias o trabajos comprendidos en este reglamento podrán denunciar por escrito, a la Inspección de Trabajo o a la de Seguros sociales, según proceda, el incumplimiento por los patronos o por las Mutualidades y Compañías de sus respectivas obligaciones.

Sección 2.^a — De las reclamaciones.

Art. 210. El obrero víctima del accidente o los demás interesados tienen derecho a reclamar ante las autoridades gubernativas y a demandar al patrono, o a la entidad aseguradora en su caso, ante el Tribunal Industrial, donde exista, o en su defecto ante el Juzgado de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el título cuarto del Código de Trabajo, para todas las cuestiones que surjan hasta la declaración de incapacidad o del derecho a renta de los derechohabientes. Las declaraciones de incapacidades o rentas hechas judicialmente se entenderán siempre sin perjuicio.

cio de su revisión en los casos y en la forma que establece este reglamento.

Para todas las cuestiones que surjan después de declarada la incapacidad o el derecho a renta del accidentado o de sus derechohabientes, serán competentes las Comisiones revisoras paritarias de previsión, reguladas por el reglamento aprobado por decreto de 7 de abril de 1932.

Art. 211. La reclamación ante la autoridad administrativa procederá siempre que el patrono omita dar conocimiento en forma del accidente o no cumpla las obligaciones legales en caso de éste.

Los hechos que no constituyan incumplimiento de la ley, sino diferencia de fondo entre las partes, serán objeto de demandas ante el Tribunal Industrial o Juzgado que haga sus veces.

En los casos en que se alegue dolo, imprudencia o negligencia que produzca el accidente, se acudirá directamente, por escrito, al juez de instrucción.

La justicia se administrará gratuitamente en las contiendas que surjan de la aplicación del presente reglamento.

Art. 212. La reclamación ante la autoridad administrativa se hará por escrito, extendida en papel común y por duplicado, recogiendo el reclamante uno de los ejemplares con el recibí de los funcionarios que lo reciban y el sello de la dependencia.

Art. 213. Si el parte lo recibiere una autoridad municipal, conforme a lo indicado en el artículo 192, procederá inmediatamente a reclamar del patrono el cumplimiento de la obligación infringida, dando a la vez cuenta del hecho al delegado de Trabajo.

Art. 214. Si la acción administrativa que entablare la autoridad municipal no diese resultado en un plazo de cuarenta y ocho horas, dará cuenta del hecho al presidente del Tribunal Industrial o al juez de primera instancia y lo pondrá en conocimiento del delegado de Trabajo de la provincia, sin perjuicio de conservar cuantos datos obren en su poder relativos al asunto, con el fin de poder librar las certificaciones que se pidieran en relación con los mismos.

Art. 215. Si el parte lo recibiera el delegado de Trabajo procederá, con relación al patrono y al presidente del Tribunal Industrial o al juez de primera instancia, de igual modo que la autoridad municipal.

Art. 216. Las partes interesadas podrán también reclamar, si fueran desatendidas, ante los delegados de Trabajo contra las autoridades municipales, y ante el ministro de Trabajo y Previsión contra los delegados de Trabajo.

Art. 217. Prescribirán al año las acciones para reclamar el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento.

El término de la prescripción estará en suspenso mientras se siga el sumario o pleito contra el presunto culpable, criminal o civilmente, y empezará a contarse desde la fecha del auto del sobreseimiento o de la sentencia absolutoria.

También se interrumpirá el plazo de la prescripción en el caso de hernias mientras se realiza la

información médica determinada para este caso en este reglamento.

Art. 218. El plazo de un año para la prescripción de las acciones empezará a contarse desde la fecha en que ocurra el accidente. Si éste no hubiera determinado desde luego la clase de incapacidad que debe ser indemnizada con arreglo a la ley, el plazo podrá empezar a contarse a partir del día en que la incapacidad se hubiese declarado específicamente.

Los plazos correrán a un tiempo para los responsables principales y para los subsidiarios. La demanda o cualquier otro acto contra los primeros no interrumpirá la prescripción de la acción para reclamar, en su caso, contra los segundos, si éstos no hubiesen sido demandados, citados judicialmente, requeridos o advertidos directa y expresamente en forma legal e indubitada dentro del mismo plazo.

Solamente las causas o pleitos de culpabilidad suspenderán el término de la prescripción para unos y otros, dentro de los conceptos precisos del segundo párrafo del artículo anterior.

Art. 219. Todas las reclamaciones de daños y perjuicios por hechos no comprendidos en las presentes disposiciones, o sea aquellos en que mediare culpa o negligencia, exigible civilmente, quedan sujetas a las prescripciones del Derecho común.

Art. 220. Si los daños y perjuicios fueran ocasionados con dolo, imprudencia o negligencia, que constituyan delito o falta con arreglo al Código penal, conocerán de ellos en juicio correspondiente los Tribunales ordinarios.

Art. 221. Si los Tribunales ordinarios acordasen el sobreseimiento o la absolución del procesado, quedará expedito el derecho que al interesado corresponda para reclamar la indemnización de daños y perjuicios, según las disposiciones de este reglamento.

Este artículo y los dos anteriores se aplicarán tanto al patrono como al obrero.

Sección 3.^a — De las sanciones.

Art. 222. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y en su reglamento, lo mismo por parte de los patronos que por parte de las Mutualidades o Compañías aseguradoras, será castigado con las sanciones que establecen los artículos siguientes.

Art. 223. El patrono que no haga el seguro contra el riesgo de incapacidad permanente o muerte de sus operarios, en el plazo reglamentario, o no lo renueve oportunamente, o no lo complete en caso de aumento del número de obreros declarado primeramente; el que cometa falta intencionada de exactitud en las declaraciones para el seguro, exija a los obreros, directa o indirectamente, todo o parte de las cuotas del seguro e incurra en falta de pago de estas mismas cuotas, después de formulados los oportunos requerimientos por las autoridades, será castigado con multa de 25 a 250 pesetas; en caso de primera reincidencia, con multa de 250 a 500, y en segunda reincidencia, con multa de 500 a 1.000 pesetas.

Para el señalamiento de las infracciones e im-

posición y exacción de las multas será aplicable el decreto de 4 de diciembre de 1931 sobre sanciones por incumplimiento de las leyes de Seguros sociales obligatorios.

Art. 224. El incumplimiento de los preceptos reglamentarios referentes a la aplicación de los mecanismos y medios preventivos de los accidentes del trabajo, y de las medidas de higiene y seguridad establecidas, se castigará, independientemente de la responsabilidad civil o criminal que proceda, con multa de 25 a 250 pesetas; en caso de primera reincidencia, con multa de 250 a 500, y en la segunda reincidencia, con multa de 500 a 1.000 pesetas; multas que se aplicarán en el grado máximo cuando, a juicio de la Inspección, pudieran ser gravísimos o inminentes los accidentes derivados de la inobservancia del reglamento.

Art. 225. Las infracciones del real decreto de 25 de enero de 1908, relativo a las industrias y trabajos prohibidos a los niños menores de dieciséis años y mujeres menores de edad, se corregirán con multa comprendida en los grados medio al máximo de los señalados en el artículo anterior.

Art. 226. Los patronos y las Mutualidades o Compañías de seguros que no presenten en las Delegaciones de Trabajo o Ayuntamientos el parte de baja y hoja declaratoria de los accidentes del trabajo ocurridos, acompañados de un boletín estadístico, donde se consignarán con la mayor exactitud los datos respectivos, serán castigados con la multa de 25 a 250 pesetas.

Para que proceda la imposición de la multa deberá acreditarse, en caso de accidente leve, que el obrero o sus derechohabientes han dado parte del mismo al patrono. Cuando se trate de accidentes graves, el obrero queda relevado de cumplir este requisito, y su omisión no exime al patrono de la penalidad establecida en el párrafo anterior.

Art. 227. Cualquier infracción en general de los preceptos de la ley o de los dictados para su cumplimiento, no comprendidos expresamente en los artículos anteriores, será objeto de multa de 25 a 100 pesetas.

Art. 228. Los actos de obstrucción se castigarán con multa de 250 a 1.000 pesetas, siempre que tengan lugar en ocasión de visitas a explotaciones, obras o labores en que, por la naturaleza del trabajo, sea presumible, a juicio del inspector, la posibilidad de accidente. Para que pueda cumplirse este precepto el inspector consignará aquel juicio en el oficio de remisión del acta.

Seconsiderará como obstrucción al servicio de Inspección del Trabajo o de Seguros sociales:

1.º La negativa de entrada a los centros de trabajo, aun cuando éstos se hallen instalados dentro del domicilio particular del patrono.

2.º La negativa o resistencia, aunque sea pasiva, a presentar libros registros del personal e informes relativos a las condiciones del trabajo.

3.º La ocultación del personal obrero.

4.º Las informaciones falsas.

5.º Cualquier otro acto que impida, perturbe o dilate el servicio de inspección.

Las reincidencias repetidas en la obstrucción, así como las infracciones, podrán motivar el cierre del centro de trabajo donde se produzcan, hasta

que la inspección se verifique sin el menor obstáculo y se cumplan los preceptos legales infrin-
gidos, levantando de ello acta.

Dicho cierre se decretará por la autoridad competente, a propuesta del Consejo de Trabajo, motivada por el resultado del expediente instruido al efecto.

Art. 229. Para todo lo relativo a la inspección, el señalamiento y la manera de hacer efectivas las sanciones y a los recursos que puedan entablar los interesados, se estará a lo dispuesto en este reglamento y en los de las Inspecciones del Trabajo y de Seguros sociales.

CAPITULO IX

DE LAS EXENCIONES

Art. 230. Tanto las Mutualidades patronales como la Caja nacional de Seguro de accidentes estarán exentas de toda clase de impuestos por los actos y contratos relativos a la aplicación del presente reglamento, debiendo librarse y expedirse gratuitamente por las autoridades todos los documentos que se relacionen con dicha aplicación.

Art. 231. Las pensiones que se abonen al obrero o a sus derechohabientes, como indemnización por accidente del trabajo, en los casos de incapacidad permanente o muerte, así como los capitales que pueden constituirse para el abono de dichas pensiones o rentas, se declararán exentos del pago de derechos reales y de cualesquiera otros impuestos.

Asimismo quedarán exentos del impuesto del Timbre las pólizas y libros de la Caja nacional.

Art. 232. Como parte integrante que es del Instituto Nacional de Previsión, la Caja nacional de Seguro de accidentes del trabajo gozará de la tarifa especial de impresos para su correspondencia con las Cajas colaboradoras u otros órganos locales y asegurados, patronos y obreros, y de las demás exenciones fiscales y privilegios otorgados a aquél por la ley de 27 de febrero de 1908 y sus disposiciones complementarias.

Art. 233. Todas las reclamaciones que se formulen por el obrero o sus derechohabientes, así como las certificaciones y demás documentos que se expidan a los mismos, tanto con ocasión de la aplicación de las disposiciones fundamentales como de las reglamentarias, se extenderán en papel común.

Art. 234. Las rentas que abone la Caja nacional serán, en todo caso, propiedad de los beneficiarios, gozarán de la exención del artículo 428 del Código de Comercio y no podrán ser objeto de cesión, embargo ni retención alguna, con arreglo al artículo 31 de la ley de 27 de febrero de 1903.

Los capitales que las Mutualidades y Compañías hayan de entregar a la Caja nacional se consideran afectos, por ministerio de la ley, a la constitución de pensiones y estarán libres de embargos que desvirtúen su finalidad y de reclamaciones de terceros.

Art. 235. Las indemnizaciones por razón de accidentes del trabajo se considerarán incluidas entre los bienes exceptuados de embargo por el artículo 1.449 de la ley de Enjuiciamiento civil y no podrá

hacerse efectiva en ellas ninguna responsabilidad.

Igualmente será de aplicación a dichas indemnizaciones lo dispuesto en el artículo 55 de la ley sobre Contrato de trabajo.

DISPOSICIÓN FINAL

Art. 236. Serán nulos y sin valor toda renuncia a los beneficios de las disposiciones de este reglamento y, en general, todo pacto contrario a ellas, cualquiera que fuese la época en que se realicen.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Todos los contratos suscritos antes de publicada la ley de 4 de julio de 1932, o que no se ajusten a sus prescripciones, que tengan por objeto el seguro de la responsabilidad de un patrono comprendido en este reglamento en caso de accidente del trabajo de sus operarios, se entenderán rescindidos de pleno derecho en la fecha de entrar en vigor el presente reglamento.

La rescisión no afecta a los derechos y obligaciones nacidos de accidentes anteriores a la fecha últimamente indicada.

Segunda. La rescisión declarada en el artículo anterior no dará lugar a indemnizaciones de una u otra parte contratante.

Las primas pactadas serán debidas hasta la fecha de rescisión. Las que hayan sido pagadas anticipadamente por un período posterior a la indicada fecha deberán ser reembolsadas al asegurado.

Tercera. Para la aplicación de este reglamento a los distintos ministerios y servicios que de ellos dependen se dictarán las normas oportunas, que serán incorporadas a él, formando un capítulo. Hasta que se dicten, se entienden aplicables las contenidas en los artículos 334 al 426 del Código de Trabajo en cuanto no se opongan al contenido de este reglamento.

Cuarta. La protección de las víctimas de los accidentes de mar y el seguro obligatorio contra este riesgo que han de hacer las Compañías de navegación y demás entidades propietarias de buques seguirán rigiéndose por las disposiciones contenidas en los artículos 292 al 311 del Código de Trabajo y sus complementarias.

Aprobado por S. E.—El ministro de Trabajo, *Francisco Largo Caballero*.

Informe sobre el seguro de Maternidad

El primer año de su funcionamiento.

(1 octubre 1931-30 septiembre 1932.)

Al finalizar el primer trimestre de aplicación del seguro de Maternidad, el Instituto y sus Cajas colaboradoras quisieron examinar los resultados, siguiendo con ello la norma clásica de nuestro régimen: procurar destacar la experimentación, iniciando desde el primer momento la posible revisión de un sistema. Era legítima aquella precipitación en procurarse estadísticas y datos, a pesar del escaso tiempo transcurrido, pues el éxito o fracaso de un seguro, y, en general, de toda obra de carácter social, depende de su iniciación, de su encauzamiento en el origen.

Había, además, en aquella fecha razones poderosas para procurar destacar la marcha práctica del seguro de Maternidad: fué época en la que surgieron conflictos sociales, en los que, a veces, el pretexto para huelgas o disturbios era la cotización obrera en el seguro. Para apreciar el verdadero valor de las resistencias era necesario publicar los datos obtenidos, y por eso fué una gran satisfacción del Instituto y de sus Cajas el poder afirmar que «las resistencias surgidas y las dificultades planteadas por parte del sector obrero tendían a eliminarse, por la difusión y eficacia de los beneficios del seguro».

El examen del primer trimestre era, pues, una necesidad de estudio y un medio de propaganda: aquellos datos, incompletos y escasos, bastaron para su fin; las deficiencias de orden sanitario y administrativo observadas dieron lugar a la adopción de procedimientos especiales para subsanarlas. Y todo ello fué sometido al juicio y delibe-

raciones de la última asamblea del Instituto y sus Cajas colaboradoras, casi exclusivamente dedicada a este fin.

Al transcurrir el primer año de funcionamiento del seguro, procedemos nuevamente a lanzar una ojeada sobre los resultados obtenidos. Esta labor ha de ser forzosamente de mayor trascendencia. El período de observación estadística, aunque todavía breve, permite ya fijar, en algunos casos, como juicios lo que sólo eran atisbos. El seguro ha adquirido ya cierto equilibrio y una marcha regular; está, además, próximo el primer balance, y, sobre todo, ha llegado el momento de formular nuevamente los convenios con los facultativos, para cuya labor es indispensable conocer la forma en que se ha desarrollado el servicio sanitario.

Vamos, pues, a presentar una estadística y a glosarla con arreglo a la detallada información aportada por las Cajas colaboradoras, que han puesto en este trabajo plausible minuciosidad y detalle. Al mismo tiempo daremos cuenta de las normas administrativas y de las aclaraciones legales que han venido a completar los textos orgánicos de la legislación del seguro de Maternidad.

Difusión del seguro.

Inscripciones.

Un capítulo amplio del informe del primer trimestre se refería a las «Resistencias patronales y obreras.» Afortunadamente, en este segundo informe no es preciso disponer de mucho espacio para tratar la materia: ya entonces se iniciaba la mejora de la situación. En los nueve meses restantes esta situación es del todo despejada: patronos y

obreros han «entrado», por decirlo así, rápidamente en el seguro, que es ya una institución popular, y hasta se observa en algunas Cajas una afluencia tal vez excesiva al seguro; y decimos excesiva porque la favorable interpretación de los reglamentos, a veces, hace que acudan al seguro obreras en demanda de derechos no del todo consolidados.

El seguro de Maternidad — del cual se hizo, como es sabido, una propaganda copiosa — se ha implantado con eficacia tal vez superior a la que podía esperarse de aquella propaganda. Más que el cartel, el folleto y la conferencia ha avanzado la propaganda directa de las mismas beneficiadas, debida a la eficacia tangible de los beneficios del seguro.

Al estudiar el anteproyecto del seguro y calcular el coste de la aportación probable del Estado se fijaba en 140.000 las aseguradas para el primer año. Pues bien: véase la estadística de obreras aseguradas en 30 de septiembre de 1932:

	Aseguradas.
Caja de Alava.....	4.603
Idem de Andalucía Occidental.....	12.019
Idem de Andalucía Oriental.....	7.004
Idem de Aragón.....	9.247
Idem de Asturias.....	4.517
Idem de Canarias.....	16.058
Idem de Castilla la Nueva.....	3.077
Idem de Castilla la Vieja.....	6.247
Idem de Cataluña y Baleares.....	154.605
Idem de Extremadura.....	1.147
Idem de Galicia.....	32.914
Idem de Guipúzcoa.....	16.032
Idem de León.....	1.461
Idem de Murcia.....	10.174
Idem de Navarra.....	1.876
Idem de Salamanca.....	922
Idem de Santander.....	4.243
Idem de Valencia.....	76.002
Idem de Valladolid.....	2.745
Idem de Vizcaya.....	10.143
Instituto Nacional de Previsión.....	15.484
TOTAL.....	390.520

Tal vez en aquella evaluación se cifrara insuficientemente el número de obreras industriales que se tomaba como base de cálculo, suponiendo que la afiliación de las eventuales sería más lenta. Pero, aunque así fuera, el hecho es que al seguro ha acudido un gran número de obreras eventuales que no se esperaba.

La difusión del seguro se aprecia también al comparar el número de las beneficiadas por él con el de obreras que obtuvieron el subsidio de maternidad en el régimen anterior al seguro. He aquí el número de casos de obreras subsidiadas desde

1923 hasta 1930, último año en el que se otorgaron los subsidios durante los doce meses:

AÑOS	Obreras subsidiadas
1923.....	233
1924.....	4.193
1925.....	5.485
1926.....	8.137
1927.....	13.107
1928.....	10.878
1929.....	12.655
1930.....	11.514

En este primer año del seguro de Maternidad, las obreras beneficiadas han sido 17.613, cifra muy superior a la mayor alcanzada en aquellos años, a pesar de que el régimen del seguro exige a la obrera un desembolso que no le exigía el régimen de subsidio. El éxito es debido, ante todo, a la eficacia de las prestaciones inmediatas y a la simpatía que inspira la obra social del seguro.

Recaudación.

El pago de las cuotas patronales y obreras, salvo las primeras dificultades, que fueron eliminándose, puede considerarse como satisfactorio.

Según la estadística recogida, los pagos por cuotas del seguro han alcanzado la cifra de 3.840.913,50 pesetas; corresponde, pues, a cada obrera cotizante una cotización anual de 9,84 pesetas.

Esta cifra puede dar lugar a confusiones si se examina sin tener en cuenta las circunstancias del seguro y las especiales del primer año. Pudiera parecer lógico el esperar que las 390.520 aseguradas hubieran cotizado por un total de 5.857.800 pesetas, a razón de 15 pesetas por cada una (cuota anual reglamentaria). Según esto, la recaudación por primas hubiera arrojado un déficit superior a dos millones de pesetas. Pero lo que hace descender la cotización media de 15 pesetas a 9,84 es la irregularidad en el trabajo femenino, que hace que no todas las aseguradas hayan trabajado durante los cuatro trimestres del año, aparte de los pagos del último trimestre que puedan considerarse como pendientes en el momento en que la estadística se ha formalizado; además, las obreras nuevas, las que han causado alta en el régimen de Retiro obrero y en el de Maternidad, se han ido inscribiendo a todo lo largo del año, y no reúnen, como es natural, las cuatro cuotas de la cotización plena.

Sólo un 32,43 por 100 del total de aseguradas poseen esta cotización plena; 33,51 por 100 han alcanzado tres cuotas; 17,72 por 100, dos, y 16,34 por 100, tan sólo una. De la comparación de la cuota media real y la cuota legal se deduce lo que podría llamarse el *coeficiente de eventualidad*, cuyo valor es 0,65, y que no tiene otra acción que la de reducir las prestaciones metálicas por descanso, que, como es sabido, son directamente proporcionales a las cotizaciones.

Este coeficiente de depreciación de la cuota media, obtenido por simple comparación de las cifras consignadas, queda disminuido, si se consi-

El nuevo teléfono de la Unión General de Trabajadores es el número 43040, al cual se puede llamar desde toda España.

derara que la eventualidad del trabajo sólo existiera cuando se hubieran satisfecho dos o una cuotas solamente, y se admitiera como cotización aceptable para fijar cierta permanencia la de tres y cuatro cuotas en este año. Entonces, el total de obreras con esta cotización nutrida asciende a 66 por 100, y el coeficiente de eventualidad desciende a 0,515.

Véase cómo la cotización, aun depreciada, a causa de la gran masa de eventuales aseguradas, puede considerarse como satisfactoria.

La recaudación se ha hecho normalmente, en las oficinas del seguro, y puede señalarse como dato elocuente el que en ningún caso se ha llegado a la exacción por vía judicial.

Partos ocurridos

Se han dividido en dos grupos: el primero comprende 15.428 partos, que han sido objeto de asistencia por el seguro. En 2.185 partos, las aseguradas no han recibido asistencia por haber renunciado voluntariamente a ella, ya que el seguro no priva a las aseguradas de elegir libremente la asistencia fuera de él.

En total, los partos observados han sido 17.613, de los cuales 942 corresponden a obreras comprendidas en los casos del artículo 20 del reglamento general, las cuales han tenido, en lugar de la asistencia del seguro, la compensación metálica reglamentaria.

Natalidad observada.

No es posible intuir la natalidad de la masa asegurada en este primer año. La comparación de los partos ocurridos con el número de inscritas no puede reflejar la frecuencia de la natalidad.

No influye el *stage* disminuyendo la natalidad, puesto que sólo es exigido para la indemnización de descanso; en este aspecto, todas las obreras aseguradas han estado sometidas a la posibilidad de tener partos dentro del seguro.

No obstante, la falta de cotización de las cuotas del seguro ha excluido a bastantes obreras de la asistencia, pues si bien es verdad que, con arreglo al artículo 85 del reglamento, estos partos no quedan excluidos de sus prestaciones, que han de correr a cargo de los patronos morosos o incumplidores, no podemos afirmar que todas las obreras que se hayan encontrado en este caso hayan ejercido sus derechos. En un cuadro inserto en otro capítulo de este informe se consignan los casos en que las prestaciones han sido satisfechas por los patronos, en cumplimiento del artículo 85, y sólo se observa que la asistencia facultativa ha sido suplida en metálico en 39 casos, el subsidio de lactancia en 37 y la indemnización por descanso en 209.

Evidentemente, ha habido mayor número de parturientas que se han visto privadas de las prestaciones por no estar al corriente en el pago de las cuotas de maternidad.

No es posible intentar una evaluación de la natalidad a la vista del número de obreras por las que se ha satisfecho una, dos, tres o cuatro cuotas trimestrales, pues no puede decirse que estas

aseguradas hayan estado afectas al seguro durante uno, dos, tres o cuatro trimestres, ya que la recaudación trimestral no siempre corresponde al trimestre en curso; además, el momento de la inscripción se refiere a la época precisa en que la asegurada, dentro del trimestre, trabaja para el patrono que primeramente la emplea, y la que empiece su trabajo a fines de un trimestre puede ser afiliada como alta por su patrono sin haber permanecido todo el trimestre sujeta al seguro.

Para hallar la natalidad real sería preciso reducir la masa de aseguradas al número de *obreras-año*, es decir, apreciar en el conjunto la merma causada por las que no han estado todo el año sometidas a la probabilidad de ser madres. El número de *obreras-año* sería notablemente inferior al de obreras aseguradas, y, por lo tanto, la natalidad real sería superior a la que se deduce de la simple comparación de los datos que poseemos.

Sin embargo de cuanto queda expuesto, se presenta en el cuadro siguiente la *natalidad ficticia* observada, para que en él puedan compararse las cifras de las distintas Cajas y, en el tipo general, apreciar la influencia de las irregularidades, viéndose el marcado descenso de la cifra de natalidad obtenida con respecto a la natalidad tomada por nuestros actuarios como probable (7 por 100):

	Partos asistidos por el seguro	Partos ocurridos
Caja de Alava	0,98	0,98
— Andalucía Occidental	»	»
— Andalucía Oriental	2,30	3,08
— Aragón	3,63	3,83
— Asturias	3,39	3,39
— Canarias	1,26	1,26
— Castilla la Nueva	1,52	1,85
— Castilla la Vieja	4,32	5,28
— Cataluña y Baleares	3,31	4,52
— Extremadura	3,75	3,75
— Galicia	2,57	2,57
— Guipúzcoa	1,87	2,21
— León	2,25	2,25
— Murcia	2,95	2,95
— Navarra	1,17	1,92
— Salamanca	3,25	3,25
— Santander	7,65	7,89
— Valencia	4,29	4,29
— Valladolid	3,82	3,82
— Vizcaya	3,75	4,35
Instituto Nacional de Previsión	1,80	2,03
Total	3,95	4,51

Ni aun en el caso en que este tipo de natalidad fuera la natalidad real de la masa sería prudente hacer nuevas hipótesis para mejorar el seguro o reducir las aportaciones exigidas. Aparte de que la revisión de la prima no puede reglamentariamente hacerse hasta pasado el trienio, es poca

la experiencia de un año para intentar fijar la natalidad de la mujer obrera, lo que sólo después de una mayor experiencia podría autorizadamente hacerse.

Nuestros cálculos y evaluaciones han de seguir, pues, refiriéndose al tipo reglamentario del 7 por 100; y si en el año próximo la natalidad real sigue manteniéndose por debajo de aquél, sólo podremos felicitarnos de contar con un margen de seguridad que continuará nuestra tradición de prudencia, base de la solvencia técnica.

Repartición de los partos.

Las Cajas de Cataluña, Valencia, Andalucía occidental y Galicia abarcan más del 81 por 100 de los partos. Corresponden a los cuatro sectores principales del trabajo femenino: el trabajo fabril, el trabajo femenino de temporada (conserva de fruta), el trabajo femenino rural y el trabajo eventual en las industrias derivadas de la pesca.

Los partos se han producido: en las ciudades de más de 200.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia), en proporción de 17,70 por 100; 43,66 en las poblaciones de 30.000 a 200.000 habitantes, y 66,34 en las inferiores a 30.000 habitantes.

Ello nos hace ver la necesidad de organizar cuidadosamente los servicios en las pequeñas localidades y en los medios rurales, que absorben los dos tercios de las parturientas.

Naturaleza de los partos.

De los partos asistidos por el seguro han sido normales 14.341 (el 92,96 por 100 de los casos), y anormales, 1.087 (el 7,04 por 100).

Los partos normales han sido asistidos por matronas en 12.932 casos; 1.409 casos han debido ser asistidos por médicos, por no disponerse de matronas.

De los 1.076 partos anormales, 31 han requerido intervención quirúrgica (operaciones cesáreas, pelvotomías, pubiotomías, fetotomías).

Nuestras evaluaciones sobre la distocia, al hacer la tarificación del coste de la asistencia sanitaria, han diferido de lo que la realidad arroja. La distocia no operada fué fijada primitivamente, en el anteproyecto, en el 4,75 por 100 de los partos; para las operaciones quirúrgicas se calculaba un 0,25 por 100. El tipo de anormalidad total ha subido al 7,04 por 100, 2,04 por 100 más de lo previsto.

Al considerar el tipo nacional de distocia, procede adoptar una actitud semejante a la adoptada cuando se estudió el índice de natalidad ficticia. No podemos tomar aquél ni siquiera como problema distocia durante el segundo año. Las observaciones son aún escasas, y los resultados tan diversos que dan las Cajas corroboran la desconfianza.

No obstante, creemos posible una disminución del porcentaje de distocias por bajo del 7,04 por 100 obtenido. Nos bastaría reproducir nuestra información del anteproyecto, en la que intervinieron autoridades médicas muy significadas. Sobre este punto hemos de volver al tratar de la prestación de los servicios sanitarios.

Textos legislativos e interpretativos.

El stage retrospectivo con cotización normal.

Apenas se presentó el fenómeno de la afluencia de las obreras eventuales al seguro, el Instituto, puesta la vista en las regiones en que aquellas obreras constituían la mayor parte de la masa asegurable según la ley, comprendió que era indispensable acudir en defensa de la viabilidad financiera del seguro, amenazada en la parte dependiente puramente de la técnica actuarial: el fondo de primas, con el que se había de atender al pago de las prestaciones metálicas.

En efecto, con la aplicación estricta del reglamento, aun exigiendo rigurosamente el *stage* retrospectivo de dieciocho meses de inscripción en el Retiro obrero de estas obreras eventuales, sin más condición que lo que en el artículo 26 del reglamento se denominaba «cotización normal» durante el *stage*, podía darse el caso de que mujeres de gran eventualidad en el trabajo, por las que sólo se hubiera cotizado unos días en el Retiro obrero durante el periodo de *stage*, con sólo una cuota del seguro de Maternidad, alcanzasen la plenitud de los derechos de éste. Y entonces surgía la afluencia de las casadas y embarazadas (afluencia comprobada en algunas Cajas), haciendo gravitar sobre el seguro una natalidad excesiva, superior a la prevista para el cálculo de la prima. Se producían así los siguientes males:

1.º El Estado había generosamente destinado 500.000 pesetas, como máximo anual, para completar la indemnización por descanso hasta el máximo de 90 pesetas, ya que la proporcionalidad de la prestación del seguro impedía al principio alcanzar esta cifra. Con la afluencia de eventuales era muy probable que aquel crédito quedara agotado, con perjuicio de las aseguradas que dierran posteriormente a luz.

2.º Las seleccionadas alterarían la ecuación de la prima, y, a la larga, la cuota hubiera sido insuficiente.

3.º El seguro de Maternidad, hecho para las obreras, daría gran parte de sus beneficios a las que no pueden recibir el nombre de tales, con perjuicio para las realmente trabajadoras.

4.º La facilidad para reunir las condiciones exigidas daría lugar a numerosos fraudes.

En una palabra: era preciso atender a este grave problema. Fué esto uno de los primeros actos del Instituto, que recabó del Poder público una definición de la llamada «cotización normal». La orden ministerial (ministerio de Trabajo y Previsión) de 3 de octubre de 1931 declaró que sólo se consideraría normal la cotización durante el *stage* retrospectivo, si alcanzaba un mínimo de 90 cuotas al año, y la circular número 18 del Instituto Nacional de Previsión de 11 de enero de 1932 fijó el sistema del prorrateo de estas 90 cuotas para las fracciones del año.

Así se hizo efectivo el *stage*, antes solamente nominal, para obtener la indemnización de descanso; las consecuencias de esto son curiosas e interesantes.

En primer lugar, la masa de obreras que pudiéramos llamar «dudosas», en las que la eventua-

BIBLIOTECA

lidad es extraordinaria, hallando el tope que la orden ministerial impuso desviaron su afluencia hacia las otras prestaciones del seguro, donde solamente es exigido para otorgarlas el haber pagado las cuotas del seguro de Maternidad de los trimestres en que se hubiere trabajado. Gran número de estas obreras «supereventuales» han recibido asistencia médica y cobrado el premio de lactancia.

En regiones de gran eventualidad en el trabajo femenino, como Andalucía Occidental, sólo un 8 por 100 del total de beneficiadas han podido reunir las 90 cuotas de cotización normal durante el *stage* retrospectivo, y han percibido indemnización de descanso. El fondo de primas ha debido, pues, cubrir muy escasas atenciones. En cambio, los subsidios de lactancia concedidos alcanzan al 72 por 100 del total de beneficiadas.

La influencia de esta restricción es importantísima. En el total de la Península, sólo el 56 por 100 de las obreras que han dado a luz han podido percibir la indemnización de descanso. Las regiones en que menos indemnizaciones se han concedido son, naturalmente, las que poseen vastas zonas rurales, como Andalucía y Extremadura, en las que las cifras de obreras que han tenido indemnización de descanso reflejan el escaso número de obreras permanentes en relación con la masa. En otras regiones, en las que hay gran número de eventuales, pero con cierta regularidad en las temporadas de trabajo, como ocurre en Galicia con las obreras conserveras, y en Valencia respecto a las que trabajan en las industrias derivadas de la agricultura, los porcentajes de obreras que han alcanzado la cotización normal son superiores.

Dedúcese de este examen la clasificación de las actuales aseguradas en tres grupos:

1.º Las obreras permanentes de la industria y el comercio que pertenecen a las grandes poblaciones y a los centros fabriles importantes. Casi todas han alcanzado la cotización normal y percibido indemnización de descanso.

2.º Obreras eventuales de temporada que, por tener cierta regularidad en el trabajo, alcanzan en bastantes casos la indemnización. Son las obreras cuya temporada de trabajo es superior a un trimestre, y pertenecen a las zonas de trabajo agrícola más regularizado (regadío, cultivo intensivo) y a las zonas industriales conserveras.

3.º Mujeres que trabajan esporádicamente, que no pueden considerarse propiamente como obreras y que no alcanzan la cotización normal, viéndose privadas, naturalmente, de la indemnización de descanso. Estas aseguradas, aun pasado el *stage* retrospectivo, y cuando no se les exija cotización normal en el Retiro obrero, obtendrán indemnizaciones de descanso exigüas, por la escasez de sus cuotas de maternidad.

Pertenecen a las zonas de organización deficiente en el trabajo rural, o al sector del trabajo a domicilio, y su número es muy considerable.

En el conjunto de la masa asegurada, la influencia del último grupo es importante, y hace que sólo poco más de la mitad de las aseguradas haya podido recibir la indemnización de descanso.

El hecho responde a las circunstancias del primer momento. Es la resultante de la reacción pro-

ducida entre la acción difusiva del seguro y su enorme propagación y los medios aplicados para evitar el fraude que el *stage* retrospectivo no contenía. Tal vez esta primera reacción haya sido algo brusca, y la cifra de obreras indemnizadas resulte demasiado pequeña; pero hay que tener en cuenta que el número de indemnizaciones rechazadas ha de ir disminuyendo a medida que avance el seguro, y que el *stage* se haga efectivo a partir de 1 de octubre de 1931. Cuando se hayan cumplido los dieciocho meses de vigencia del seguro, en abril de 1933, la cotización normal de 90 cuotas dejará de ser exigida.

Asistencia facultativa satisfecha en metálico.

El Instituto y las Cajas se esforzaron desde el primer día en la organización del servicio sanitario, y sólo en casos muy excepcionales no ha sido posible proporcionar a las parturientas asistencia facultativa propia del seguro, entregándoseles entonces el importe en metálico de dicha asistencia.

Pero hay un grupo de aseguradas que, según el artículo 20 del reglamento, por recibir ya la asistencia de la Beneficencia municipal, o por otro sistema previamente concertado (Sociedades mutuas, iguales con los facultativos, etc.), habían de percibir en metálico el importe de dicha asistencia.

La reciente asamblea examinó el caso que planteaba la adopción de las tarifas de remuneración de los servicios, según los convenios con los facultativos, y halló anomalías que había de suscitar la aplicación estricta de dicho artículo 20 del reglamento general. En nuestro primer informe quedó razonado el criterio sustentado por el Instituto y sus Cajas en esta materia, criterio que fué elevado a la consideración del ministro de Trabajo y Previsión, en demanda de una necesaria aclaración oficial. Ahora debemos dar cuenta de que este criterio fué recogido por el Poder público, que dictó en 31 de mayo de 1932 una orden aclaratoria, en la cual se dispone que la cantidad que debe entregarse a las interesadas sea una cantidad fija, evaluada en el importe de los honorarios de la matrona y del ajuar sanitario normal, en todos los casos.

En 946 casos, de los 17.613 partos ocurridos, se ha aplicado el artículo 20, con su aclaración posterior. Obsérvese que, a pesar de la facilidad de empadronamiento en la Beneficencia municipal, pocas obreras acuden a ella en demanda de asistencia, prefiriendo el seguro y apreciando debidamente la diferencia entre la asistencia benéfica y el seguro social, y dando preferencia a este último, conscientes de su mayor valor social y de su mayor eficacia.

Estas son las disposiciones oficiales más importantes dictadas en el transcurso del año, textos interpretativos complementarios de la legislación del seguro que tienden a su encauzamiento.

Además, el Instituto se propuso, desde el primer momento, implantar un servicio de asesoramiento para la mejor resolución de las múltiples

cuestiones de detalle que en el seguro de Maternidad surgen continuamente. En constante contacto con las Cajas colaboradoras, se han dictado 21 circulares aclaratorias o normativas, y en el primer informe se insertó un consultorio alfabético de resolución de dudas y de casos difíciles. Creemos con ello haber facilitado la imprecisa labor de las Cajas en sus esfuerzos para encauzar debidamente el seguro en este primer año.

Las prestaciones.

A) PRESTACIONES SANITARIAS.

Al comienzo del seguro fué aplicado, sin grandes dificultades, el artículo 10 del reglamento ge-

neral, concertando los servicios sanitarios con los Colegios médicos y farmacéuticos y las organizaciones de matronas.

Los convenios se estipularon por un año. Su revisión ha sido pedida por las clases sanitarias, y hay, pues, que concertar otros nuevos para el segundo año del Seguro. Estamos, pues, en un momento de gran interés para nuestra organización sanitaria; y, para fijar nuestras orientaciones futuras, ha de ser, sin duda, de gran utilidad el examen y crítica de la marcha del servicio durante el año transcurrido.

Se inserta a continuación el cuadro recapitulativo de los servicios prestados por los facultativos durante el año.

La colaboración de los Sindicatos obreros en la elaboración de acuerdos comerciales

Hace algunas semanas que una Central sindical nacional adherida a la Federación Sindical Internacional intentó intervenir, por conversaciones directas con los Sindicatos de otros países, en las divergencias existentes en relación con el acuerdo comercial entre estos dos países. El Comité central de la Central sindical común de Checoslovaquia invitó a los representantes de la Central sindical húngara a un cambio de impresiones, con el fin de obtener el pronto restablecimiento de las relaciones económicas normales entre Checoslovaquia y Hungría, rotas por haberse denunciado el acuerdo comercial.

Este cambio de impresiones dió por resultado la comprobación unánime de que era altamente necesario para el interés de estos dos países y de su clase obrera restablecer a la mayor brevedad las relaciones normales.

Las dos Centrales sindicales convinieron en realizar por parte de unos y otros las gestiones necesarias cerca del ministerio de Negocios económi-

cos, de los organismos legislativos, y especialmente cerca de los parlamentarios simpatizantes, con el fin de activar la renovación del acuerdo comercial. Las dos Centrales declararon también que el convenio provisional de compensación no constituía una razón suficiente para retrasar la conclusión de un acuerdo comercial. Las dos Centrales se comprometieron a activar la renovación de este acuerdo por todos los medios disponibles. Con una franqueza plausible se denunció de una y otra parte los obstáculos: en Checoslovaquia, las exigencias exageradas de los agrarios; en Hungría, los intolerables enredos suscitados para efectuar los pagos.

Esta iniciativa ejemplar, que las dos Centrales tomaron de acuerdo con las decisiones del Congreso Sindical Internacional de Estocolmo (1930), que imponía sobre este particular obligaciones concretas, merece el mejor de los éxitos. La F. S. I. le prestará, como a todas las iniciativas análogas, su mejor concurso.

ENTIDADES	Número de facultativos inscritos en el seguro			Servicios prestados por médicos							Servicios prestados por matronas				Servicios prestados por farmacéuticos			Servicios prestados por fisioterapia	
	Médicos	Farmacéuticos	Matronas	Operaciones	Partos distócicos	Partos normales	INCIDENCIAS			TOTAL	Asistencia a partos y partos normales	Auxilio en operaciones y partos distócicos	Visitas en función de Visitadoras	TOTAL	Ajueros servicios	Recetas del pefitorio	Recetas fuera del pefitorio		TOTAL
							Visitas en la gestación	Visitas en el puerperio	Asistencia a abortos										
Caja de Alava.....	»	»	»	»	5	10	»	19	»	34	30	5	360	395	45	23	»	68	»
Idem de Andalucía Occidental.....	368	105	341	3	82	275	47	768	»	1.175	2.810	»	8.678	11.488	1.444	132	272	1.948	1.180
Idem de Andalucía Oriental.....	281	13	83	»	4	»	3	10	»	16	157	4	981	1.142	88	»	»	88	»
Idem de Aragón.....	33	»	124	»	31	39	12	47	»	129	266	29	68	363	227	37	27	291	422
Idem de Asturias.....	41	25	31	»	6	8	»	20	»	34	139	»	35	175	48	11	1	60	»
Idem de Canarias.....	40	»	7	»	6	6	»	55	»	70	188	3	394	585	173	7	»	180	»
Idem de Castilla la Nueva.....	»	»	10	»	2	21	»	»	»	23	24	»	»	24	»	»	»	»	»
Idem de Castilla la Vieja.....	33	26	18	»	13	143	»	28	»	184	114	»	»	114	148	»	3	151	»
Idem de Cataluña y Baleares.....	569	1.142	689	24	582	8	803	1.086	»	2.503	4.505	606	»	5.111	4.229	411	1.152	5.792	»
Idem de Extremadura.....	88	21	27	»	»	8	7	8	»	23	35	»	39	74	»	»	»	»	»
Idem de Galicia.....	55	24	29	1	42	362	11	328	1	745	443	»	144	586	642	85	197	924	»
Idem de Guipúzcoa.....	94	90	11	1	24	182	»	»	»	207	93	»	»	98	281	25	306	»	»
Idem de León.....	»	»	»	»	»	19	»	»	»	19	11	»	»	11	10	»	»	10	»
Idem de Murcia.....	64	92	22	1	15	12	25	184	»	237	272	11	»	283	122	9	19	150	»
Idem de Navarra.....	8	»	8	»	1	2	»	2	»	5	19	»	26	45	»	1	»	1	20
Idem de Salamanca.....	37	28	11	»	3	9	3	12	»	27	18	»	1	19	6	»	»	6	»
Idem de Santander.....	39	»	29	»	25	34	13	90	1	163	266	»	187	453	176	6	18	200	18
Idem de Valencia.....	768	107	231	»	159	107	135	252	85	738	2.998	»	»	2.998	2.822	35	12	2.869	»
Idem de Valladolid.....	137	39	17	»	4	44	14	32	3	97	57	3	»	60	10	1	1	12	»
Idem de Vizcaya.....	134	155	92	1	27	112	123	»	»	263	240	»	»	240	466	19	»	485	»
Instituto Nacional de Previsión.....	87	29	259	»	25	5	15	58	»	103	248	25	313	586	246	21	7	274	»
TOTALES.....	2.866	1.896	2.039	31	1.056	1.409	1.210	2.999	80	6.795	12.932	686	11.227	24.845	11.183	823	1.809	13.815	1.964

B) PRESTACIONES METÁLICAS

Indemnización de descanso.

Ya se ha expuesto en anteriores páginas que el resultado que arroja la estadística recogida este año nos da un número de obreras indemnizadas por descanso muy inferior al de parturientas. En el cuadro siguiente figuran los datos, separados por Cajas, y en él puede apreciarse la influencia del *stage* retrospectivo con cotización normal de 90 cuotas.

ENTIDADES	INDEMNIZACIÓN POR DESCANSO		
	Número de obreras indemnizadas	Porcentaje del total de beneficiadas	Total pagado
Caja de Alava.....	43	96	4.425
Idem de Andalucía occidental.....	243	8	21.705
Idem de Andalucía oriental.....	109	50	7.880
Idem de Aragón.....	223	63	17.855
Idem de Asturias.....	93	61	7.695
Idem de Canarias.....	95	47	8.550
Idem de Castilla la Nueva.	24	42	2.145
Idem de Castilla la Vieja.	216	65	17.235
Idem de Cataluña y Baleares.....	5.618	80	505.614
Idem de Extremadura.....	3	7	270
Idem de Galicia.....	604	71	54.330
Idem de Guipúzcoa.....	219	62	19.547,50
Idem de León.....	16	53	1.140
Idem de Murcia.....	82	27	7.305
Idem de Navarra.....	11	31	990
Idem de Salamanca.....	22	73	1.980
Idem de Santander.....	114	34	10.200
Idem de Valencia.....	1.520	47	125.100
Idem de Valladolid.....	33	31	2.910
Idem de Vizcaya.....	271	61	22.965
Instituto Nacional de Previsión.....	230	73	20.502,50
TOTALES.....	9.789	56	860.644

Comparando en el cuadro las cifras correspondientes a tres Cajas que reúnen obreras pertenecientes a los tres grupos característicos, a saber:

Cataluña (obreras permanentes);
Valencia (obreras de temporada), y
Andalucía occidental (obreras de gran eventualidad),

y que entre las tres reúnen 13.440 beneficiadas (el 76,31 por 100 de todos los partos ocurridos), se observa claramente la proporcionalidad entre el número de indemnizaciones de descanso concedidas y la mayor o menor permanencia en el trabajo.

La experiencia se nos ofrece en dos aspectos: uno, de orden administrativo, y otro, de carácter financiero.

La mayor parte de los casos dudosos, de las consultas y de las reclamaciones surgidas en este primer año se refieren a la declaración del derecho a indemnización de descanso. El casuismo ha llegado a la atomización, y ello ha sido la princi-

pal dificultad que a la marcha administrativa del seguro se ha opuesto. Ha sido necesario extremar el cuidado en la apreciación de los casos y montar un servicio de consultas. No obstante ello, han surgido algunas reclamaciones de obreras, desconocedoras de las limitaciones del *stage* retrospectivo, según la definición ministerial.

En casos en que la duda no podía ser francamente resuelta, al menos en forma comprensible para las aseguradas, el Instituto y las Cajas colaboradoras se han inclinado hacia un criterio benevolente, criterio que ya se inició con la aplicación del principio del prorrateo de las 90 cuotas en el *stage* retrospectivo.

A pesar de haberse adoptado en muchos casos la solución más favorable a las aseguradas, sólo han podido obtener la indemnización de descanso 9.789 obreras, con un total de indemnizaciones de 860.644 pesetas, cantidad compuesta de dos partes: la correspondiente al Fondo del Seguro, proporcional al número de cuotas trimestrales de maternidad satisfechas, según lo dispuesto en el reglamento, y la aportada por el Estado para completar el mínimo de 90 pesetas que durante este primer trienio han de percibir todas las aseguradas que consoliden sus derechos a indemnización de descanso.

Y aquí conviene estudiar el segundo aspecto con que se nos manifiesta la experiencia recogida.

El fondo llamado de Seguro, formado por las cotizaciones patronales y obreras, es el destinado a satisfacer la indemnización de descanso, en proporción al número de cuotas satisfechas por cada obrera que consolide el derecho. La influencia del *stage* ha contribuido a engrosar este Fondo, aun sólo de modo aparente, pues el equilibrio del seguro se realiza de modo pleno al terminar el primer trienio, durante todo el cual las aseguradas van consolidando cada vez mayores derechos a la indemnización.

La obrera que en este primer año sólo ha podido obtener una indemnización de 60 pesetas (1), por ejemplo, correspondiente al desembolso de cuatro cuotas trimestrales, si vuelve a dar a luz al finalizar el tercer año del seguro percibirá 180 pesetas, cantidad que se forma computando también las cuatro cuotas de este primer año. En realidad, no puede determinarse el excedente, que pudiéramos llamar técnico, hasta el principio del cuarto año.

Los excedentes del Fondo del Seguro, calculados de este modo, son excedentes previstos al determinar la cuantía de la prima, y en fin del trienio, supuesta la natalidad que se tuvo en cuenta, no alcanzan al 10 por 100 de la recaudación de un año. Estos excedentes tienen, por otra parte, una aplicación reglamentaria: la de constituir los Fondos de indemnizaciones especiales, maternal e infantil, regulador y el de reserva, que son esenciales para la buena marcha del seguro, y en especial de los servicios sanitarios; y todo es poco para la realización de los fines de la existencia.

Es lástima que no podamos saber exactamente qué parte del Fondo del Seguro ha de transferirse

(1) Como es sabido, la diferencia hasta 90 pesetas la satisface el Estado.

a los Fondos complementarios, como consecuencia de lo ocurrido en el primer año, ya que la cifra de indemnizaciones por descanso satisfechas no representa el gasto real efectuado, puesto que las cifras consignadas son sólo las correspondientes a desembolsos efectivamente realizados por las Cajas. Las indemnizaciones que están en curso de pagos semanales y las pendientes de declaración de derecho, que seguramente alcanzarán un número considerable, no han podido ser incluidas en la estadística: corresponden a los partos ocurridos durante el mes de septiembre, y que habrán originado una multitud de indemnizaciones de descanso, que en 30 de septiembre no han podido ser tenidas en cuenta.

De un modo u otro, hay que proceder con extrema cautela al considerar los excedentes. Los de este primer año habrán de disminuir a partir del segundo, por las siguientes causas:

1.º Natalidad real, forzosamente superior a la ficticia de este año.

2.º Desaparición del *stage retrospectivo* a partir del segundo trimestre de 1933.

3.º Disminución (prevista ya) al aumentar el número de cotizaciones satisfechas por las obreras y sus patronos.

Por todo lo cual, el interés del Fondo del Seguro y la necesidad de nutrir los Fondos complementarios corroboran la norma reglamentaria de la no revisión de la prima hasta pasado un trienio, y la necesidad de que el Fondo del Seguro siga atendiendo exclusivamente a las indemnizaciones de descanso, con independencia de los Fondos de asistencia sanitaria.

El subsidio de lactancia.— En el primer año del seguro de Maternidad, los subsidios otorgados por lactancia han sido los siguientes:

ENTIDADES	SUBSIDIO DE LACTANCIA		
	Número de obreras subsidiadas	Porcentaje del total de beneficiadas	Total pagado
Caja de Alava.....	45	100	2.530
Idem de Andalucía occidental	2.996	72	114.550
Idem de Andalucía oriental	187	87	7.850
Idem de Aragón.....	343	97	13.945
Idem de Asturias.....	111	73	5.475
Idem de Canarias.....	167	77	7.770
Idem de Castilla la Nueva	48	84	2.445
Idem de Castilla la Vieja	316	96	12.445
Idem de Cataluña y Baleares	5.960	85	297.960
Idem de Extremadura.....	36	84	1.800
Idem de Galicia.....	898(1)	»	44.850
Idem de Guipúzcoa.....	239	67	11.912,50
Idem de León.....	19	63	950
Idem de Murcia.....	219	73	10.220
Idem de Navarra.....	19	53	950
Idem de Salamanca.....	25	83	1.185
Idem de Santander.....	230	69	11.445
Idem de Valencia.....	2.743	84	121.300
Idem de Valladolid.....	68	65	3.215
Idem de Vizcaya.....	411	93	18.145
Instituto Nacional de Previsión	298	95	14.540
TOTALES.....	14.668	83	705.212,50

Biblioteca militante

La Unión General de Trabajadores, deseosa de aumentar la cultura de sus militantes y divulgar las leyes sociales, ha editado la ley del Contrato de trabajo y la ley de Asociaciones profesionales, cada una de ellas comentada, en un folleto que se vende al precio de 25 céntimos el ejemplar, teniendo el propósito de publicar ahora la ley de Jurados mixtos.

De los dos primeros folletos nos quedan ya muy pocos ejemplares, y rogamos a las entidades lo pongan en conocimiento de sus afiliados, pues de no recibir pedidos cuantiosos no podríamos hacer una nueva edición, hallándose próximas a agotarse las ediciones que hemos hecho.

El teléfono de la Unión General de Trabajadores es el

43040

El número de obreras subsidiadas alcanza al 83 por 100 del total de beneficiadas. Es decir, rebasa en un 3 por 100 a lo previsto en el anteproyecto.

La tendencia es a que este número aumente aún más, pues, como ocurre en la indemnización por descanso, esta estadística no ha podido tampoco englobar numerosos casos de subsidios pendientes de cobro o en curso de pago, correspondientes a partos ocurridos en el mes de septiembre.

Hay, tal vez, que contar con un pequeño margen de disminución, debido a la exclusión de fraudes posibles, y que son de difícil comprobación mientras no funcione normalmente el servicio de visitantes; pero, en general, debemos felicitarnos de los resultados obtenidos. El seguro de Maternidad, en su función protectora a la madre y del niño, ha adoptado al establecer los premios de lactancia un sistema estimulante de gran eficacia, como comprueban los datos que aquí se presentan.

Conviene observar, para que pueda formarse una idea completa de la marcha del seguro, que el abono de prestaciones metálicas supone para las Cajas una labor administrativa penosa. Los pagos por descanso y por lactancia exigen una com-

(1) Con inclusión de los subsidios de maternidad pagados en el primer trimestre del seguro.

probación semanal del derecho, y un pago periódico que origina gran movimiento administrativo. Sin embargo, la organización técnicoadministrativa del Instituto y sus Cajas colaboradoras ha permitido desarrollar este esfuerzo casi con los mismos medios administrativos que llevan el servicio general de Previsión.

Prestaciones satisfechas por los patronos. — El seguro de Maternidad no priva a la obrera no ins-

crita, o falta de cotización por culpa exclusiva del patrono, de las prestaciones correspondientes, que, en este caso, corren a cargo de los patronos morosos o descuidados.

En el transcurso del año sólo ha sido necesario aplicar esta sanción a 196 patronos, con un total exigido de 23.193 pesetas, distribuidas entre las distintas prestaciones del modo que se consigna en el siguiente cuadro:

Prestaciones satisfechas en metálico por los patronos, en cumplimiento del artículo 85 del reglamento.

CAJAS	Número de patronos	NUMERO DE OBRERAS BENEFICIADAS			IMPORTE DE LAS CANTIDADES PAGADAS Pesetas			
		Asistencia	Lactancia	Indemnización de descanso	Asistencia	Lactancia	Indemnización de descanso	TOTALES
Alava	4	»	»	5	»	»	450	450
Aragón	26	2	2	26	56	100	2.250	2.406
Asturias	7	»	»	8	»	»	676	676
Canarias	19	»	»	19	»	»	1.710	1.710
Castilla la Vieja	3	»	»	7	»	»	630	630
Cataluña	28	2	»	27	100	»	2.295	2.295
Galicia	60	25	25	84	765	1.250	7.560	9.575
Guipúzcoa	3	»	»	3	»	»	270	270
Murcia	2	1	1	1	30	50	90	170
Navarra	1	1	1	»	23	50	»	73
Santander	8	8	8	8	184	400	630	1.214
Valladolid	6	»	»	»	»	»	»	834
Vizcaya	17	»	»	19	»	»	»	1.710
Instituto	12	»	»	12	»	»	1.080	1.080
TOTALES	196	39	37	209	1.158	1.850	19.351	23.193

Ante el próximo balance.

Si el término del primer año del seguro hubiera coincidido con el fin del año natural, hubieran podido agregarse a este informe datos de contabilidad muy interesantes, relativos a la marcha de los distintos Fondos del Seguro, y que hubieran permitido apreciar la cuantía de los Fondos complementarios procedentes del Fondo del Seguro liquidado en fecha del balance (1).

No obstante, del examen de la estadística expuesta y de los documentos de contabilidad enviados periódicamente por las Cajas, con arreglo a nuestro reglamento del procedimiento técnicoadministrativo, pueden deducirse observaciones importantes.

Formado el Fondo de Asistencia sanitaria por los dos subfondos de Asistencia a partos normales y Asistencia a partos distócicos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 del reglamento general (2), se ha observado que si bien del Fondo de

Asistencia normal, que administran las Cajas, puede decirse que ha cubierto con relativa holgura las atenciones de este primer año, y que es de presumir que así siga ocurriendo, en cuanto al Fondo de distocia, que administra en parte el Instituto, no podemos afirmar nada en concreto hasta conocer el total de los pagos realizados. Sin embargo, el aumento de los casos de anomalías, con respecto a lo previsto, no puede dejar de preocuparnos, así como la incógnita que supone aún el gasto que hayan de originar las incidencias patológicas.

Con arreglo a las cifras de distocia (operada o no) que la realidad ha arrojado, se ha intentado (estimando prudentemente, con arreglo a lo ya desembolsado, lo que aún queda por desembolsar para estas atenciones y que ahora está pendiente) obtener una cifra aproximada. Para el total de los partos, esta cifra puede quedar comprendida dentro de las 17,50 que por parto se destina al Fondo de Distocia; pero para alguna Caja queda por encima de sus posibilidades en la parte administrada por ellas.

Si la distocia se mantiene en este porcentaje elevado (lo que no esperamos, pues confiamos en las medidas expuestas en un capítulo anterior para reducir la cifra ficticia a la cifra real), será necesaria la intervención del Fondo regulador, que, según el artículo 63 del reglamento general, deberá ser destinado al auxilio de las Cajas colabora-

(1) También hubiéramos podido incorporar a esta estadística los datos de estadística normal que se rinden a fin de año, y de los cuales el más interesante es la distribución de las aseguradas por años de nacimiento.

(2) Se asigna, según este artículo, al Fondo nacional de partos distócicos e incidencias la cantidad de 17,50 pesetas por parto.

doras de mayores necesidades en las prestaciones en relación con sus recursos.

Una parte importante de los Fondos complementarios, el de reserva y el regulador, que entre ambos componen la mitad exacta de los excedentes, habrán de quedar afectos a las necesidades inmediatas del seguro. Pueden ser considerados como una especie de pasivo técnico (si vale la analogía con la terminología técnica del seguro de rentas), ya que su aplicación habrá de ser en beneficio directo de las propias obreras aseguradas.

Los Fondos Maternal e Infantil y de indemnizaciones especiales, habrán de formar el capital inicial, con el que el seguro de Maternidad ha de atender a más amplias actuaciones de índole social y sanitaria, de creación y fomento de obras de protección a la maternidad y a la infancia.

La fecha del próximo balance señala para el Instituto y sus Cajas colaboradoras un nuevo avance en la evolución de su función, y el momento en que han de proceder a elaborar un programa sanitario y social, cuyo esquema habrá de ser la determinación exacta de los fines de éstos dos Fondos complementarios, y el modo de coordinar las actuaciones de todas las Cajas dentro de la obra común. Para esta labor podrá ser, sin duda, útil el examen de los puntos recogidos en este informe.

Resumen.

Compendiando las observaciones de este informe, puede afirmarse con satisfacción que se ha hecho labor útil. Las realidades han desbordado las esperanzas y ha habido que adaptarse al ritmo acelerado de las inscripciones: algunas veces ha sido preciso contener una afluencia peligrosa. Desgraciadamente, ignoramos el número de trabajadoras afiliables al seguro de Maternidad; pero, por elevado que éste sea, no deja de ser extraordinario el número de obreras que son hoy nuestras aseguradas.

Dentro de esta masa hemos procurado clasificar a las obreras por su continuidad en el trabajo: en el primer año sólo hemos podido darnos cuenta de la presencia de muchas trabajadoras de muy escasa permanencia en el trabajo, que han producido una depreciación en la cotización, si bien esta depreciación no es excesiva y confiamos en reducirla.

Se han empleado poco los medios coactivos. Por vía judicial no se ha recaudado cuota alguna. Nuestras Inspecciones no han tenido que aplicar sanciones ni practicar numerosas liquidaciones a patronos en descubierto. Por el contrario, varios de éstos han abonado sin resistencia las prestaciones de sus obreras, en casos en que fueron ellos responsables, por descuido o retraso en la cotización o inscripción.

La gran masa asegurada ha tenido una natalidad que es, hasta ahora, una incógnita; pero que pretendemos no será muy inferior a la que se previó al calcular la prima. La natalidad que obtenemos en nuestra experiencia la llamamos «ficticia» o reducida, en espera de conocer el año próximo la verdadera, para lo cual disponemos nuestro trabajo estadístico en forma de po-

der conocer exactamente el número de «obreras-año» afectas al seguro.

La natalidad reducida ha influido favorablemente en el Fondo del Seguro o de indemnizaciones por descanso. No debiera haberlo hecho desfavorablemente en el Fondo de Asistencia sanitaria, si no hubiera venido unida a una distocia anormal exagerada, y que también podríamos llamar «ficticia», que hace que algunas Cajas, de persistir el fenómeno, deban ser socorridas con el Fondo regulador.

El servicio de asistencia ha resultado, en general, eficaz. Sus dos defectos han sido el de una desigual repartición de facultativos y el de la poca vigilancia médica en la gestación y en el puerperio, debida a la carencia de tocólogos en muchos casos y a la falta de reconocimientos.

Como en todos los seguros sociales, la aplicación, fácil en las grandes poblaciones, no es tan satisfactoria en los medios rurales.

Por eso, las incidencias patológicas en gestación y puerperio no son todavía, para nosotros, materia del todo conocida.

La estadística del segundo año, más cercano al punto de equilibrio del seguro, será seguramente más expresiva que la que acabamos de glosar: las cifras, más contrastadas; los índices, de mayor valor matemático. Este perfeccionamiento de nuestra experiencia coincidirá con el principio de una etapa del seguro de Maternidad cuyo origen es la formación de los Fondos complementarios que en el próximo balance hemos de constituir.

De estos Fondos hay dos que realizarán una función que podemos llamar «financiera»: el de reserva y el regulador, y quedarán afectos a las actuales necesidades del seguro. Los otros: el maternal e infantil y el de indemnizaciones especiales, atenderán a la ampliación de los fines del seguro, con vistas a una política especial de protección a la madre y al niño.

A las Secciones de la U. G. T. de España

Ponemos en conocimiento de todos nuestros compañeros y Secciones que la Unión General de Trabajadores de España, por acuerdo del Comité nacional últimamente celebrado, ha fijado su domicilio en la calle de Fernández de la Hoz, 51, a donde debe remitirse en lo sucesivo toda la correspondencia, así como también los giros, que deberán ir a nombre del compañero Antonio Muñoz Giraldo. El teléfono de la U. G. T. de España es el 43040. Madrid.

Rogamos a nuestros compañeros y Secciones tomen buena nota de cuanto anteriormente decimos y procuren cumplimentarlo.

ACUERDOS DE LA COMISION EJECUTIVA

La Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España ha celebrado reunión en los días que a continuación se expresan, habiendo adoptado los acuerdos que se mencionan:

Reunión del día 17 de noviembre de 1932.

Asisten los compañeros Besteiro, que presidió; Saborit, García, Septiem, Martínez y Trifón Gómez, como secretario.

Se dió ingreso a los siguientes organismos:

Por conducto de sus respectivas Federaciones nacionales:

Sindicato Obrero del Transporte de La Línea, con 50 asociados.

Sindicato de Hoteles de San Sebastián, con 205.
Sociedad de Camareros El Progreso, de Béjar, con 24.

Sección de Artes Blancas de Pozoblanco, con 17.
Sociedad de Obreros Confiteros y Pasteleros de Badajoz, con 16.

Ramo de la Edificación de Gijón, con 30.
Oficios Varios (Edificación) de Pola de Lena, con 23.

Oficios de la Construcción de Barrés, con 23.
Sociedad de Pintores de Badajoz, con 51.
Sociedad de Peones de Lúcar, con 60.

Sociedad de Albañiles de Infantes, con 12.
Asociación de Obreros Peluqueros-Barberos de Vigo, con 75.

Ingresos directos:

Sociedad de Oficios Varios La Inquebrantable, de Vegadeo, con 52 asociados.

Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de Campamento y Cuatro Vientos, de Carabanchel Alto, con 72.

Obreros del Puerto La Antorcha, de Cartagena, con 195.

Unión Obrera de Ogassa (Edificación), de Suroca, con 70.

Sociedad Obrera Agrícola La Luz Campesina, de Coy, con 42.

Total, 17 Secciones, con 1.016 afiliados.

El secretario adjunto dió cuenta de las gestiones efectuadas, de acuerdo con las organizaciones respectivas, cerca de diversos ministros para resolver cuestiones de interés suscitadas en Ciudad Rodrigo, Zaragoza y otras poblaciones.

El camarada Amador Fernández, en nombre del Sindicato Minero Asturiano, informa ampliamente del origen del conflicto surgido en aquella cuenca minera y da lectura a gran número de documentos que impresionan favorablemente a la Comisión ejecutiva, la que acuerda comunicar a aquellos camaradas que la Unión General ve con la mayor simpatía su movimiento obrero y se presta a auxiliarles de modo eficaz para alcanzar un éxito en sus gestiones a fin de dar pronta y conveniente solución a la huelga que tienen declarada.

Estudiado el caso concreto que presenta la Federación provincial de Zaragoza, se acuerda ratificar el nombramiento de Lucio Martínez para que se traslade a esa capital cuando lo consideren

conveniente las organizaciones de la Unión, a fin de conocer sobre el terreno sus necesidades y aspiraciones.

La Ejecutiva queda informada de la designación de vocales al Comité nacional hecha por las Federaciones de la Tierra y Gráfica Española, de conformidad con los estatutos de la Unión.

El asunto que plantean los compañeros del Sindicato Nacional de la Arquitectura e Ingeniería se aprueba que sea decidido por el Comité nacional a la vista de la correspondencia de este Sindicato.

Se acuerda proseguir las gestiones para organizar la Federación del Transporte Aéreo, y en tal sentido se realizarán gestiones con representantes de las organizaciones interesadas y que pertenecen a la Unión General de Trabajadores.

La Ejecutiva lamenta no poder resolver el problema de fusión de las dos organizaciones de Limpiabotas existentes en Madrid, confiando en que ambas organizaciones comprendan la necesidad de unirse si quieren aumentar su fuerza y la eficacia de sus actuaciones.

La Federación del Transporte plantea el caso concreto de la organización de los conductores de automóviles del Municipio madrileño, algunos de los cuales desean pertenecer a obreros municipales. Se acuerda que la Secretaría trate con las organizaciones interesadas y procure resolver el caso a satisfacción de ambas.

La Federación de Empleados de Oficinas reclama que se cumplan los acuerdos del Congreso en lo que se relaciona con el trabajo de empleados de oficina, que no deben ser incluidos, según ellos, en las bases de las organizaciones de dependientes. La Secretaría queda encargada de tramitar este asunto, si es posible, de acuerdo con ambas organizaciones y con los adoptados por el último Congreso de la Unión General de Trabajadores.

Las gestiones hechas por la organización obrera de Avilés La Marina, de acuerdo con el secretario, son aprobadas, esperándose la resolución del ministro de Obras públicas.

Se aprueba facilitar las gestiones que desean se hagan los camaradas de la Federación de Hospitales, Sanatorios y Manicomios.

Se nombra para ir a Arganda a los compañeros Lucio Martínez y Henche.

Para ir a Peñaranda, a Lucio Martínez, cuando lo determine la Federación de Trabajadores de la Tierra, a la cual Federación se dará traslado del deseo que expresa un compañero de Fuente de Cantos para que la mencionada Federación acuerde si es o no posible atender su petición.

Se acuerda contribuir a la suscripción para erigir una lápida a la memoria de Manuel Jáimez, asesinado en Madrid.

Reunión del 24 de noviembre.

Asisten los compañeros Besteiro, que presidió; García, Saborit, Martínez, Septiem, Muñoz y Trifón Gómez, como secretario.

Se concede el ingreso a los siguientes organismos:

Por conducto de su respectiva Federación nacional:

Sociedad de Curtidores de Villavieja de Yeltes, con 20 asociados.

Sociedad de Constructores de Calzado de Monforte de Lemos, con 50.

Ingresa directamente:

Sociedad de Oficios Varios de Huesca, con 25 asociados.

Total: 3 Secciones, con 95 afiliados.

Comunicar a la Federación Nacional de Dependientes de Comercio la conveniencia de celebrar a la mayor brevedad posible la reunión acordada por esta Comisión ejecutiva anteriormente, y la necesidad de que, mientras dicha reunión no se efectúe, se abstengan las organizaciones de dependientes de confeccionar bases de trabajo en los Jurados mixtos respectivos que obliguen a los empleados de oficinas, aunque presten sus servicios en establecimientos comerciales.

Esperar a que por el Comité nacional de la Federación Sidero-Metalúrgica se adopten acuerdos en relación con el problema planteado por los trabajadores de los arsenales de El Ferrol, para proceder de acuerdo con lo que el mencionado Comité nacional adopte.

Apoyar las aspiraciones de los radiotelegrafistas españoles, realizando cuantas gestiones se consideren necesarias en los departamentos ministeriales correspondientes. Del mismo modo, la Ejecutiva apoyará las gestiones que viene realizando la Unión de Viajantes de Comercio, a fin de lograr que se derogue una disposición de la dictadura que establece para ese gremio la colegiación obligatoria.

Esta Comisión ejecutiva acuerda seguir las gestiones comenzadas por la anterior cerca del jefe del Gobierno para que se esclarezcan los sucesos ocurridos en Letur, El Bonillo y otras localidades, solicitando la libertad provisional de los compañeros que sufren prisión en Valencia por los sucesos de El Bonillo, mientras que los presuntos culpables no han sido molestados por las autoridades respectivas.

De la misma forma que se ha hecho con los folletos relativos a la ley de Contrato de trabajo y de Asociaciones, se acuerda publicar un folleto relativo a la ley de Jurados mixtos.

Se acuerda comunicar a la Asociación Madrileña de Inválidos que no es posible acceder a su petición de ingreso en la Unión General, aunque cuente con el apoyo de esta Central sindical para cuantas peticiones o reclamaciones en justicia formulen.

A una carta que nos dirige el Sindicato Minero de Almadén solicitando el consejo de la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores en cuanto se refiere a la probable construcción de la Casa del Pueblo en aquella localidad, se contesta de conformidad con las observaciones que hacen en su carta aquellos camaradas.

A una comunicación de la Sociedad del Ramo de la Construcción con residencia en Ciudad Rodrigo se acuerda contestar que la Comisión eje-

cutiva no puede prestarle la fianza metálica ni personal que solicitan.

Se encomienda al compañero Celestino García, con motivo de su viaje a Cartagena, que realice gestiones, juntamente con la Federación Socialista Murciana, cerca de los camaradas de Pacheco, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, a fin de procurar solución en cuestiones de régimen interno que tienen planteadas.

Se designa al compañero Fermín Blázquez para intervenir en las diferencias existentes entre obreros de Asociaciones de la provincia de Granada pertenecientes a esta Unión General de Trabajadores.

Asimismo se pedirá a la Federación Provincial de Granada el itinerario de la campaña de propaganda que desea realizar; acordando prestarle la Ejecutiva su concurso.

De conformidad con las organizaciones interesadas, se nombra al compañero Cayetano Redondo para que tome parte en un acto de propaganda que la Sociedad Obrera de Oficios Varios de Cuéllar (Segovia) tiene proyectado celebrar.

A la compañera Regina García, para tomar parte en los actos de propaganda que piensa organizar el Centro Obrero de Alcira.

A la compañera Nelken, para que tome parte en el Congreso provincial de Guipúzcoa, a petición de la Agrupación de Dependientes Municipales de San Sebastián.

Al compañero Agapito García Atadell, para tomar parte en un acto de propaganda que organiza la Asociación de Dependientes de Carbonerías de Madrid.

Reunión del día 15 de diciembre.

Asisten los compañeros Besteiro, que presidió; Saborit, Martínez, García, Septiem, Muñoz y Trifón Gómez, como secretario.

Se concede el ingreso a los siguientes organismos:

Por conducto de sus respectivas Federaciones nacionales:

Sociedad de Canteros de Pozoblanco, con 20 asociados.

Sociedad de Albañiles de Almería, con 300.

Sociedad de Albañiles de Fregenal de la Sierra, con 20.

Sociedad de Albañiles de Tafalla, con 20.

Empedradores de Madrid, con 170.

Sindicato de la Aguja, Obreras Modistas, Costureras, Sombrererías, Sastras y Similares de Santander, con 85.

Sociedad Previsora, choferes, de Lugo, con 54. Obrera del Depósito de Máquinas del Norte, de Valencia.

Sindicato de Contratas del Ferrocarril del Norte, de Irún, con 38.

Empleados de Almacén de Albacete, con 27.

Obreros Cargadores y Descargadores de la Alhóndiga La Justicia, de Almería, con 33.

Zapateros de Villafranca de los Barros, con 50.

Electricidad-Aguas de Tomelloso, con 7.

Ingresa directamente:

Oficios Varios de Llanes, con 625 asociados.

Oficios Varios de León, con 80.

Unión General de Trabajadores de Agulo de Gomera, con 152.

Trabajadores de la Tierra de Espejo, con 300.

Obreros del Campo de Fuentes, con 90.

Obrera Unión y Trabajo de Mata de Alcántara, con 70.

Trabajadores de la Tierra de Monsalpe, con 76 asociados.

Agrupación Socialista de Benquerencia de la Serena, con 74.

Trabajadores de la Tierra de Cuzcurrita Aranda, con 26.

Trabajadores de la Tierra de Garlitos, con 33.

Unión General de Trabajadores de Sartaguda, con 153.

Obreros Agrícolas y Oficios Varios de La Nava de Santiago, con 150.

Trabajadores de la Tierra de Valdeolmillo, con 28.

Trabajadores de la Tierra de Grijota, con 120.

Trabajadores de la Tierra de Aldea del Rey Niño, con 14.

Trabajadores de la Tierra de Caracenilla, con 22.

Centro Obrero Socialista de Real de la Jara, con 210.

Trabajadores de la Tierra de Escarabajosa, con 50.

Trabajadores Agrícolas de Vallada, con 100.

Obreros del Campo y Pequeños Propietarios de Arandilla, con 23.

Sección de Artes Blancas de Daimiel, con 28.

Total: 34 Secciones, con 3.248 afiliados.

Una Sección no da el número de afiliados.

Darse por enterada de un escrito remitido por el presidente del Comité ejecutivo central del Cuerpo de Agentes Comerciales.

Publicar en el BOLETIN DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES el texto taquigráfico de las reuniones del Comité nacional, y gratificar con cien pesetas a cada una de las taquimecanógrafas que tomaron taquigráficamente las sesiones, y con cincuenta pesetas a la otra taquimecanógrafa que las ayudó a confeccionarlas.

Enviar una circular a todas las Secciones de la Unión General relativa a la cotización, conforme a los acuerdos del último Congreso.

El compañero secretario informa ampliamente de las gestiones realizadas con motivo de la huelga general declarada en la provincia de Salamanca y del estado actual de aquel conflicto; acordándose comunicar al Comité de huelga que se sigue con la mejor disposición de ánimo para ayudarles en la resolución del conflicto.

Informada ampliamente la Comisión ejecutiva de lo que ocurre en las provincias de Zaragoza, Valencia, Asturias, Ciudad Real y Murcia, y vista la gravedad de la situación que se denuncia además por varios organismos de las provincias interesadas por medio de cartas y telegramas, se acordó visitar al ministro de la Gobernación exponiéndole los casos de que tiene conocimiento la Comisión ejecutiva, y, a la vez, publicar en el BOLETIN una circular exhortando a las or-

ganizaciones de la Unión General para que contribuyan con alguna cantidad al fondo destinado para auxiliar a las víctimas ocasionadas por la fuerza pública.

Se aprobó la gestión de la Secretaría con motivo de un conflicto planteado en Callosa de Segura, y que no pudo resolver; autorizándola para que realice las gestiones pertinentes cerca del ministro de la Gobernación respecto al conflicto planteado en Santa Cruz de Tenerife.

Se acordó admitir a la Federación de Trabajadores de las Fábricas de Cervezas, Hielo y Gaseosas de España.

También se adoptó el acuerdo de socorrer a los compañeros o familiares que han resultado víctimas en los recientes sucesos.

Dar cuenta a la organización de Reinosa de la visita hecha al ministro de Marina, con el representante de la Federación Sidero-Metalúrgica, al objeto de que no se despidan más obreros por la Constructora Naval, entrevista que ha dado los resultados apetecidos, y escribir al ministro de la Gobernación en solicitud de que conceda alguna cantidad con destino a Reinosa para la Bolsa de Trabajo de aquella localidad.

Examinada una carta de la Federación Regional de Cataluña para que se cumpla lo acordado en el reciente Congreso, se acordó contestar que en fecha próxima podría constituirse el organismo regional, tan pronto como pueda confeccionarse el reglamento tipo para los organismos correspondientes.

Fueron examinadas las peticiones de oradores que se hacían por distintos organismos, facultando a la Secretaría para que resuelva de la mejor manera posible, en atención a los requerimientos que se hacen y según la importancia de los mismos.

Contestar al Sindicato Minero de Almadén estimando suficiente la presencia del compañero Ramón González Peña en aquella localidad para resolver, en representación de la Federación Nacional de Mineros, discrepancias que, por lo visto, han surgido en aquel Sindicato Minero.

El secretario adjunto informa ampliamente de la eventualidad de un conflicto en la provincia de Jaén, adoptándose los acuerdos pertinentes por si acaso el conflicto llegara a producirse.

Reunión del día 22 de diciembre.

Asisten los compañeros Saborit, que presidió; García, Septiem, Muñoz y Trifón Gómez, como secretario.

Se acordó conceder el ingreso a los siguientes organismos:

Por conducto de sus respectivas Federaciones de industria:

Sociedad de Albañiles de Porcuna, con 50 afiliados.

Sociedad de Cañistas Esparteros (Edificación) de Madrid, con 49.

Sociedad de Albañiles de Hornachos, con 24.

Empleados Municipales de Marbella, con 1.

Empleados Municipales de Vargas, con 2.

Empleados Municipales de Villaluenga de la Sagra, con 1.

Empleados Municipales de Maello, con 1.
 Empleados Municipales El 14 de Abril, de Palma de Mallorca, con 31.
 Empleados Municipales de Agreda, con 1.
 Empleados Municipales de Fortuna, con 4.
 Sociedad de Empleados de Arbitrios Municipales de Ubeda, con 40.
 Empleados Municipales de Maranchón, con 2.
 Empleados Municipales de Salas de los Infantés, con 2.
 Empleados Municipales de Zújar, con 4.
 Sindicato de Obreros de la plantilla fija del muelle El 14 de Abril, de La Coruña, con 33.
 Sociedad Obrera de Carga y Descarga El Nuevo Día, de Navia, con 100.
 Ingresan directamente:
 Sociedad Obrera de Artes Varias de Villanueva de Gómez, con 50 afiliados.
 Sociedad de Protésicos Dentales de Bilbao, con 38.
 Sociedad de Oficios Varios La Unión Obrera, de Puebla de Caramiñal, con 65.
 Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de Santa María de Ortigueira, con 49.
 Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de Oliva, con 60.
 Sociedad de Oficios Varios de Cantalejo, con 59.
 Sociedad Obrera de Oficios Varios de El Espinar, con 72.
 Trabajadores de la Tierra de Sada de Sangüesa, con 20.
 Trabajadores de la Tierra de Almudaina, con 30.
 Agricultores El Porvenir, de Tejada de Tiétar, con 35.
 Trabajadores de la Tierra de Adalia, con 29.
 Trabajadores de la Tierra de Villasquejida, con 25.
 Trabajadores de la Tierra de Moraleja de Coca, con 21.
 Trabajadores de la Tierra La Unica, de Diego Alvaro, con 60.
 Obrera Agrícola y Oficios Varios de Burguillos de Toledo, con 92.
 Obreros Agrícolas de Hinojosa de San Vicente, con 50.
 Obreros de la Tierra de Mérida, con 225.
 Agrupación Social de Oficios Varios de Casa de Lázaro, con 70.
 Obreros Vinicultores de Valdepeñas, con 45.
 Trabajadores de la Tierra La Villareja, de Villar de Corneja, con 15.
 Trabajadores de la Tierra de Rocaforte, con 27.
 Trabajadores de la Tierra La Segoviana, de Donhierro, con 37.
 Trabajadores de la Tierra de Hontangas, con 17.
 Obreros del Campo de Villamesías, con 100.
 Trabajadores de la Tierra de Villanueva de Perales, con 40.
 Asociación Socialista La Igualdad, de Guájzar-Zaraguit, con 150.
 Obreros del Campo de Benavente, con 82.
 Obreros del Campo y Oficios Varios La Redentora, de Botija, con 28.
 Trabajadores de la Tierra de San Carlos del Valle, con 48.
 Obrera Campesina de Fuentenebro, con 19.

Oficios Varios de El Viso, con 150.

Total, 47 Secciones, con 2.153 afiliados.

Se acuerda nombrar delegado de la Unión en la Junta de Aranceles y Valoraciones al compañero Martínez Hervás, presidente de la Federación de la Tierra.

Se dió cuenta a la Comisión ejecutiva de una carta del personal femenino de la Secretaría agradeciendo la gratificación concedida con motivo de las sesiones verificadas por el Comité nacional.

Se aprueba la gestión de Enrique Santiago en Manzanares y se le autoriza para que tome parte en otros tres actos de propaganda.

A propuesta del tesorero, compañero Muñoz, se acuerda hacer un millón de ejemplares de los estatutos en la Gráfica Socialista y adquirir el papel directamente de La Papelera para que sea uniforme.

La Secretaría da lectura al orden del día del próximo Congreso internacional de la Federación Sindical, que se verificará en Bruselas del 30 de julio al 3 de agosto venideros.

La Ejecutiva acuerda traducir la comunicación recibida y transmitírsela a los vocales del Comité nacional para que sus respectivas Federaciones la conozcan y puedan proponer hasta el 31 de marzo los temas pertinentes relacionados con algunos puntos del orden del día.

Asimismo se acuerda pedir documentación informativa del citado Congreso internacional a la Sindical para remitírsela, tan completa como sea posible, a las Federaciones de la Unión General.

Se aprueba la gestión de Secretaría, que dió por resultado resolver la huelga de Salamanca y evitar la de Jaén, como deseaba la Comisión ejecutiva.

También se aprueba la gestión hecha en favor de la organización de Ciudad Real, cuyos camaradas han regresado altamente satisfechos del apoyo encontrado en la Unión General.

No se acepta una invitación hecha por los mineros de Almadén, por considerar que el asunto corresponde previamente y por entero a la Federación nacional de la citada industria.

Se acuerda que Trifón Gómez vaya a Barcelona antes de ir a Ginebra y que durante su ausencia se encargue de la Secretaría el camarada tesorero, Antonio Muñoz, quien desde 1 de enero actuará en la Unión General en su nuevo cargo.

La Secretaría da cuenta de haber comenzado la organización de propaganda de acuerdo con las instrucciones dadas por la Comisión ejecutiva.

Reunión del 29 de diciembre.

Asisten los compañeros Besteiro, que presidió; Saborit, García, Martínez, Septiem y Trifón Gómez, como secretario.

Se acordó dar ingreso a los siguientes organismos:

Por conducto de sus respectivas Federaciones nacionales:

Sociedad de Albañiles de Villa Alhucemas, con 34 afiliados.

Sociedad de Albañiles de Torrenueva, con 33.
 Obreros Pintores de San Sebastián, con 70.

Ingresan directamente:

Sociedad de Oficios Varios de Torremejía, con 225 afiliados.

Trabajadores de la Tierra de Aldeaseca, con 15.

Trabajadores de la Tierra de Lodosa, con 55.

Trabajadores de la Tierra y Oficios Varios de Zarza de Granadilla, con 80.

Trabajadores de la Tierra La Esperanza, de Alburquerque, con 65.

Trabajadores de la Tierra de Garcibuey, con 36.

Socialista de Trabajadores de la Tierra de Hontava, con 25.

Trabajadores de la Tierra El Pato, de San Esteban de los Patos, con 40.

Unión General de Trabajadores, Agrícola, de Ribas (Egea), con 58.

Trabajadores de la Tierra de Montamarta, con 84.

Obrera El Trabajo, de Aguilafuente, con 54.

Casa del Pueblo Campesina de Polanco, con 45.

Pequeños Propietarios y Arrendatarios de Almedina, con 20.

Mozos de Labor de Villafranca de los Barros, con 100.

Ganaderos de Villafranca de los Barros, con 20.

Total: 18 Secciones, con 1.059 afiliados.

Tomar nota del resultado de la entrevista celebrada con el ministro de la Gobernación por los camaradas presidente y secretario de la Unión General, a fin de tratar de la situación social, extraordinariamente difícil, de Zaragoza y Valencia, del mismo modo que de la entrevista celebrada por el secretario adjunto y el compañero Lucio Martínez con el ministro de Agricultura para interesarle la solución de los asuntos planteados por las Federaciones de Comisionistas, Viajantes y Representantes del Comercio e Industria y Obreros en Piel.

Se autoriza al secretario adjunto para que, de acuerdo con la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra y alguna otra Federación, gestione cuanto se refiere a la adquisición del local para instalar los servicios de la Unión General de Trabajadores con sujeción al acuerdo tomado por su Comité nacional últimamente.

Como contestación a dos comunicaciones recibidas de la Asociación de Técnicos de la Edificación y Sindicato Nacional de la Arquitectura e Ingeniería, respectivamente, la Comisión ejecutiva se ratifica en sus acuerdos anteriores, lo que comunicará a las organizaciones interesadas.

Del mismo modo se acuerda contestar a una carta de Aserradores Mecánicos de Madrid en el sentido de que no procede la constitución de la Federación Nacional de Aserradores Mecánicos, y que, a juicio de la Comisión ejecutiva, deben ingresar en la Federación Nacional de la Madera.

Convocar a representantes de las Federaciones de la Edificación y de Metalúrgicos para tratar de algunas diferencias surgidas entre ambos organismos.

De conformidad con la propuesta de Biseladores de Lunas, se acuerda comunicar a las organizaciones de obreros vidrieros pertenecientes a

la Unión General si estiman pertinente constituir la Federación nacional de esa industria.

Aprobar la gestión de los compañeros Celestino García y Agapito G. Atadell con motivo de haber participado en actos de propaganda celebrados en Toledo y Salamanca, respectivamente.

Agradecer al compañero Antonio Cabrera el ofrecimiento que hace a la Comisión ejecutiva, y ayudarle económicamente en la campaña de información y propaganda que piensa realizar en quince pueblos del distrito de Infantes, de la provincia Ciudad Real.

Contestar a la Federación Obrera Montañesa la conveniencia de ponerse al habla con el compañero Andrés Saborit para señalar la fecha a fin de celebrar el acto de propaganda que tienen proyectado en Santander.

Comunicar a los diputados socialistas de la provincia de Murcia que pueden ostentar la representación de la Unión General de Trabajadores en la asamblea que piensa celebrar la Agrupación Socialista de Llano del Beal y algunas organizaciones de aquella localidad pertenecientes a la Unión General de Trabajadores.

Reunión del día 4 de enero de 1933.

Asisten los compañeros Besteiro, que presidió; Muñoz, Martínez, García, Septiem y Trifón Gómez, como secretario.

Se acordó dar el ingreso a los siguientes organismos:

Ingresan por conducto de sus respectivas Federaciones nacionales:

Sindicato Español de Mecánicos de Radioelectricidad de Aranjuez, con 23 afiliados.

Obreros de las Contratas Ferroviarias de Monforte de Lemos, con 60.

Obreros de las Contratas Ferroviarias de Alcázar de San Juan, con 42.

Sociedad de Panaderos La Espiga, de Guareña, con 20.

Sindicato de Trabajadores de la Madera, de León, con 65.

Acomodadores de Vitoria, con 26.

Acomodadores de Manzanares, con 10.

Acomodadores de Lugo, con 14.

Acomodadores de Sevilla, con 19.

Acomodadores de Cáceres, con 16.

Acomodadores de La Línea, con 30.

Obreros de Cinematógrafo de Zaragoza, con 37.

Mozos de Pista de Madrid, con 7.

Obreros de Cinematógrafo de Cádiz, con 30.

Acomodadores de Castellón, con 64.

Profesores de Orquesta de Sevilla, con 36.

Profesores de Orquesta de Santander, con 23.

Operadores de Cine de Murcia, con 19.

Sociedad de Representantes de Variedades de Madrid, con 40.

Acomodadores de Cádiz, con 10.

Acomodadores de Orense, con 14.

Acomodadores de Palencia, con 5.

Acomodadores de Murcia, con 17.

Obreros Escenógrafos de Madrid, con 37.

Apuntadores de Valencia, con 17.

Sociedad de Peluqueros Artísticos de Teatro de Madrid, con 17.

Coristas de Cataluña, de Barcelona, con 274.
 Actores de Valencia, con 122.
 Maestros Escenógrafos de Madrid, con 17.
 Profesores de Orquesta de Murcia, con 16.
 Profesores de Orquesta de Oviedo, con 64.
 Ingresan por conducto de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra:
 Trabajadores de la Tierra de Robleda, con 22 afiliados.
 Trabajadores de la Tierra de Cambrils, con 150.
 Unión de Obreros Agricultores de Vimbodi, con 182.
 Obreros de la Tierra de Granada, con 205.
 Agricultores de Herrería de San Andrés (Los Nogales), con 31.
 Obreros Agricultores de Instinción, con 35.
 Obreros Agrícolas La Concordia, de Santa Ana, con 95.
 Casa del Pueblo Campesina de Comillas, con 25.
 Obreros del Campo El Despertar, de Fuentes de Ropel, con 75.
 Obreros Ganaderos Unión General de Trabajadores de Hinojosa del Duque, con 20.
 Trabajadores de la Tierra de Villarta de los Montes, con 34.
 Trabajadores de la Tierra de Cabezamesada, con 61.
 Obrera Osa Mayor, de Almogía, con 130.
 Obreros Socialistas Trabajadores de la Tierra de Horcajo de los Montes, con 22.
 Agricultores y Oficios Varios de Gascuña, con 45.
 Trabajadores de la Tierra de Burjasot, con 27.
 Trabajadores del Campo de Estuveny, con 90.
 Trabajadores del Campo de Bocairiente, con 50.
 Trabajadores de la Tierra de Colmenar de Montemayor, con 190.
 Trabajadores de la Tierra de Sorihuela de Guadalimar, con 38.
 Agricultores de Santo Domingo (Olivenza), con 75.
 Trabajadores Agrícolas de Mezquitilla Algarrobo, con 32.
 Trabajadores de la Tierra de Milles de Polvorosa, con 24.
 Obreros Agricultores de Cervillejos de la Cruz, con 24.
 Obreros Jornaleros El Progreso Agrícola, de Don Benito.
 Agricultores de Pegalajar.
 Sociedad Campesina de Villafranca.
 Ingresan directamente:
 Federación Obrera de Vallehermoso, con 163.
 Sociedad Obrera de Ladrillar, con 100.
 Total, 60 Secciones, con 3.136 afiliados.
 El camarada Celestino García se halla, en representación de la Unión General de Trabajadores, en Asturias, para examinar, juntamente con el Comité ejecutivo del Sindicato Minero, la situación creada en la cuenca carbonífera.
 El secretario adjunto informa ampliamente a la Comisión ejecutiva de las conversaciones telefónicas sostenidas con el presidente del Sindicato Minero de Asturias, compañero Amador Fernández, como también de haber enviado al camarada Celestino García, atendiendo la petición que en

tal sentido hicieron aquellos camaradas, del mismo modo que de las gestiones realizadas cerca del ministro de Agricultura solicitando disposiciones de carácter legal que contribuyan a resolver el conflicto que amenaza nuevamente la tranquilidad en aquella región.

La Comisión ejecutiva, después de aprobar las gestiones del secretario adjunto, se congratula de las promesas hechas por D. Marcelino Domingo, esperando que se publiquen inmediatamente en la «Gaceta de Madrid» las disposiciones ofrecidas.

Se acuerda atender la petición de la Federación de Obreros y Empleados de Juntas de Obras de Puertos de España de dirigirnos al ministro de Obras públicas, camarada Indalecio Prieto, en solicitud de que se cumpla por el ministerio el contrato de trabajo establecido con la Federación antes citada.

La Comisión ejecutiva queda informada del resultado de las gestiones hechas por el secretario adjunto y una representación de la Federación de Comisionistas, Viajantes y Representantes del Comercio e Industria cerca de D. Marcelino Domingo, procurando la abolición del decreto que establece la colegiación obligatoria para los agentes antes mencionados.

Con determinadas indicaciones, que serán comunicadas a la Federación de Juventudes Socialistas de España, se acuerda acceder en principio al nombramiento de un representante de la Unión General de Trabajadores que forme parte, con voz pero sin voto, del Consejo director de la Escuela Juvenil Marxista que la citada Federación tiene acordado establecer.

El secretario adjunto da cuenta de las gestiones que viene realizando a fin de procurar resolver las diferencias que existen entre el Sindicato de Dependientes de Comercio de Madrid y la Sociedad de Mozos de Comercio, Transporte e Industrias en General, como también del Sindicato Metalúrgico y la Federación Local de la Edificación de Madrid.

Se acuerda atender los deseos manifestados por la Federación Nacional del Transporte Urbano, como igualmente la de la Sociedad de Aserradores, Afiladores, Tupistas y Labradores Mecánicos de Madrid, tomando el acuerdo de convocar a ambas organizaciones a una reunión para tratar de los asuntos que las mismas plantean.

La Comisión ejecutiva queda enterada y conforme con la actuación tenida, en su nombre y representación, por los compañeros Enrique Santiago y Julián Torres Fraguas en los actos de propaganda en que ambos compañeros han tomado parte.

A la vista los informes del compañero tesorero, la Comisión ejecutiva ha tomado acuerdos relacionados con las cuentas corrientes que la Unión General de Trabajadores tiene abiertas en determinados establecimientos.

Reunión del día 12 de enero.

Asisten los compañeros Saborit, que presidió; García, Septiem y Muñoz, como secretario.
 Se acordó dar los siguientes ingresos:

Por conducto de sus respectivas Federaciones nacionales:

Sociedad de Obreros Metalúrgicos y Similares El Avance, de Alicante, con 35 afiliados.

Agrupación de Obreros y Empleados Municipales de El Ferrol, con 180.

Municipales de Muros, Municipales de Cudillero y Municipales de Soto del Barco, con 21.

Municipales de Beas, con uno.

Municipales de Canillejas, con 19.

Municipales de San Sebastián de los Reyes, con 2.

Municipales de Colmenar de Oreja, con 3.

Municipales de Las Rozas, con 4.

Sociedad de Albañiles de Santisteban del Puerto, con 44.

Obreros Agrícolas La Defensa del Trabajo, de Las Grajeras (Alcalá la Real), con 30.

Trabajadores de la Tierra de Moya, con 44.

Trabajadores de la Tierra de Jabaloyas, con 20.

Obreros Agrícolas de Meneses de Campos, con 20.

Obreros Guardas del Campo Justicia Rural, de Cullera, con 33.

Obreros Agricultores de La Campana, con 10.

Trabajadores de la Tierra El Garbanzo, de Bernúy-Zapardiel, con 16.

Trabajadores de la Tierra El Orden, de Bernúy-Salineró, con 23.

Sociedad de Obreros Agrícolas de Baena, con 203 afiliados.

Total, 20 Secciones, con 708 afiliados.

La Comisión ejecutiva fijó su atención en las situaciones creadas en distintas localidades por los movimientos huelguísticos últimamente planteados. Vió complacida cómo las organizaciones de la Unión permanecen ausentes de los mismos, atentas a los acuerdos del último Comité nacional relacionados con las huelgas, cuyo cumplimiento estricto, como lo hacen hasta aquí, se acordó reiterar a todas por medio de la presente nota.

El camarada Celestino García dió cuenta, con un razonado y documentado informe, de su visita a la zona minera asturiana. Esta gestión fué aprobada, así como el informe.

Se leyeron diversas peticiones relacionadas con la propaganda y asistencia y representación de la Unión General de Trabajadores a diversos Congresos federativos. La Comisión ejecutiva resolvió que el camarada A. García Atadell asista al de la constitución de la Federación Provincial de Segovia y Antonio Septiem al que ha de celebrarse en Ciudad Real.

La propaganda es encomendada, principalmente, a diversos compañeros diputados.

Se recibió a una representación de la Ejecutiva del Partido Socialista, que expuso sus propósitos de ir rápidamente a la dotación de elementos materiales que faciliten la mayor difusión del diario del Partido.

La Comisión ejecutiva de la Unión acordó colaborar en las iniciativas que en este aspecto tome la Ejecutiva del Partido.

Se dió a conocer por Secretaría el comienzo de las obras de adaptación del local en donde

han de instalarse las oficinas de la Unión General de Trabajadores. Estas obras, breves y sencillas, quedarán prontamente ultimadas, y en su momento se comunicará a las Secciones la nueva dirección para que correspondan con la Unión General de Trabajadores.

A la Federación Provincial de Badajoz, que comunica la proximidad del consejo de guerra para juzgar los sucesos de Castilblanco, se acuerda enviarle mil pesetas para los gastos que se le ocasionen, y al propio tiempo instar a las Secciones de la Unión General a que voten cantidades con destino a los dispendios que el proceso ha de ocasionar.

Reunión del día 19 de enero.

Se acordó dar ingreso a los siguientes organismos:

Por conducto de sus respectivas Federaciones de industria:

Artes Blancas de Aguilar de Campoo, con 35 afiliados.

Artes Blancas de San Esteban de Gormaz, con 52.

Sociedad de Constructores de Cuerdas de Guitarra La Armónica, de Madrid, con 86.

Sindicato Metalúrgico y Fontaneros de León, con 72.

Metalúrgicos y Similares de Amurrio, con 72.

Peluqueros de Señoras de Zaragoza, con 28.

Peluqueros-Barberos de Murcia, con 32.

Peluqueros-Barberos de Aguilas, con 19.

Peluqueros-Barberos de Valdepeñas, con 25.

Peluqueros-Barberos de Guadalajara, con 22.

Sociedad de Oficiales Peluqueros-Barberos de San Sebastián, con 60.

Ramo de la Edificación de Grado, con 20.

Sociedad de Camareros de El Escorial, con 40.

Sociedad de Camareros de Villanueva de la Serena, con 18.

Sindicato Unión Fabril (Cerveceros) de San Sebastián, con 27.

Sociedad de Obreros Cerveceros de Jaén, con 14.

Obreros Cerveceros y Gaseosas de Vigo, con 65.

Sociedad Obreros Cerveceros y Similares (grupo con León) de Valladolid, con 47.

Obreros Cerveceros y Similares de Salamanca, con 15.

Sociedad de Obreros Agrícolas de Sahagún, con 280.

Sociedad de Albañiles (reingreso) de Almoradí, con 46.

Ingresan directamente:

Centro Unión de Trabajadores de Villarrubia de los Ojos, con 49 afiliados.

Unión de Trabajadores de la Diputación provincial La Democracia, de Murcia, con 60.

Oficios Varios (Edificación) de Seijo.

Total, 24 Secciones, con 1.186 afiliados.

Dirigidnos la correspondencia a FERNANDEZ DE LA HOZ, 51.